



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

**MORIR EN LA MIXTECA: EL ASESINATO DE BETY CARIÑO Y
JYRI JAAKKOLA, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS**

REPORTAJE ESCRITO

**PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO**

**PRESENTA:
CECILIA BALDERAS CARRILLO**

**ASESOR:
LIC. ALBERTO FERNÁNDEZ DE LARA QUESADA**



FES Aragón

Nezahualcóyotl, Estado de México, 2015



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Dedicatoria

*Para Aurora:
tenaz, perseverante, guerrera.*

Agradecimientos

Mi profunda gratitud a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por haberme dado la oportunidad de formarme profesionalmente en sus aulas; es un orgullo para mí haber egresado de la máxima casa de estudios de nuestro país.

Agradezco en particular a la Facultad de Estudios Superiores Aragón que fue como un hogar los cuatro años de la licenciatura, así como a los profesores que tuvieron gran influencia en mí: el Lic. Marco Antonio Plascencia, Lic. Humberto Fernández de Lara Quesada y el Dr. Édgar Liñán.

Quiero agradecer a mis sinodales, al Lic. José Aguilar Becerril, la Mtra. Verónica Almanza Beltrán, el Mtro. Carlos García Benítez y el Mtro. Eduardo Antonio León Ibarra por las opiniones vertidas; sus aportaciones fueron fundamentales para pulir el presente trabajo y presentarlo de la mejor manera posible.

No tengo palabras para expresar cuán agradecida estoy con mi asesor, el Lic. Alberto Fernández de Lara Quesada; su dedicación, empeño, profesionalismo, y sobre todo su profunda sensibilidad, fueron claves para el tratamiento y confección del reportaje. Toda mi admiración y respeto, profesor.

Agradezco profundamente a quienes, sin reticencia alguna, me han permitido ser parte de sus vidas y aprender con cada uno de los momentos que compartimos, mis amigos: Francisco Godoy Cortés, Nancy Mireya González Hernández, Berenice Hernández Aguilera, Juan Marcial Copado (QEPD), Olivia Márquez Sánchez, Mario Medina Martínez, Gerardo Romero Hernández, Cynthia Salazar Santiago, Yazmín Torres Salazar, y particularmente a Miguel Alejandro Rivera Pedroza; gracias por tolerar mi intolerancia y hacer más llevadera esta realidad.

A Miguel Ángel Dávila Espinosa, por el tiempo compartido, las experiencias, las enseñanzas, el apoyo y el cariño; por leerme y siempre estar dispuesto a dar una opinión crítica. Por impulsarme a ser mejor persona. Gracias.

Mi gratitud a Omar Esparza Zárate y a quienes compartieron sus testimonios; el tema sigue siendo doloroso, y por ello sé que no cejarán en la búsqueda de justicia.

Por último, pero no por ello menos importante, quiero agradecer profundamente a mi familia por su apoyo y amor incondicional.

A mis padres, Margarita y Martín: gracias mamá por ser la persona más noble y amorosa que conozco, por nunca dudar de mí y por infundirme día a día las fuerzas necesarias para salir y perseguir mis sueños; gracias papá por demostrarme, con tu ejemplo, que somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos con dedicación, trabajo duro y empeño. No tengo con qué pagarles todo lo que han hecho por mí.

A Gerardo, mi hermano, por enseñarme que el cielo es el límite, por ser mi ejemplo y sobre todo, por regalarme –junto a Bere, su esposa- la dicha de ser tía de Natalia, su voz, sus risas y su mirada me devuelven la fe.

A Aurora, mi hermana, por ser, por existir y por infundirme fuerza cuando más lo necesito; gracias por tus abrazos y compañía, por tus palabras, por ser una guerrera. Estoy sumamente orgullosa de ti.

A Camerina, mi tía, por ser como una segunda madre, por los cuidados, la dedicación y el cariño. Gracias por estar a mi lado.

Familia, ¡mil gracias por todo!, siempre estaré en deuda con ustedes. Los amo.

“Yo recorría las calles con el periódico en las manos, pero nada parecía haber ocurrido, el mundo seguía igual. Ellos habían muerto y la gente transitaba en la ciudad como siempre. ‘¿Esto es el mundo?’, me preguntaba con dolor, con lágrimas que no me dejaban mirar claramente. Me preguntaba si así es la realidad, tan fría, tan imposible de doblegar, de conmover”.

Carlos Montemayor, *Las mujeres del alba*

Índice

Presentación

I. El asesinato	pág.
Los preparativos de la caravana	11
“No quiero héroes”	16
“Si no me comunico contigo, nos empiezas a buscar”	23
“A ti sí te mato, para que ya no vivas en esa miseria”	40
Hecho una mierda...	48
II. Bety Cariño y Jyri Jaakkola	
“Un campesino sin tierra no existe...es un campesino muerto”	53
“Yo no soy yo, soy muchas”	58
El otro crimen	64
Jyri y el llamado del sur	68
“Si con mi sola presencia puedo prevenir la violencia, lo haría”: Jyri	73
III. Segunda caravana	
El tema triqui en el Congreso	78
<i>Caravana humanitaria Bety Cariño y Jyri Jaakkola</i>	88
Condenas, denuncias, desplegados...burocracia	94

Retén y disuasión: la caravana no avanza	106
IV. La investigación: Ubisort en la mira	
Fuero común, fuero federal: ineficacia compartida	114
El seguimiento europeo	126
“La moneda está en el aire. No queda más que encomendarse a Dios”	138
Impunidad: única constante a cuatro años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola	155
Consideraciones finales	168
Fuentes de consulta	171

Presentación

La tarde del martes 27 de abril de 2010, dos familias, a cientos de kilómetros de distancia entre sí, y que hasta ese día parecían no tener nada en común, fueron unidas por un mismo dolor: la pérdida de un ser querido.

Alberta *Bety* Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, defensores de derechos humanos, fueron asesinados por un grupo armado que emboscó a la caravana humanitaria en la que participaban, y que tenía como objetivo entregar alimentos, medicinas y ropa a los habitantes del autodenominado Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, en la región de la Mixteca.

Al día siguiente del ataque -que también tuvo como consecuencia la desaparición de dos reporteros por más de 60 horas y varios heridos de bala- algunos medios de comunicación dieron cuenta del atentado; un puñado de políticos “condenó enérgicamente” la agresión y organizaciones civiles, e incluso la comunidad internacional, exigieron al gobierno estatal y federal llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias.

Este trabajo recoge las voces de activistas y reporteros que formaban parte de la caravana, que fueron testigos de los asesinatos, y también, blancos de la agresión.

Narra y describe el momento en que se produjo la emboscada y da cuenta de las vicisitudes que los caravaneros sortearon para salvar sus vidas, a pesar de que muchos de ellos fueron capturados por el grupo de encapuchados que, por varias horas, los mantuvo retenidos y amenazados con armas largas.

Con testimonios de familiares y material audiovisual que se ha hecho público tras los asesinatos, y que se recoge en este trabajo, podemos saber quiénes fueron *Bety Cariño* y *Jyri Jaakkola*: sus sueños, ideales, esperanzas y compromiso social que los llevaron a perder la vida en su intento por ayudar a una comunidad indígena, históricamente olvidada y soslayada por el Estado mexicano, a excepción de cuando sus votos son necesarios para legitimar a representantes de elección popular de la región.

Contrario a otros crímenes, el asesinato de Bety y Jyri –este último de nacionalidad finlandesa- se ha mantenido en la “agenda nacional”, gracias a la presión que organismos internacionales han realizado incluso después de las elecciones en Oaxaca y a nivel federal; pues cabe recordar que el atentado se registró en los últimos días de la administración de Ulises Ruiz Ortiz, en la entidad del sureste y mientras Felipe Calderón encabezaba su “guerra” contra el crimen organizado.

Sin embargo, Peña Nieto ha sabido sortear los inconvenientes y la presión que la presencia de eurodiputadas -que en por lo menos cuatro ocasiones han viajado a nuestro país- podría representar para su administración, luego de que las legisladoras declararan su intención de llevar el caso a tribunales internacionales.

Para la elaboración de este documento, además del análisis y jerarquización de la información recabada, se echó mano de la crónica y la entrevista para articular un reportaje descriptivo-narrativo por su forma de discurso, que proporcione al lector, además de un texto interesante, la oportunidad de reflexionar sobre otra de las problemáticas en auge de nuestros días: la agresión a defensores de derechos humanos.

A través de este reportaje se pretende llenar ciertos vacíos informativos en relación al tema; por ejemplo, los motivos que desencadenaron el ataque a la caravana humanitaria, el proceso de investigación y las conclusiones a las que han llegado las autoridades oaxaqueñas, así como el seguimiento que ha dado la Unión Europea a este caso.

En el contexto nacional que vivimos, donde son cada vez más frecuentes las notas periodísticas que documentan la agresión a defensores de derechos humanos, resulta pertinente documentar el asesinato de Bety y Jyri por la necesidad de visibilizar el entorno político y social en que promotores y observadores hacen su trabajo, en particular en una entidad con bajo índice de desarrollo humano y promoción de derechos fundamentales, como Oaxaca.

En el aspecto jurídico, también es imprescindible conocer las acciones que dos administraciones estatales -la de Ulises Ruiz Ortiz, del PRI y ahora la de Gabino Cué Monteagudo, quien arribó a la gubernatura a través de una candidatura por la coalición de oposición conformada por el PAN, PRD, PT y Convergencia- han llevado a cabo para presentar ante las instancias pertinentes, a él o los responsables de los homicidios.

El asesinato de Cariño y Jaakkola no es, desgraciadamente, un tema aislado en nuestro país. Hay denuncias de varias decenas de periodistas y defensores de derechos humanos que han sufrido amenazas, atentados o que han sido asesinados sin que hasta la fecha haya responsables purgando sentencia alguna; o peor aún, que las víctimas sean criminalizadas en aras de que su labor social no sea una de las líneas de investigación a tratar.

Es necesario dejar constancia periodística de esta problemática y difundirla. La organización de la sociedad, y la presión que la misma puede hacer en los diferentes niveles de gobierno serán trascendentes para evitar que hechos tan lamentables como éste se vuelvan cotidianos y recurrentes, hasta el punto en que a nadie más le sorprendan o le importen.

Si el presente reportaje incita a los lectores a interesarse en el tema, habrá cumplido su cometido.

I. El asesinato

Los preparativos de la caravana

Eran cerca de las 10 de la mañana del martes 27 de abril de 2010 cuando comenzaron a reunirse varios grupos de personas en la Plaza de la Libre Expresión, ubicada frente al palacio municipal de Huajuapán de León, Oaxaca.

Hacía calor, un calor seco, sin aire, como únicamente se puede sentir en la Mixteca Oaxaqueña.

La presencia de varios güeritos llamó la atención. Sin lugar a duda no eran paisanos.

La palidez de su piel, la sensibilidad de sus ojos verdes y azules ante la luminosidad de “la tierra del sol”, como la llama José López Alavez en la *Canción Mixteca*, solamente podía ser disimulada con enormes anteojos negros.

El paso de los minutos traía consigo el incremento de la audiencia. El Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), entre otras organizaciones sociales, habían anunciado días atrás la salida de una caravana de paz rumbo a San Juan Copala, con la intención de entregar alimentos y medicamentos para la población indígena.

En 2007, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), promovió que San Juan Copala se declarara municipio autónomo; sin embargo, ni el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), ni la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisor), estuvieron de acuerdo con esta resolución y comenzaron a acosar a la comunidad.

Los víveres y las medicinas eran esperados con urgencia en la zona. Desde mediados de diciembre de 2009, la población de San Juan Copala vivía en la zozobra por la presencia de grupos fuertemente armados que impedían a

cualquier persona la entrada o salida de la población, incluso para trabajar sus tierras o trasladarse a algún municipio vecino ante alguna emergencia.

Vivían con miedo a las sombras, a los ruidos extraños, a la posibilidad de ir caminando por una vereda y escuchar un balazo, sentir un calor profundo en alguna extremidad, percatarse de estar heridos, ver a su cuerpo despojarse de su propia sangre al momento de caer de rodillas y cerrar para siempre los ojos. Temían a la muerte.

Autoexiliados en sus pequeños jacales de adobe, los habitantes de Copala solamente podían esperar que alguien les proporcionara ayuda.

Fernando Urbano Morales, coordinador de CACTUS, recuerda que además de la entrega de alimentos y medicinas la caravana tenía otro objetivo: evidenciar la situación que se vivía en la zona.

Aunque se habían hecho denuncias públicas y se emitieron comunicados de prensa en los que se advertía de la violencia contra los pobladores de la comunidad, ni el gobierno de Oaxaca ni el federal, habían dado muestra de interesarse en el tema.

“El momento que políticamente vivía Oaxaca era sumamente complicado”, recuerda Fernando Urbano, joven de tez morena, de no más de 30 años, mientras toma un trago de agua mineral: “el gobierno de Ulises Ruiz estaba terminando, él no iba a aceptar que se hiciera una acción de este tipo. Nos estaban monitoreando y prueba de eso es que había presencia de personal de la Delegación de Gobierno en el parque”.

La caravana planeada con seis semanas de anticipación y a la que se sumaron activistas y defensores de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, al enterarse de la convocatoria, fue tomando forma.

Los organizadores y quienes participarían en ella denunciaron ante los medios de comunicación que se dieron cita en la plaza, el amedrentamiento del que eran objeto antes de siquiera abordar los vehículos que los conducirían a la comunidad.

Un día antes, el 26 de abril de 2010, Rufino Juárez Hernández, líder de la Ubisort, organización con presencia en San Juan Copala y comunidades vecinas y que desde su formación en 1994 ha tenido nexos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), declaró en una entrevista radiofónica que no permitiría el ingreso de “personas ajenas” y que no se hacía responsable de lo que pudiera ocurrir.

“No sabíamos que pudiesen tener tanta capacidad de ejercer presión y que terminara con el asesinato de dos compañeros...en la historia de las caravanas nunca había pasado esto; las caravanas han sido una forma, un medio, para visibilizar conflictos. Nosotros decíamos: se tiene que lograr visibilizar el tema. Apostábamos por una reacción de la sociedad civil para ejercer presión”, recuerda Fernando.

La caravana partió alrededor de las 11 de la mañana y estaba integrada por al menos cinco vehículos: en la vanguardia iba una camioneta blanca tipo suburban con una manta para su identificación. En este vehículo viajaban observadores internacionales, entre ellos Jyri Antero Jaakkola, reporteros locales, activistas de la ciudad de Oaxaca y Bety Cariño.

También se sumó un auto compacto color azul en el que se trasladaban dos reporteros de la revista *Contralínea*: Érika Ramírez y David Cilia.

Una camioneta negra tipo Jeep era el tercer vehículo; en ella iban David Venegas y Noé Bautista, integrantes de VOCAL, así como profesores de la Sección 22.

Algunos testimonios sitúan en esa camioneta a Omar Esparza Zárate, pareja de Bety Cariño y dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

Varios más confirman la participación de otros dos automóviles, sin que se conozcan más datos o características de los mismos.

Las primeras dos horas del viaje, parecía que todo iría bien. No se registraban movimientos extraños en la carretera de Huajuapán de León a Juxtlahuaca, cabecera distrital más cercana a la zona triqui.

En Santiago Juxtlahuaca se detuvo por primera vez la caravana. A ninguno de sus integrantes le pareció extraño que tuvieran que abastecer de combustible las unidades. La mayoría bajó de los automóviles.

Kilómetros más adelante, en los límites de la zona triqui, en inmediaciones de una comunidad llamada Agua Fría, la caravana volvió a detenerse. Esta vez fue para repartir entre sus integrantes, radios de comunicación, pues esa zona carece de señal para celulares. También colocaron banderas blancas en ambos costados de la suburban.

Los organizadores dieron una instrucción muy precisa: “si hay piedras, palos o algo bloqueando el camino, regresamos”.

“Alcanzamos a tomar ciertas precauciones. No era una situación que se tuviese prevista. Lo más que uno se imagina, es que pongan un contingente y que pueda haber una confrontación con palos, piedras, pero no a este nivel”, comentó Urbano Morales, quien por problemas familiares, no participó en la caravana.

Él se encontraba en la ciudad de Puebla de los Ángeles, su madre, una mujer mayor, se encontraba muy enferma. A pesar de los kilómetros de distancia, Fernando estaba muy atento al desarrollo de la caravana.

Antes de que la caravana partiera de Huajuapán, Fernando habló con Bety: “ya nos vamos, Fer”. Las palabras de quien fuera su maestra aún tienen eco en la memoria de Urbano, “hablamos en la noche y te cuento cómo nos fue”, le dijo vía telefónica. Esa comunicación ya no fue posible.

Tras la segunda parada en Agua Fría, la caravana se partió. Los dos últimos vehículos no siguieron adelante. Un ocupante de la suburban afirma que quienes viajaban en dichos vehículos dijeron que esperarían al resto de la caravana al otro lado del pueblo.

La suburban blanca, el carro con los reporteros y la camioneta negra continuaron el camino. Instantes más adelante observaron que la carretera estaba obstruida por piedras, palos y troncos.

Una voz de la suburban dijo: “está bloqueado, tenemos que regresar”. Parecía que todo había terminado, que la intención de romper el cerco a la comunidad no se podría completar, que lo único que quedaba era girar, regresar y que los habitantes de la zona tendrían que esperar más tiempo por alimentos.

Un disparo alertó a la caravana. En fracción de segundos, una lluvia de balazos caía sobre los vehículos. Uno de ellos se impactó en el parabrisas de la suburban. Se escuchaba el silbar de las balas, vidrios rotos, gritos. El conductor de la camioneta blanca intentó maniobrar para salir del camino, pero la cercanía con los otros vehículos impidió que lo lograra. Seguían los disparos que parecían provenir de un montículo de tierra ubicado a aproximadamente 200 metros de la carretera.

Por un lapso de 10 minutos continuaron las balas. Una de ellas perforó el cráneo de Bety Cariño, quien se encontraba en la parte trasera de la suburban, luego de cambiar de asiento con otro activista que viajaba en el mismo vehículo. Hasta la parada en Agua Fría, Bety viajaba como copiloto. Se desvaneció. Los informes forenses realizados posteriormente indicarían que murió instantáneamente.

Otra bala se impactó en su cuerpo. La sangre tibia comenzó a correr por el piso de la suburban. Jyri Jaakkola trató de ayudarla. La protegió con su propio cuerpo. Tenía las manos llenas de sangre. Jyri levantó el torso. Mientras pensaba o intentaba reaccionar, una bala lo alcanzó. Se desplomó.

Los balazos cesaron un momento. Alguien dijo: “hay que salir. Están recargando. Nos van a matar”. Como pudieron, el resto de las personas que acompañaba a la caravana descendió de los vehículos. El instinto les decía que debían correr. La mayoría lo hizo hacia el monte.

Los vehículos quedaron varados sobre la carretera. Había sangre, vidrios rotos y un profundo silencio luego de los disparos. Dos cuerpos yacían inertes al interior de la suburban.

“No quiero héroes”

Joel Gálvez Vivar, reportero en 2010 del periódico oaxaqueño *El despertar*, iba en la suburban blanca que encabezó la caravana. “El escudo humano”, la llamó.

Abogado de profesión, tiene más de 20 años ejerciendo el periodismo.

“Quizá fui el último que abordó la camioneta”, recuerda el reportero mientras diluye una bolsita de azúcar en su taza de café americano. “No recuerdo la hora exacta, pero cuando llegué, ya estaba llena la suburban”.

El medio para el que colaboraba no fue convocado a la conferencia de prensa que se realizó en la Plaza de la Libre Expresión, previa a la salida de la caravana, ni a cubrir la misma. Se enteró de ambas a través de Alfredo Martínez de Aguilar, director de *El despertar*.

“Hay una caravana, ¿qué dices?, pero no quiero héroes”, repite Joel, palabra por palabra, las pronunciadas por su jefe. El reportero ni siquiera lo pensó, de inmediato decidió sumarse a la caravana, sabía que pasara lo que pasara, habría nota.

El trayecto hasta una gasolinera de Santiago Juxtlahuaca se realizó sin mayor novedad. Ahí cargaron combustible y los ocupantes de los vehículos descendieron, intercambiaron saludos, palabras de cortesía. Joel recuerda que no conocía a la gente que iba en la suburban, pero confiesa que tampoco le interesaba. Kilómetros más adelante, en la comunidad de Agua Fría, volvieron a detenerse.

Alguien comentó que no había condiciones para seguir rumbo a Copala, pero decidieron continuar el recorrido e intentar llegar.

Minutos más tarde, en la suburban se escuchó una voz que alertaba sobre la presencia de piedras en el camino. Alguien más añadió: “hay gente armada”.

Otra voz dijo: “vamos compañeros, tomamos fotos y nos regresamos”. Eran alrededor de las dos de la tarde.

La caravana avanzó un poco más y faltando escasos metros para llegar a donde se encontraba bloqueada la carretera, fue atacada.

Joel entrecierra los ojos y recuerda que el sonido que producían las balas, era como la lluvia, una lluvia muy intensa, con granizo. Su primera reacción fue tirarse al piso de la camioneta: “creo que por mi baja estatura me acomodé”, dice nervioso, mientras un intento de sonrisa no acaba de dibujarse en su rostro moreno, cansado, con visibles arrugas que evidencian su más de medio siglo de vida.

El reportero se talla la cara con la mano izquierda, parpadea insistentemente y bebe un sorbo de su café. Recuerda las voces, voces que gritaban de pánico por las balas que seguían cayendo sobre la camioneta. Segundos después hubo un silencio abismal, cesaron las balas. Una voz sin rostro ni nombre emergió: “vámonos de reversa, si recargan, nos matan a todos”.

La camioneta trató de ir en reversa, pero dos vehículos que estaban detrás de ella impidieron la maniobra. Se escuchó un golpe. Comenzó a correr sangre en el piso de la camioneta. Cuando el vehículo se detuvo por completo, Joel vio que las puertas estaban abiertas, no supo quién las abrió. Trató de llegar hacia ellas empujándose con los pies, a rastras.

Al salir de la camioneta, Gálvez trató de ponerse de pie, pero una persona, a quien no logró identificar, lo jaló de la camisa y le dijo que se agachara. Se agachó. No sentía las piernas, se creía incapaz de correr, pero lo hizo en dirección al monte. Detrás de él, un hombre con pantalón de mezclilla y playera roja le dijo: “vámonos porque nos van a venir a matar”.

Ambos corrieron, Joel cayó en repetidas ocasiones, pero lograba levantarse y seguir, su compañero de huida iba varios metros delante de él. Volvió a caer, el hombre de la playera roja detuvo su carrera, regresó sobre sus pasos y lo jaló, lo arrastró y le gritó que tenían que seguir corriendo.

“Recuerdo que me puso pasto en la boca, cortó pasto de ese que había ahí en el suelo y me dijo: ‘¡vámonos!’”.

A la distancia seguían escuchándose los disparos. Mientras corrían, Joel estaba seguro que de ser alcanzados, los asesinarían. No podía ni hablar. Siguieron por el monte hasta que encontraron un río. El hombre de la playera roja no dudó en aventarse al agua y Joel lo siguió. Ahí tomaron agua, mucha agua, recuerda el reportero.

Siguieron desplazándose por el río hacia el norte, por donde estaban seguros se acercarían a Santiago Juxtlahuaca. Después de caminar por largo tiempo y sin tener certeza de cuántos kilómetros habían avanzado, encontraron un manantial con abundante agua.

Joel ríe nervioso, agrega más azúcar a su café americano y agita repetidamente para diluirla. Confiesa que no sabe nadar y que tuvo mucho miedo cuando vio que el hombre de la camisa roja se adentró al manantial y que el nivel del agua poco a poco parecía tragárselo.

“Me gritó: ‘¡vente!’. ‘Me voy a ahogar’, le dije y él me respondió: ‘de todos modos nos van a matar’. Me dejé ir hacia el manantial y le dije: ‘¡vámonos!’”.

Al otro extremo del manantial había una peña de aproximadamente cuatro metros de altura, por ella bajaba mucha agua, “como en una cascada”, recuerda Gálvez.

El hombre de la playera roja ayudó a Joel a nadar hasta la orilla de la peña. Ahí se quedaron unos momentos, sentados, escurriéndose y observado el entorno. Ya no se escuchaban disparos, ruidos de automóviles o gritos; por el contrario, el ruido que producía el agua al caer, el viento meciendo las hojas de los árboles y uno que otro silbido de pájaros, hacía el lugar realmente apacible.

Empezaron a escalar la peña. El hombre desconocido iba adelante, subía algunas piedras, se acomodaba y volteaba para jalar a Joel. “Lo raro es que me jalaba solo con las puntas de los dedos”, dice Joel mientras dobla los dedos de sus manos en forma de garras y las entrelaza para mostrar la maniobra. “Yo pienso que debía haberme jalado así”, y mueve las manos para que su mano izquierda sujete su muñeca derecha y viceversa. “Me agarré para subir porque pensé que si me llegaba a soltar caería al agua, y como no sé nadar, ahí quedaba”.

El reportero se queda callado, pensativo y reflexiona: “él no se iba. Mientras subíamos, yo traté de jalarlo de los pies para que no se alejara mucho. Subía, se acomodaba y se inclinaba para jalarme, me daba la mano, me jalaba con los dedos y lo único que yo hacía era apretarlo. Él no se iba”.

Cuando terminaron de subir la peña y salieron del río, siguieron caminando sin alejarse mucho de la corriente. Comenzaba a oscurecer cuando a lo lejos, Joel vio un jacalito hecho de adobe, antiguo, con un techo amplio formado con hojas de plátano que sin duda les proporcionaría sombra.

Titubearon unos segundos, pero decidieron acercarse. No había nadie en él, parecía abandonado. A su alrededor crecía un frondoso pasto verde que sirvió para que ambos se tumbaran a descansar un rato.

“De repente escuché ruidos y pensé: ya nos mataron”, dice Gálvez al momento de comenzar a frotarse las manos que han empezado a sudarle, “saqué mi credencial de reportero de *El despertar*, la tenía en la mano, los ruidos parecían acercarse, invoqué a la Santa Muerte, le dije: ‘cuídame’. A Jesucristo le dije: ‘señor, estoy en tus manos. Sálvame. No vine a ser noticia, sino por noticia. Todavía no es mi tiempo, señor Jesucristo, aún tengo mucho que escribir”.

Joel recuerda haber hecho oración en voz baja, con su credencial en la mano derecha y a la espera de que emergieran sus verdugos del monte; pero quienes llegaron, también agotados por correr tratando de salvar sus vidas, fue una joven esbelta, de poco más de 20 años y un extranjero a los que Joel nunca pensó preguntarles sus nombres.

La joven, quien posteriormente fue identificada como Mónica Citlali Santiago Ortiz, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), presentaba una herida superficial en la espalda, provocada por una esquirla de bala. La camiseta blanca que portaba se encontraba visiblemente manchada de sangre.

Los cuatro decidieron seguir caminando para tratar de encontrar alguna forma de salir del monte. A lo lejos se escuchaba ruido de vehículos, por lo que se dirigieron

a lo que supusieron era una carretera. Efectivamente, la encontraron a los pocos minutos de caminata. Cruzaron la carretera uno por uno: primero cruzó el hombre de la playera roja, luego la muchacha, el extranjero y, por último, el reportero.

“Yo iba cubierto de sangre, pero la sangre no era mía, por fortuna de Dios”, dice Joel al pasar sus manos por la camisa color crema y de manga corta que trae puesta. Casi imperceptibles son las delgadas líneas blancas que al tocarse perpendicularmente forman cuadros pequeños y otros más grandes en la tela.

Ya estando del otro lado, vieron pasar tres camionetas tipo “estacas”, que son muy utilizadas en el campo. Tienen una pequeña cabina en la que pueden viajar máximo tres personas, la batea es amplia y a la mayoría les han adaptado asientos hechos con madera y fierros viejos para ser ocupadas como vehículos de transporte. Las menos, permanecen con su forma original y son útiles para transportar mercancías de pueblo en pueblo, para la venta en las plazas de los domingos, de las cabeceras municipales.

Pidieron raid extendiendo el brazo y silbando. Joel ríe y mueve la cabeza haciendo un movimiento negativo: “¿sabes qué nos hacían?, nos hacían así”, cierra su mano derecha para formar un puño, levanta el dedo medio y acerca el pulgar para evitar que su dedo índice se mueva. “Así nos hicieron. Ellos sabían lo que pasaba en esa zona y no se detuvieron”.

Al paso de algunos minutos escucharon la sirena de una ambulancia; a lo lejos observaron que se acercaba hacia ellos. Joel se acercó más a la carretera, alzó la mano y el vehículo frenó inmediatamente.

“¿Hay heridos?”, preguntó un paramédico descendiendo de la ambulancia. “La muchacha”, contestó Joel, “¿es tu compañera?”, inquirió el rescatista, “no”, dijo tajante el reportero.

Los paramédicos revisaron a la joven. Joel les pidió agua, pero le dijeron que era mejor que bebiera un suero. Caminaron hacia la ambulancia. Gálvez tenía mucha sed. A la distancia, volvieron a escuchar disparos.

El periodista preguntó de dónde venían y el chofer de la ambulancia contestó que de Copala. Le contó que había muertos y que “estaban ahí, tendidos”. Según dijo, pudieron pasar y brincar las piedras porque a ellos, la gente armada de la zona no les hacía nada, aunque alguna vez habían ido a disparar en la fachada del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Santiago Juxtlahuaca, el único de la localidad. Eran cerca de las seis de la tarde.

Seguían escuchándose los disparos y Joel pensó que irían por ellos, pero el chofer lo calmó y le dijo que nadie les haría daño. Preocupado, el hombre de la playera roja les dijo que tenía que regresar porque necesitaba saber dónde estaban los demás. Trataron de convencerlo de que se quedaran todos juntos, pero no los escuchó, comenzó a correr en sentido contrario y el chofer trató de alcanzarlo. Ambos se perdieron a la distancia.

Instantes después regresó solo el chofer. Les contó que el hombre de la playera roja insistió en regresar hacia Copala, pero él no quiso arriesgarse a seguirle y optó por volver. Nadie se enteró si había encontrado a quien buscaba o si tomó un rumbo diferente. Los tripulantes de la ambulancia, la joven con la esquirra de bala, el extranjero y Gálvez subieron al vehículo y se dirigieron hacia Juxtlahuaca.

En el camino de regreso, Joel pidió que lo dejaran descender de la ambulancia en la gasolinera, ubicada a la entrada de Juxtlahuaca: “es que voy a comprar agua, tengo mucha sed, después pido auxilio con la policía”, se excusó. Los rescatistas no se opusieron y lo dejaron cerca del río.

Gálvez caminó hacia la pequeña corriente, se lavó la cara, se quitó la camisa y la guardó en una pequeña mochila que lo había acompañado todo el día. Al terminar, dio media vuelta y se encaminó tranquilo hacia el centro de la población.

En lugar de buscar alguna patrulla o ir a la comandancia de policía, Joel se dirigió hacia el palacio municipal, que también albergaba la oficina de la Delegación de Gobierno. Se encontró con Roberto López Rojas, quien en ese entonces se desempeñaba como subdelegado de Gobierno en Juxtlahuaca. Lo encontró con el teléfono en la mano.

“Cuando entré le dije: ‘buenas noches, subdelegado’; él me miró y me preguntó: ‘¿cuántos muertos hubo en Copala?’. ‘No sé señor, por eso vengo, por información’. ‘Tú vienes de allá’, me dijo. ‘No, no vengo de allá, vengo de Tecomaxtlahuaca, estaba con Jaciel, otro reportero. Me enteré de lo de Copala, pero si no tiene información está bien, me voy”.

El funcionario le pidió a Joel Gálvez que esperara y comenzó a hacer algunas llamadas telefónicas. Trató de comunicarse con Gabriel Carrasco, funcionario del gobierno de Oaxaca y quien en ese momento era delegado especial de la zona triqui. No podía localizarlo. Intentó con otros personajes y nada, no fluía la información. Joel seguía bebiendo tragos cortos de su suero. Su pantalón estaba lleno de sangre.

El reportero pide otro café, un expreso. Esta vez lo toma sin azúcar. Tiene los ojos rojos, por momentos los cierra y se mantiene así por algunos segundos. Parece cansado.

Cuestionado sobre por qué le mintió al funcionario, frunce el ceño y con voz más grave dice: “yo fui por noticia, no a serla. Yo no tenía por qué darle información. En este oficio hay que estar preparado. Es nuestra profesión”.

Joel no buscó ayuda médica ni tampoco rindió alguna declaración ante el Ministerio Público. Al salir del palacio municipal, lo único que pasaba por su mente era conseguir un trago de aguardiente o mezcal, pero se contuvo. Tenía que regresar a su casa, así que se encaminó hacia una calle del centro de la localidad y buscó transporte para viajar a Huajuapán de León.

Compró un boleto y se sentó a un extremo de un pequeño estacionamiento, improvisado como sala de espera. Quince minutos después escuchó su nombre. La suburban estaba lista para salir. Una vez en ella, Joel continuó bebiendo lentamente el suero. Sentía los párpados pesados, un gran cansancio envolvió su cuerpo. Las casi dos horas y media de viaje las pasó dormido.

Al llegar, caminó rumbo a la plaza principal de Huajuapán, la misma de donde horas antes había partido la caravana rumbo a Copala. Pasó frente al palacio

municipal, iluminado con grandes y brillantes lámparas. Siguió hacia la capilla del Santísimo Sacramento, ubicada unas cuadras más adelante. Entró y se persignó. Casi inmediatamente abandonó el lugar.

Tomó otra calle que lo regresó al centro. Volvió a pasar por el palacio; a contraesquina de él, vio la catedral, una imponente construcción adornada con cantera, a un costado, como una extensión de ella, la iglesia del Sagrario, hogar del Señor de los Corazones, patrono de Huajuapán. Frente a la puerta, agradeció haber sido protegido.

Llegó a su casa, su esposa no estaba, nadie de su familia sabía dónde había estado todo el día. “¿Y si hubiera muerto?”, se pregunta con el último sorbo de café. En su hogar se encontraba su madre tejiendo palma. Joel se acercó a ella, se hincó a sus pies, abrazó sus piernas y lloró, lloró como no lo había hecho en años.

“Madre”, le dijo en mixteco, “deme su bendición”. La anciana levantó el brazo derecho y delineó la señal de la cruz sobre el reportero.

“Si no me comunico contigo, nos empiezas a buscar”

“¡Si te descubren te pueden matar!

Así advertía en 1985 un mixteco a un reportero que tenía la intención de internarse en la región triqui a investigar las razones de la violencia entre ellos.

Yo les recomiendo que no entren porque cada tarde sueltan balazos ahí.

Así le dijo un taxista en enero de 2007 a otro periodista que intentaba lo mismo. En ambos casos, los declarantes reproducían la visión que los vecinos de los triquis tienen de ellos desde la época colonial, si no es que desde antes: sucios, ignorantes y violentos”.¹

¹ López Bárcenas, Francisco, *San Juan Copala, dominación política y resistencia popular. De las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio autónomo*. México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2009, pág. 49.

“No pues, sí está cabrón” comentó David Cilia, reportero de la revista *Contralínea*, mientras conducía lentamente entre cerradas curvas un auto compacto rentado que en ese momento formaba parte de una caravana de paz que se dirigía a San Juan Copala.

“Pues al parecer sí. Vamos a ver qué pasa y hasta dónde lleguemos; tampoco nos vamos a ir a meter a la boca del lobo”, respondió Erika Ramírez, colega y compañera de viaje de Cilia. En el trayecto, Erika había comenzado a leer en voz alta.

Acababan de dejar atrás Agua Fría, última comunidad de la Mixteca oaxaqueña, donde hay señal para teléfonos celulares. Ahí se había detenido la caravana para entregar a sus participantes radios que los mantendrían comunicados ante la falta de cobertura telefónica. Los reporteros declinaron portar alguno porque viajaban justo detrás de la camioneta de vanguardia y de presentarse algún inconveniente, seguramente los tripulantes de la suburban les indicarían qué hacer.

En Agua Fría, Erika se comunicó con Zósimo Camacho, jefe de información de la revista. Le informó que Jorge Albino, militante del MULTI, organización que promovió la creación del municipio autónomo de San Juan Copala y con quien los reporteros se organizaron para formar parte de la caravana, les había indicado que ya todo estaba coordinado; que había hablado con “gente de allá” y que se les permitiría el acceso como representantes del medio de comunicación. También les dijo que iban a poder entrevistar a las tres partes en conflicto sin ningún problema, pero les advirtió que si veían piedras en el camino regresaran, que no intentaran seguir.

Camacho les recomendó medir la situación y mantenerse al margen si observaban algo extraño.

“Nosotros salimos hoy mismo, no nos vamos a quedar a hacer trabajo de campo. Vamos a salir junto con la caravana”, dijo Erika, que comenzaba a percibir una sensación extraña, como una corazonada. Aunque trataba de confiar en la

situación, no se sentía segura: “si no salimos hoy a la media noche, si no me comunico contigo, nos empezas a buscar”, advirtió al jefe de información.

Continuó la caravana y a pocos metros de haber avanzado, los reporteros sintieron que los carros disminuían su velocidad. Se encontraban a la altura de un paraje denominado La Sabana, territorio dominado por el PRI, a través de la Ubisort, en ese momento encabezada por Rufino Juárez Hernández.

Erika comenzó a sentir el ambiente todavía más pesado. Percibía las miradas fijas de las personas que encontraban por el camino, miradas extrañas y penetrantes, muy distintas a las miradas curiosas que los habitantes de alguna comunidad lejana tienen ante la presencia de extraños o ante la llegada de algún vehículo desconocido que disminuye su marcha en las veredas.

Tuvo miedo. Sentía que esas miradas eran la anticipación de que algo no estaba bien. Al levantar la mirada y ver más allá de la carretera, Erika pudo observar una casi imperceptible columna de humo, algo quemaban. Por las rendijas de las ventanillas, un olor putrefacto, cenizo y muy desagradable se filtró hasta el olfato de los reporteros. Erika tuvo la sensación de que ése, era olor a muerte.

La caravana siguió su camino. Metros más adelante se toparon con una curva bloqueada con piedras, palos y ramas. Escucharon una detonación. Los vehículos detuvieron su marcha.

“¡Están disparando!”, exclamó David Cilia. “No, debe ser un cuete”, contestó Erika.

El tiempo y la reflexión harían que ambos reporteros concluyeran que aquella detonación pudo haber sido una señal para que comenzara el ataque contra la caravana.

El sonido de la lluvia de balas rompió el absoluto silencio en que se encontraban los reporteros al interior del auto. Erika giró la cabeza y de un montículo ubicado a su izquierda vio que descendía lentamente un grupo de hombres que portaba armas largas. Eran más de diez y se desplazaban mientras continuaban disparando.

Cilia trató de alejarse en reversa. Manióbró, pero no pudo mover el carro. La suburban que se encontraba frente a ellos trató de hacer lo mismo y golpeó varias veces el vehículo de los reporteros sin conseguir dar la vuelta.

La reportera se agachó y logró meterse bajo el tablero del auto. Estaba segura que iban a morir. Continuaban los disparos. David Cilia se inclinó hacia su derecha hasta quedar recostado sobre el sillón del pasajero. Por unos instantes, Erika quedó resguardada por el motor del vehículo y el cuerpo del también fotógrafo.

Continuaba el silbido de las balas próximas a ellos. Era la primera vez que Erika se encontraba expuesta a una agresión directa. Era la primera vez que escuchaba detonar un arma de fuego. “Ya me dieron”, dijo Cilia tras un leve quejido.

Los reporteros viajaron a Oaxaca con el objetivo de documentar las historias de vida de periodistas asesinados en México, por lo que buscaban entrevistar a amigos y familiares de Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, indígenas de la zona triqui que se desempeñaban como locutoras de la radio comunitaria *La voz que rompe el silencio*, misma que transmitía desde San Juan Copala.

Teresa y Felícitas fueron asesinadas el siete de abril de 2008. El vehículo en el que viajaban con tres personas más, del paraje Joya del Mamey hacia Putla Villa de Guerrero, fue emboscado por un grupo de personas fuertemente armadas. Notas periodísticas difundidas por medios de comunicación de Oaxaca, informaron que la policía estatal encontró más de una veintena de casquillos percutidos, calibre AK-47.

El 15 de mayo de 2008, familiares de Felícitas y Teresa recibieron, a nombre de ambas, el Premio Nacional de Periodismo, *post mortem*, en la categoría de orientación a la comunidad.

“Estaban las elecciones en las que se iba a nombrar nuevo gobernador y aprovechamos para hacer un trabajo que tenía que ver con ello; pero documentándonos, comenzamos a ver que en la región triqui había un conflicto

social del que no se estaba dando mucha información y decidimos que también iba a ser uno de nuestros ejes de investigación”, explica Érika Ramírez.

Los reporteros buscaron contactar en la ciudad de Oaxaca a gente vinculada con el municipio autónomo.

Mientras Cilia y Ramírez se encontraban en Oaxaca, recibieron información de que varias organizaciones sociales buscaban que una caravana de paz llevara al municipio autónomo alimentos y medicinas.

La gente que habían podido contactar vinculada a San Juan Copala les sugirió adherirse a la caravana e ingresar al municipio autónomo como parte de los medios de comunicación que estaban invitados a documentar el hecho.

Así lo hicieron y la mañana del 27 de abril, David Cilia y Erika Ramírez arribaron al centro de Huajuapán de León, donde se dieron cita los integrantes de la caravana.

Erika y David se presentaron con Omar Esparza Zárate, dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). Él les informaba sobre la organización de la caravana cuando Bety Cariño se acercó a ellos.

Bety y Erika congeniaron inmediatamente, luego de que la reportera comentó que el fin de semana *Contralínea* había publicado un reportaje en el que se documentaba la voracidad de las mineras extranjeras en nuestro país. Erika sacó de su bolsa un ejemplar de la revista y lo puso en manos de Bety.

“En ese momento hicimos clic- refiere Erika con una mueca en la que se adivina una primera y tímida sonrisa- ; resulta que ella formaba parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Me regaló una gorra de REMA y quedamos que regresando de la caravana comenzaríamos a documentar todo lo que pasaba en torno a la minería en los pueblos indígenas, la falta de consulta, el saqueo”.

Omar, Bety y varios profesores de la Sección 22 que se sumaron a la caravana ofrecieron una breve conferencia de prensa en la Plaza de la Libre Expresión, justo frente al palacio municipal, rodeados también de observadores internacionales.

Los organizadores denunciaron ser objeto de intimidación por parte de Rufino Juárez Hernández, dirigente de Ubisort, quien a través de una entrevista difundida por medios estatales, declaró que no se haría responsable de lo que pasara en San Juan Copala si personas ajenas a la comunidad intentaban ingresar a ella.

Los medios de comunicación presentes tomaron nota. “Había muchos reporteros locales”, dice Erika mientras frota suavemente sus manos. Luce nerviosa, sus ojos marrones recorren rápidamente el patio donde se desarrolla la entrevista. Una larga mesa blanca de plástico se encuentra en medio del espacio. Más de una decena de sillas plegables la circundan.

“Antes de partir, parece que ellos- los medios de comunicación locales- ya sabían lo que iba a ocurrir porque decidieron no sumarse a la caravana. Como medios locales, sabían de lo que se estaba hablando”.

No cesaban los disparos cuando los reporteros lograron salir de su automóvil por la puerta del copiloto y corrieron adentrándose en el monte.

A los pocos metros se encontraron con David Venegas y Noé Bautista, integrantes de VOCAL, que habían logrado salir de un jeep negro que quedó varado detrás del automóvil compacto. En esa camioneta también viajaban algunos de los profesores de la Sección 22, pero los jóvenes desconocían su paradero; es más, no estaban seguros de que hubieran podido salir. Las detonaciones detrás de ellos continuaban.

Noé estaba herido y sin zapatos, los perdió mientras intentaba salir de la camioneta; ambas piernas se le habían atorado en el volante del vehículo cuando se arrastraba para alcanzar la puerta del copiloto en su intento por evitar el lado izquierdo de donde provenía el ataque.

“Dicen que la adrenalina te encoje el cuerpo, creo que por eso a él se le zafaron los zapatos y yo pude meterme en ese espacio tan pequeño donde quedé protegida por el motor”, reflexiona Erika, mientras da un prolongado trago a la botella de agua que había permanecido cerrada frente a ella.

Fue casi instintiva la necesidad que los cuatro sintieron de seguir corriendo porque continuaban escuchándose las ráfagas. David Cilia le dijo a Erika Ramírez que debían alejarse todo lo posible, porque estaba seguro que en pocos instantes no podría seguir corriendo. Una bala había alcanzado su pierna derecha.

“Dame tus tenis, yo te cargo”, le dijo Noé a Cilia. Fue así como siguieron la huida.

Las detonaciones no cesaban. Mientras se internaban más y más en el espeso monte, Erika imaginaba que en cualquier momento un proyectil se impactaría en la espalda o en la cabeza de alguno de ellos y caería de bruces en la tierra suelta.

Corrían, resbalaban, rodaban por la maleza seca del monte en su intento de alejarse de la carretera y del alcance de los diminutos pedazos de metal expulsados de las estrechas fauces cilíndricas de las armas; esos diminutos objetos capaces de perforar la piel, músculos y huesos de aquellos que encuentran en su camino.

En medio de quién sabe dónde, Erika recordó que en la bolsa que siempre llevaba consigo guardaba una pañoleta que frecuentemente utilizaba para sostener su cabello. Ató alrededor de la pierna de Cilia ese pequeño trozo de tela y la apretó con todas sus fuerzas para detener la humedad que generaba un líquido viscoso, tibio y rojizo en el pantalón del reportero.

Detuvieron la carrera cuando se encontraron a la orilla de un río ubicado tras una pendiente. A lo lejos, aún se escuchaban detonaciones, pero la irregularidad del terreno los hizo sentir protegidos. Con el agua cristalina del río lavaron las heridas de Noé y Cilia.

Erika sacó de su bolsa una grabadora de mano y pidió que todos registraran su nombre. Arrancó una hoja de su libreta y comenzó a repartir pequeños trozos de papel para que cada uno anotara su nombre y los guardaran en sus bolsas del pantalón. Por la mente de la reportera se aglutinaban una y otra vez las descripciones de las notas rojas que daban cuenta del hallazgo de cuerpos abandonados, sin identificación alguna a las orillas de algún río y que, a la postre, eran identificados como reporteros.

“Comencé a imaginarme muchas cosas y decía: ‘cómo nos van a encontrar, cuándo, ¿y si no logran identificarnos?’”, dice la reportera a quien por primera vez se le quiebra la voz, una voz que hasta ese momento se había mantenido elocuente y firme. Con un leve suspiro se aclara la garganta, parpadea varias veces para alejar la humedad que se ha hecho presente en sus ojos y fija la mirada al vacío para continuar con su relato.

“Decidí hacer una bitácora. Yo llevaba mi libreta y comencé a anotar todo lo que había pasado...de alguna manera estábamos reportando, documentando el ataque al que habíamos sido expuestos”.

Los reporteros y activistas permanecieron a las orillas del río. El pánico comenzó a disiparse y aunque esporádicamente se escuchaban disparos, se sentían más seguros. Los cuatro se preguntaban quién habría quedado vivo.

Después de recuperar el aliento y beber un poco de agua, David Venegas se alejó del grupo para tratar de observar a la distancia si aún estaban los vehículos sobre la carretera o si había algún movimiento cerca de ellos. Se volvió a escuchar una ráfaga de disparos y el terror se apoderó nuevamente de todos al imaginar a David alcanzado por algún impacto.

Minutos después, y aún desconcertado por la balacera, David volvió a reunirse con los demás. Les comentó que había escuchado lamentos, pero no sabía de dónde venían ni cuánta gente yacía sin vida en los vehículos. Todos continuaban impactados.

Comenzaba a caer la tarde, y poco a poco disminuía la visibilidad en medio del monte. Nuevamente David, también conocido como *Alebrije*, activista social de piel morena, frente ancha y ojos vivaces, se alejó del grupo en la búsqueda de un refugio para que los heridos pudieran descansar.

Aún con la mirada fija en el vacío, la reportera comenta que: “David es una persona muy activa, está muy al tanto de la defensoría de derechos humanos, se ha expuesto a ser encarcelado infinidad de veces y creo que esa actividad y su actitud lo hacían el líder de nosotros cuatro”.

Erika y los dos heridos vieron alejarse al *Alebrije* por entre las ramas, árboles y hojas secas que alfombraban la tierra bajo sus piernas exhaustas. Después de un rato que a todos les pareció una eternidad, de la nada, David apareció para decirles que había encontrado un brazo del río donde parecía seguro resguardarse mientras alguna autoridad los rescataba.

La lógica les indicaba que después de un ataque de las proporciones del que habían sufrido, varias dependencias estatales se darían a la tarea de arribar a la zona para levantar los cadáveres que pudiera haber e investigar el porqué de la agresión, cosa que no ocurrió sino hasta que fue incontenible la presión.

Como pudieron, llevaron a los heridos al brazo del río. Se instalaron cerca del agua, pero no se sentían con la confianza de desplazarse a su antojo porque aún se escuchaban detonaciones de manera intermitente. No sabían si los disparos los hacía el grupo que los había atacado, si estarían cerca o si los buscarían para finalizar lo que habían dejado inconcluso.

Ahí mismo decidieron grabar un video con la cámara de un celular. Ese video serviría como prueba de vida y detonaría la presión que ejerció la propia revista *Contralínea* y otros medios de comunicación para que las dependencias estatales rescataran a los sobrevivientes del ataque.

Frente a una cámara temblorosa aparece en primer plano David Venegas. Luce agitado, nervioso y muy alerta. Se encuentra rodeado de rocas, raíces y ramas secas. Sus ojos vigilantes se desplazan rápidamente de izquierda y derecha.

Comienza su relato diciendo la fecha: “el día de hoy, martes 27 de abril, un grupo de aproximadamente 20 personas tratamos de entrar a la comunidad de San Juan Copala de manera pacífica. Hoy, siendo las seis de la tarde, aproximadamente, estamos aquí cuatro personas. Su servidor, David Venegas. Grábalos, que cada quien diga su nombre”, indica el *Alebrije* a quien sostiene el celular.

En un movimiento rápido, la cámara se desplaza hacia la izquierda. Entre el contraste de las sombras y la luz brillante de la tarde que cae, aparece una figura

que inmediatamente se identifica como David Cilia, reportero de la revista *Contralínea*.

“Tengo un balazo en la pierna derecha y en el costado izquierdo. Estamos a la orilla de la carretera. Tú, Erika”, dice el reportero señalando a su compañera. La cámara vuelve a desplazarse hacia la izquierda. Esta vez la toma es más inclinada.

Sentada en la tierra, a un lado de lo que parece ser un árbol, aparece la reportera. Viste una playera negra, sobre la cabeza unos lentes oscuros. Algo que parece un pañuelo cuelga de su cuello.

“Mi nombre es Erika Ramírez, soy reportera de la revista *Contralínea*, estoy bien, no tengo heridas”, dice mientras la cámara se acerca un poco más a su rostro que luce temeroso. “Hace tres horas, aproximadamente, que logramos resguardarnos de los paramilitares, pero sí queremos decir que si algo nos pasa, fue por la lenta acción del gobierno en nuestro auxilio”.

En ese momento una voz emerge de un radio:

- David, ¿me escuchas?, soy Omar.

La sorpresa se refleja de inmediato en el rostro de la reportera quien deja de ver a la cámara y voltea su mirada hacia la izquierda. La fija en la dirección en que inició la grabación. La cámara desciende abruptamente. Ha dejado de concentrar su atención en quien hablaba. Se escucha la voz del *Alebrije*:

- Bueno, bueno, aquí David, ¿si me oyes? Cambio.

La cámara gira hacia donde inició la grabación. Una imagen masculina aparece muy cercana al lente. Es un joven de no más de 30 años, moreno, con el cabello quebrado, a la altura de los hombros y peinado hacia atrás en la parte superior de la cabeza.

“Mi nombre es Noé Bautista Jiménez, yo tengo un balazo en la nalga derecha, un balazo en el hombro derecho y un rozón aquí en el costado”. Mientras Noé

describe su condición, la cámara se desplaza y se acerca hasta mostrar sus heridas.

En segundo plano, detrás de una piedra se puede observar a David Venegas, agachado, en cuclillas, casi susurrando trata de comunicarse con la voz que se escuchó por el radio.

“Fuimos agredidos alrededor de las dos de la tarde con 45 minutos, por un poco más de 20 gatilleros con armas de alto calibre. Estamos escondidos, tememos por nuestra vida”, continúa el relato Noé, mientras con la mano derecha trata de quitarse un mechón de cabellos que el aire acercó a su rostro.

“Estamos resguardados en la montaña. No sabemos qué pueda pasar con nosotros o qué nos puedan hacer”.

Poco a poco se abre el ángulo de la cámara. El rostro de Venegas se incorpora a la imagen junto al de Noé. Por algunos momentos nadie ve directo a la cámara. La toma vuelve a cerrarse. Muy de cerca puede verse a David pegándose el radio al oído izquierdo. Cilia trata de escuchar también y su rostro queda muy cerca del lente. Ha tapado casi por completo al *Alebrije*.

- ¿Qué es lo que acabo de escuchar?, cambio.

Venegas vuelve a intentar comunicarse por radio. Parece no haber respuesta. El silbar de algunos pájaros se ha adueñado del audio del video. Casi susurrándose Cilia y Venegas intercambian opiniones. En la toma vuelve a observarse a Erika quien ve atentamente a sus compañeros. Luego de un breve brinco en la imagen, la grabación termina.

Por algunos instantes el pánico se apoderaba de los reporteros. La incertidumbre de no saber en dónde estaban o si podrían salir con vida de ese lugar, incitaba la imaginación de ambos. Infinidad de escenarios surgían de la nada sólo para ponerlos más nerviosos.

Se preguntaban si volverían a ver a sus hijos; intercambiaban mensajes para sus familias que uno u otro entregarían en caso de ser necesario. Habían pasado ya 12 horas desde el ataque. Pasó un día completo y no se vislumbraba la presencia de ninguna autoridad que los estuviera rastreando por la zona. De manera intempestiva volvían a escuchar disparos.

“Era un terror psicológico en el que llegamos a la alucinación. En las noches, cuando todavía estaba oscuro y se movían los animales o algún insecto, pensábamos que ya venía por nosotros”, comenta Erika.

“Comíamos vitaminas”, añade la reportera con una pequeña sonrisa. “En mi bolsa yo llevaba muchas cosas, entre ellas un frasco con vitaminas. No sabía si nos servirían, pero pensé que podían darnos un poco de energía. Tomábamos agua y hubo un momento en el que David Venegas nos llevó algunas hierbitas. No teníamos hambre. Fueron tres días en los que no sentí hambre, lo único que quería era salir de ahí”.

Después de casi dos días de estar resguardados, David Venegas y Noé Bautista concluyeron que no era seguro continuar escondiéndose en el monte y propusieron buscar una salida. Pensaban que la mejor opción era dirigirse hacia donde suponían estaba San Juan Copala y buscar algún tipo de refugio o ayuda.

Noé y Cilia parecían debilitarse con cada hora que pasaba. Las heridas que tenían no habían recibido atención médica, solamente las lavaban de manera esporádica con el agua del río.

Cilia se sentía agotado y estaba convencido de que no podría caminar un largo trecho. “Si quieres vete con ellos”, le dijo a Erika, quien le contestó tajante: “no, yo vine contigo. No me puedo ir así”.

Entre los reporteros se había desarrollado un fuerte sentido de compañerismo y de amistad. Llevaban varios años trabajando en la revista y ésa no era la primera vez que les tocaba viajar juntos en la búsqueda por documentar algún tema de trascendencia social. Estaban convencidos que debían cuidarse mutuamente.

Acordaron que David Venegas y Noé Bautista dejarían de madrugada el refugio en el que habían estado los cuatro. Los reporteros les pidieron que en cuanto tuvieran señal en los teléfonos celulares se comunicaran con Zósimo Camacho y le hicieran llegar el video.

Los reporteros acordaron que si al mediodía no llegaba nadie para auxiliarlos, se entregarían a “los paramilitares”, el grupo armado que los atacó. David Cilia se encontraba muy débil y temía perder la pierna.

Alrededor de las ocho de la mañana dejaron el brazo del río que les había servido de refugio y comenzaron a caminar por el monte.

Erika arrancó las pastas de su libreta y las colocó en las plantas de los pies de Cilia; con sus calcetines, logró que se sostuvieran para que pudieran desplazarse sin lastimarse más. Por varios kilómetros Erika ayudó a caminar a Cilia mientras él se impulsaba con un pedazo de rama que utilizó como bastón.

Anduvieron por la orilla del río, justo por donde habían corrido para salvar sus vidas dos días antes. Cuando se encontraban cerca del lugar donde suponían fue el ataque, comenzaron a dudar que fuera buena idea entregarse.

“Yo le decía a David: no manches, ya salimos de ésta, llevamos dos días sobreviviendo y ¿nos vamos a entregar? Nos van a matar, nos van a usar como botín de intercambio. Yo no quiero que me violen”.

“Vamos a seguir caminando por el río, a ver qué sale”, contestó Cilia a su compañera.

Siguieron caminando y una rara sensación los acompañaba. En algunos tramos del recorrido, el río y todo lo que los rodeaba se transformaba completamente. Por algunos momentos sentían adentrarse en una selva: árboles grandes y frondosos los rodeaban, la humedad les hacía sudar, escuchaban ruidos extraños de animales.

Pasos más adelante parecían estar en medio del campo. Veían extensas planicies y la vegetación era completamente diferente. Encontraban muchos tipos de flores a su paso y animales que nunca habían visto.

Ese fue el primer día que ya no escucharon balazos. Después de varias horas de camino, alcanzaron a subir un pequeño monte. Erika calcula que cerca de las seis de la tarde, se detuvieron porque David Cilia se encontraba muy cansado. No habían comido nada y las fuerzas se les agotaban. Terminaron de subir un montículo y observaban cómo la tarde iba cayendo y comenzaba a oscurecer. Decidieron descansar ahí. En algunas horas sería otro día.

Media hora después del ataque la redacción de *Contralínea* fue alertada, a través de una llamada telefónica, del peligro que corrían sus reporteros.

Al enterarse de la emboscada a la caravana un abogado vinculado con la revista y también relacionado con CACTUS, se comunicó con Miguel Badillo, director de la publicación, a quien le pidió confirmar la presencia de los reporteros en Oaxaca y le explicó lo que había pasado dándole a conocer la mínima información que para entonces fluía.

Esa misma tarde, Zósimo Camacho, jefe de información de la revista y dos reporteros más, viajaron a Santiago Juxtlahuaca para saber cuál era la situación de sus compañeros.

Después de más de ocho horas de viaje, los reporteros de *Contralínea* llegaron a la Mixteca oaxaqueña. Solicitaron información del ataque a la policía estatal y a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Tras un trato “negligente y sin nada de tacto”, a Zósimo Camacho le informaron que se encontraban a la espera de la llegada de dos cuerpos, un hombre y una mujer. “Al parecer, son tus compañeros”, le sentenciaron.

Camacho se comunicó vía telefónica con Badillo quien respondió tajante: “no vamos a hacer nada hasta no ver los cuerpos”.

Horas más tarde, el jefe de información fue testigo del arribo de una camioneta blanca de la AEI a la cabecera municipal de Juxtlahuaca. En la batea de dicho vehículo, sin cuidado alguno y “como bultos”, llegaron los cuerpos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola. De los desaparecidos no se sabía nada; es más, no había ningún operativo de búsqueda en la zona.

En Santiago Juxtlahuaca también se encontraba Omar Esparza Zárate, quien ya había sido informado del asesinato de Bety, su pareja. Omar viajó con la caravana ese martes 27 de abril, pero ya no se encontraba en ningún vehículo cuando fueron atacados.

En la comunidad de Agua Fría, cuando los organizadores repartieron los radios de comunicación, decidieron que Omar y otras personas no seguirían en el intento de llegar a San Juan Copala. Esparza había sido amenazado de muerte.

Al creerse cerca de Juxtlahuaca, tras haber caminado varios kilómetros e inmediatamente que tuvieron señal sus celulares, David Venegas y Noé Bautista se comunicaron con Zósimo Camacho, quien les dijo que ya se encontraba en la cabecera municipal.

Camacho y sus compañeros fueron en su búsqueda. Los encontraron y los trasladaron al hospital del IMSS. Noé y el *Alebrije* le mostraron a Zósimo el video que habían grabado con Erika y Cilia; le informaron de las heridas del reportero y la zona donde permanecían.

El jefe de información envió a la redacción de la revista el video que inmediatamente fue difundido en internet y a través de las redes sociales.

“Es ahí cuando se arma el desmadre, ¿cómo no vas a rescatar a las personas que están pidiendo ayuda? Fue escandaloso. Creo que eso fue lo que nos salvó la vida. En el video yo digo: ‘si algo nos pasa, fue por la lenta acción del gobierno en nuestro auxilio’”, comenta Erika, quien además lanza una hipótesis: “como estaban en la acción política del cambio de gobierno, no les convenía tener a dos periodistas asesinados en la zona, ni que documentaran la presencia de paramilitares”.

Ante la inacción de la administración estatal, en ese entonces encabezada por Ulises Ruiz Ortiz, *Contralínea* decidió que si las dependencias de Oaxaca no rescataban a los reporteros, lo harían sus familias y colegas de diversos medios de comunicación. Comenzaron a organizar de nueva cuenta una caravana que ingresaría a la zona para rastrear a Erika y Cilia.

“Creo que al gobierno no le quedó más que negociar con los paramilitares para que pudieran sacarnos de ahí. Nos comentan que cuando entraron, los policías tenían miedo; decían que era una zona muy peligrosa”, agrega Erika.

Mientras se desplazaban por el monte, Erika recuerda haber escuchado e incluso visto un helicóptero sobrevolando la zona.

“¡Ya nos están buscando!”, le dijo a Cilia, mientras lo sostenía de la cintura para que pudiera seguir caminando apoyado de la rama que utilizaba como bastón. “No güey, además si nos están buscando, nos están buscando mal, ¿nunca has visto las películas de Hollywood?, siempre buscan donde no es”, respondió el fotógrafo tratando de sacar fuerzas de la nada.

Erika le propuso regresar por donde habían caminado, pero Cilia estaba exhausto, por lo que decidieron pasar la noche sobre el montículo. Con ramas secas hicieron a un lado las piedras, hojas y basura que pudiera servir de fachada a alguna víbora o animal ponzoñoso.

Alrededor de las ocho de la noche comenzaron a escuchar ruidos, ruidos que les eran completamente extraños, pues no los habían escuchado antes: “están gritando”, dijo Cilia, “¡es mi papá!”, exclamó Erika. La reportera pensaba que si alguien la rescataría, ése sería su padre.

“¡David Cilia!, ¡Erika Ramírez!”, los reporteros oyeron sus nombres, las voces eran más claras, más fuertes, aunque aún las percibían lejanas, como si los llamaran por un altavoz.

“No es tu papá, es mi papá”, dijo asombrado Cilia, “te dije que ya nos estaban buscando”, replicó Erika, “lo malo es que nos van a buscar donde les dijeron que estábamos. Vamos a regresar”.

Los reporteros volvieron sus pasos sobre el recorrido que habían hecho en casi todo el día; el cansancio con el que se habían desplazado las últimas horas se esfumó de sus cuerpos al sentir tan cerca a los suyos. Se arrastraban, resbalaban por los cerros y hasta rodaban con tal de dar con ellos antes de que se alejaran y tuvieran que esperar hasta el siguiente día para continuar la búsqueda.

Ya había oscurecido y los reporteros caminaban sin parar. Lo único que los alumbraba era la tenue luz de un celular que habían apagado para que conservara la batería, y la de una memoria USB que también servía de radio.

“¡David Cilia!, ¡Erika Ramírez!”, volvieron a escuchar. “¿Quién es?”, preguntó Cilia también a gritos; “soy Miguel Badillo”.

Unos cuantos elementos de la policía estatal que acompañaban la búsqueda se adelantaron algunos metros. En cuanto los tuvieron a la vista, dos policías se abalanzaron sobre Cilia para cargarlo, a Erika le preguntaron cómo se sentía y uno más le cargó la bolsa.

Después de tres días escondidos en el monte, sin comer y con la incertidumbre de no saber si saldrían con vida de ahí, Erika Ramírez y David Cilia fueron rescatados.

“En realidad el rescate se dio porque un indígena triqui del MULTI nos ubicó por las voces. Él dijo que sabía dónde estábamos, se arriesgó porque también estaba amenazado. Para que pudieran entrar, lo disfrazaron de policía”, agrega la reportera.

Ambos fueron trasladados al hospital del IMSS de Santiago Juxtlahuaca, donde fueron valorados e intempestivamente dados de alta unas horas después de su arribo. Cuando se encontraban en el nosocomio, agentes del Ministerio Público les tomaron su declaración.

“Nos enteramos que les urgía que nos fuéramos porque ha ocurrido en otras ocasiones, que llegaba gente herida por los paramilitares y los han ido a rematar al hospital... para nosotros fue mejor. Sentíamos miedo de seguir ahí”, dice Erika al mismo tiempo que un suspiro escapa de ella.

Los reporteros estuvieron más de 10 días en Oaxaca. Integrantes de varias organizaciones civiles y sociales, reporteros locales y aun gente cercana al municipio autónomo con quienes tuvieron contacto antes de integrarse a la caravana de paz, les aconsejaron en repetidas ocasiones que no intentaran ingresar a San Juan Copala, que los ánimos estaban “calientes”, que frecuentemente se escuchaban balaceras y que había mucha violencia en la zona.

Era abril de 2010.

“A ti sí te mato, para que ya no vivas en esa miseria”

¡Hay alguien allá arriba!, dijo una voz anónima que viajaba en la parte trasera de la suburban que iba al frente de la caravana. Un zumbido quebró el silencio y dibujó una circunferencia de cuatro centímetros de diámetro en el lado superior izquierdo del parabrisas. Un proyectil se impactó en el asiento del conductor.

Noé Vargas, chofer de la camioneta, había estado a centímetros de morir. Tras la primera detonación se agachó hacia el lado derecho, se resguardó junto con un joven que viaja como copiloto y se protegió la cabeza con ambas manos. Las detonaciones continuaron por más de 10 minutos que a Vargas, de escasos 23 años, le parecieron una eternidad; escuchaba como granizada el golpetear de las ráfagas en los vehículos.

El 27 de abril por la mañana, Noé se preparó para el viaje: “échale gasolina a la camioneta, vas a Juxtlahuaca, si te dicen que más adelantito, también llévalos”, le dijeron. “Pensé que era una excursión a pasear”, dice el joven resguardado detrás de un pequeño escritorio de madera, ubicado justo frente a la puerta de una diminuta bodega que a la vez sirve de oficina de trabajo.

Después de cargar combustible, el joven se dirigió al centro de Huajuapán. Cuando llegó a la Plaza de la Libre Expresión, vio a más de una veintena de personas y algunos vehículos. No dio mayor importancia a la presencia de reporteros de varios medios de comunicación ante los que se acababa de dar una breve conferencia de prensa: “llegué casi al final, ya casi nada más a que se subieran a la camioneta, le pusieron una manta que decía ‘observadores’ o algo así. Pensé que era raro, pero no que hubiera un problema fuerte”, recuerda.

Nadie le dijo que el vehículo que conduciría era la vanguardia de una caravana, tampoco fue advertido de los riesgos de tratar de ingresar a San Juan Copala ni de las amenazas de que habían sido objeto los organizadores; es más, desconocía el porqué del viaje: llegar al autodeclarado municipio autónomo a entregar víveres y medicinas.

“Fue en Agua Fría donde empecé a sentir raro porque no sabía a qué íbamos. Sabía que era un lugar pesado, pero como iban muchos, pensé que tal vez conocían a la gente”. El joven se encoge de hombros, luce tímido e incluso incómodo por haber aceptado revivir y contar su experiencia; se mueve frecuentemente en la silla y arregla una y otra vez las mangas de la chamarra negra que lo cubre del frío aire que empieza a correr.

Un recuerdo intempestivo llega a su mente. Frunce el ceño y voltea ligeramente la cara hacia la izquierda. No dice nada, pero a medida que se hace más intensa su evocación, en su rostro empieza a ser visible su inquietud: “en Agua Fría dieron radios. Creí que iría toda la caravana, pero no. Unos se fueron según a esperarnos del otro lado del pueblo, por otra entrada”.

Ahí le advirtieron que si veía piedras en el camino debía regresar. Únicamente se detendría unos minutos para que los reporteros tomaran fotografías y giraría para volver a Huajuapán.

Recuerda que hasta Agua Fría, Bety viajó a su lado como copiloto, “hasta esa última parada noté mucho nerviosismo en ella, empezó a sudar, aunque allá hace frío; se agarraba las manos y se tronaba los dedos. Se bajó de la camioneta,

caminó un poco y ya cuando íbamos a reanudar la marcha abrió la puerta donde viajaban los demás y le pidió a alguien que cambiaran de lugar”.

Los disparos cesaron por un momento. “Están recargando. Aprovecha ahorita que están recargando”, le gritaron desde la parte de atrás de la suburban. Noé se incorporó y echó a andar la camioneta. Intentó salir en reversa, mas no pudo, un vehículo compacto de color azul y un jeep negro estaban detrás de él. Trató de girar hacia la izquierda, cuando se dio cuenta de que en los minutos que durara la maniobra todos los pasajeros estarían a merced de los gatilleros.

Sostenía el volante con la mano izquierda y con la derecha acomodaba el retrovisor cuando vio levantarse y aparecer en el espejo la figura de un hombre joven, blanco, más bien pálido, tenía sangre en las manos y trataba de ayudar a alguien. Era Jiry Jaakkola.

“¡Agáchate! Cuando le grité me volteó a ver y justo en ese momento entró un impacto. Se desplomó”.

Noé continuó maniobrando, en varias ocasiones golpeó el vehículo azul que se encontraba atrás, sintió que podía virar para alejarse del lugar; los disparos seguían. Un impacto perforó el sistema eléctrico y la camioneta dejó de funcionar. Escuchó que abrían las puertas de la suburban y pudo ver cómo algunas personas bajaban del vehículo y comenzaban a correr en distintas direcciones.

De repente un agudo dolor en el brazo izquierdo distrajo a Noé de la impotencia de no poder hacer que la suburban avanzara. No sabía qué tan peligrosa era la herida que escupía sangre y formaba una mancha en la camisa blanca recién planchada que el joven descolgó esa mañana del gancho.

Abrió la puerta y salió corriendo por la carretera. A la distancia pudo observar a un hombre y una mujer que se encontraban estupefactos dentro del auto compacto. Ambos tenían puestos los cinturones de seguridad.

Mientras hacía un gran esfuerzo por alejarse, escuchaba el zumbido del metal que se adelantaba a él; ¡zum, zum! por izquierda y derecha. Las piernas no le respondían, Noé les ordenaba correr más rápido, pero en lugar de eso sus

movimientos se hacían más pausados; su corazón no resistía la presión y brincoteaba en su pecho en el afán de ir más lejos que él.

Estaba agotado. Su pecho se inflaba y desinflaba en cuestión de segundos, su respiración estaba tan agitada que hacía varios metros que había abierto la boca para inhalar y exhalar, todo al mismo tiempo.

Llegó a un montículo de tierra y se desvaneció. Quedó tirado en la tierra floja de la zona triqui. Resbaló hacia al pie de la pendiente y trató de cubrirse con ella; ahí se quedó, sentado, en silencio, tratando de recuperar el aliento. Los gatilleros continuaban disparando. Noé podía escuchar el soplido de las balas y observó cómo caían y se incrustaban en la tierra que lo rodeaba.

Dio vuelta lentamente, se arrastró por la pendiente con el estómago sobre la tierra y avanzó centímetro a centímetro, se acercó al borde donde levantó la cabeza y logró ver los vehículos vacíos. Escuchó algunos gritos que provenían del monte y también más disparos. A unos metros de la suburban vio a una joven que sangraba; ella trataba de adentrarse en el espesor del monte mientras crecía una mancha de sangre en su espalda. La vio alejarse de la carretera.

Noé recordó el dolor de su herida. La sangre continuaba brotando con menor presión. Los dedos de su mano derecha desabotonaron la camisa. Con un movimiento rápido se despojó de ella. Intentó levantarse y seguir corriendo; sus piernas no reaccionaron.

El crujir de la tierra producido por unos pasos que se acercaban lo hizo voltear la cabeza. A menos de un metro de él, un hombre con un arma larga le apuntaba.

“Aguanta, yo nada más ando chambeando. Me contrataron para el viaje”, dijo Noé. Hubo silencio. El hombre no separaba el dedo índice del gatillo de la AK-47 que portaba y que inclinó hasta dejar el cañón a la altura de la cabeza del chofer.

El gatillero le quitó la cartera y teléfono celular. Minuciosamente revisó su credencial y demás contenido de la cartera. Noé trató de articular alguna frase, pero le ordenaron que se callara y permaneciera sentado. La voz provenía de una

pequeña hendidura en el pasamontañas que cubría el rostro de esa figura delgada y morena que protegía su torso sólo con un chaleco.

Sin mayores ademanes tiró la cartera y empuñó el arma con ambas manos. Cortó cartucho. Sus ojos se clavaron en los del chofer que toda la mañana pensó que llevaba a un grupo de exóticos y aventureros extranjeros a un viaje turístico por las recónditas veredas de la Mixteca oaxaqueña.

Noé vio moverse lentamente el dedo en el gatillo y permaneció inmóvil, solamente pudo cerrar los ojos. Un ruido extraño que provenía de un radio de comunicación partió el silencio que hasta el momento se había mantenido. El gatillero tomó el radio y pronunció algunas palabras que Noé no entendió. Frases indescifrables le respondieron por el radio.

“¿Dónde está Omar?”, preguntó el encapuchado. “No sé”, atinó a responder el chofer. El gatillero acercó a sus labios el radio: “busquen al cabrón y quiébralo”, ordenó por la frecuencia. Omar Esparza manejó el jeep negro desde Huajuapán hasta Agua Fría, donde decidió que no continuaría en la caravana.

Sin despegar el dedo del gatillo jaló a Noé y lo puso de pie. Caminaron lentamente y regresaron hacia donde se había dado el ataque. Sobre un montículo de tierra se detuvieron. Frente a ellos había más hombres armados, algunos con capuchas y otros con trapos con los que ocultaban sus rostros.

Sentados en el suelo, a los pies de los encapuchados estaban algunas de las personas que viajaban en la camioneta, entre ellos un joven italiano, una mujer alemana, un delgado belga, un joven al parecer proveniente de la ciudad de Oaxaca y otras personas más.

El sinrostro que conducía a Noé ordenó que le entregaran las carteras. Sin prisa revisó una por una; sacaba las credenciales y anunciaba la nacionalidad de sus rehenes que permanecía en la tierra, rodeados de gatilleros que, de pie, les apuntaban.

Anunció a los extranjeros que los dejaría ir, no sin antes encargar la difusión de un mensaje: “díganles a los suyos que aquí no queremos gente pendeja que les venga a meter ideas a nuestro pueblo”, sentenció.

A lo lejos se volvieron a escuchar detonaciones. Por un momento la atención de todos se centró en los cerros que los rodeaban. “Esos no son disparos nuestros”, dijo el aparente líder de los encapuchados, “son del MULT y a esos no les hacen nada”.

El hombre ordenó que todos los retenidos entregaran sus pertenencias: dinero, celulares, incluso cámaras fotográficas. “No les estamos robando, sépanlo bien. Es una cuota que deben pagar por haber entrado en nuestro territorio”, dijo con una voz socarrona mientras se acomodaba el arma de nueve milímetros que portaba en la cintura.

Un joven moreno y delgado que había permanecido agachado al centro del círculo que formaban los sinrostro sacó algunas monedas de las bolsas de su pantalón.

Extendió la mano para entregárselas al encapuchado que daba las órdenes, éste volteó y al ver las pocas pertenencias del viajero golpeó su brazo haciendo que se regaran los pequeños circulitos en el suelo.

“Mejor a ti sí te mato para que ya no vivas en esa miseria. Vales madre”, le dijo al mismo tiempo que empuñaba su cuerno de chivo y apuntaba a la frente del casi adolescente que permanecía a sus pies.

De la nada se escuchó una sirena de ambulancia que se acercaba. De nuevo rugió el radio que por algunos minutos había permanecido inherente y mudo en la cintura del presunto líder del grupo. Hubo un intercambio de frases por el aparato: “¿a esa pinche ambulancia quién la llamó? Mándenla a chingar a su madre”, ordenó el hombre para terminar la conversación.

No más de dos minutos pasaron cuando se volvió a escuchar la sirena de ambulancia. Esta vez el sonido se alejaba entre las curvas de la inacabada carretera.

El hombre ordenó que todos se levantaran. Los encapuchados los condujeron hacia la parte baja del cerro sin dejar de rodearlos y apuntarles.

A Noé lo empujaron hasta hacerlo caminar al lado del presunto líder de los gatilleros. Mientras avanzaban, por el radio seguían escuchándose pequeñas frases que sólo los encapuchados entendían porque de vez en vez salía de las hendiduras de sus pasamontañas una que otra sílaba, palabra o sonido que podía interpretarse como un código entre ellos, a saber por las reacciones de los demás.

El joven chofer caminaba despacio, midiendo cada uno de sus movimientos. Tenía miedo, en toda la tarde no había dejado de pensar en su familia, en sus padres y hermanos, en la posibilidad de ser asesinado por la única razón de haber conducido un vehículo que se internó en esa zona sabría Dios para qué.

Sintió pavor ante la idea que cruzó por su mente de ser alejado del grupo, aislado y torturado en la búsqueda de quién sabe qué información que de antemano él sabía no poseer.

Ideaba una solución: correría sin cesar para escapar de sus captores, zigzaguearía por el monte para evitar las balas y así huir de la tortura. O mejor aun, si lo golpeaban, a la primer oportunidad se arrojaría al piso y fingiendo incorporarse se abalanzaría sobre el encapuchado líder y arrebataría de su cintura la pistola con la que se defendería hasta que el balazo de algún otro encapuchado lo arrancara de la tierra.

“Van a caminar por ahí derecho” dijo el encapuchado a Noé, señalando con el dedo índice una apenas perceptible vereda en un pequeño llano. Ese camino los conduciría a la carretera, les dijeron. El grupo comenzó a caminar más apresuradamente mientras los encapuchados poco a poco se rezagaban.

El miedo los hizo desconfiar de la indicación y decidieron tomar la vereda más sinuosa, una barranca a algunos metros del llano cubierta de ramas secas, troncos talados, piedras y basura. Pensaban que ir en línea recta generaría más posibilidades de ser blanco si los paramilitares intentaban dispararles a la distancia y por la espalda. La irregularidad de la barranca, que en determinado

momento tuvieron que escalar, les daría la posibilidad de resguardarse si así lo necesitaban.

Más de una hora caminaron. Por momentos aceleraban el paso y corrían, luego volvían a bajar la velocidad, sobre todo en las zonas con mayor vegetación; los árboles eran sus aliados en la intentona de salir sin un herido más. Mientras caminaban escuchaban sonidos raros, parecidos a las claves con que se comunicaban los encapuchados, pero no alcanzaban a distinguir a nadie entre la maleza.

A lo lejos podían observar postes que suponían estaban al lado de la carretera. Por fin alcanzaron el asfalto, caminaron sobre él hasta que se encontraron con una pequeña tienda a la que entraron todavía volteando hacia atrás en la búsqueda de alguien que los estuviera siguiendo. Aún se escuchaban disparos.

Después de un rato escucharon el motor de un vehículo. Vieron que se aproximaba una camioneta que acababa de salir de una curva, así que dejaron el local, caminaron hasta la mitad de la carretera e hicieron señas al carro para que se detuviera.

Acordaron que llevaría al grupo a Santiago Juxtlahuaca. La camioneta los dejó en la casa de unos conocidos de Noé. No hablaron mucho durante el viaje, tenían miedo de que alguien los pudiera haber seguido y de todo lo que ocurriría después, pues no estaban seguros de cómo estaba la gente que se internó en el monte cuando trataba de escapar del ataque.

Ya en la cabecera municipal probaron bocado. Algunos incluso se bañaron. Cerca de las siete de la noche, Noé llamó a otra suburban para hacer el viaje de regreso a Huajuapán. El vehículo fue por el grupo hasta la casa donde estaban. Noé no viajó, se quedó en Santiago Juxtlahuaca.

Por un rato, Noé había olvidado que estaba herido. Revisó su brazo. La herida había comenzado a oírse y la hemorragia cedió en algún momento de la huida.

Recuerda que después de ataque, hubo noches que no pudo dormir.

Semanas después, cuando la suburban que él había conducido fue recuperada, la volvió a ver. Todos los impactos habían pegado del lado izquierdo del vehículo, prácticamente esquinados. En el lado del copiloto, no pegó ninguno de los tiros.

Hecho una mierda...

“Yo iba en la caravana y en Agua Fría me bajé porque los compañeros del municipio autónomo me plantearon que podría ser peligroso que fuera, que podrían agredir a toda la caravana. Ella sentía miedo, presentía que algo malo pasaba”, dice Omar Esparza Zárate, viudo de Bety Cariño.

Las últimas palabras que Omar intercambió con Bety fueron parte de una acalorada discusión que ambos sostuvieron para decidir si continuaban encabezando la caravana. Algunos de quienes participaban en la misma les sugerían que ninguno de ellos siguiera, pero Bety concluyó que para dar confianza y certeza a los demás caravaneros, ella lo haría. En ese momento creían que había condiciones de seguridad para avanzar.

CACTUS, y Omar en particular, habían recibido amenazas por parte del gobierno del estado y de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), por su participación como mediadores de dos grupos antagónicos de la zona triqui, tras el asesinato de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, en abril de 2008.

Con la ayuda de CACTUS se instaló una mesa de diálogo entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI); este último escisión del primero, para buscar la pacificación de la zona.

El centro de apoyo fungió como mediador y trató de acercar a ambas partes para generar un acuerdo de no agresión y posteriormente construir condiciones de paz para la región.

“Para crear condiciones de diálogo necesitábamos elevar el perfil del MULTI, para que la negociación fuera entre iguales”, dice Esparza; sin embargo, no se logró concretar porque en cada momento del proceso de diálogo se generaban emboscadas, agresiones e incluso asesinatos.

Cuando la caravana con ayuda humanitaria volvió a ponerse en marcha, Omar y cuatro personas más, entre ellos profesores de la Sección 22, subieron a la camioneta del sindicato en la que habían viajado desde Huajuapán y avanzaron rumbo a Yosoyuxi, comunidad donde se preparaba la comida para ofrecer a los participantes de la caravana.

En esa misma comunidad se tenía previsto hacer una denuncia sobre el estado de sitio en que se encontraba San Juan Copala y sus habitantes.

“Seguimos hasta la parte alta de Copala. Desde ahí se divisa el camino que va hacia el municipio. Nos percatamos de la presencia de la policía estatal, estaban rondando la zona, estaban dándoles protección a los asesinos”, asegura Esparza.

Instantes después empezaron las detonaciones. Omar fue el primero en identificar el sonido de las balas. Les pidió a sus compañeros regresar a Yosoyuxi para intentar comunicarse vía radio con la caravana.

Cuando llegaron a Yosoyuxi, Timoteo Alejandro Ramírez, líder del MULTI- quien fuera asesinado junto a su esposa en mayo de 2010 por cuatro hombres que se hicieron pasar por vendedores, y presuntamente identificados como miembros del MULT- le dijo a Omar que un tal David Venegas estaba hablando por la radio para avisar que la caravana había sido agredida.

Por unos instantes Omar logró comunicarse con Venegas; le preguntó qué había pasado, dónde estaban, dónde estaba Bety.

“Yo ya presentía que había pasado algo terrible y David confirmó que les dispararon a matar a todos los que iban en los vehículos”, recuerda Omar, que no puede hacer otra cosa más que ahogar su tristeza en un profundo silencio que dura algunos segundos.

La primera reacción de Omar fue intentar salir rumbo a Copala, pero los profesores de la Sección 22 y Timoteo Alejandro lo detuvieron. Decidieron entonces trasladarse a La Laguna, comunidad cercana al municipio de Putla, Villa de Guerrero, para conseguir un teléfono desde el cual solicitar auxilio.

“Le avisamos al procurador Evencio Nicolás Martínez; él sabía muy bien lo que estaba pasando. La Secretaría de Gobernación sabía que estábamos en una Caravana. Hablamos con varias personas que estaban enterados de este acto.

“Para mí era muy claro que la Delegación de Gobierno de Huajuapán -en ese tiempo encabezada por David Mayrén Sánchez- sabía lo que iba a pasar. Lo tenían claro, más bien fueron a ver que realmente saliéramos; fueron a ubicar en dónde y en qué nos estábamos moviendo cada uno de nosotros. Ellos sabían que ya íbamos y nos estaban esperando. Desde un día antes se preparó la emboscada, fue el gobierno del estado a través de la Ubisort. Nos pusieron cola para seguirnos todo el camino de la caravana hasta ver que entramos a Agua Fría. Un Tsuru blanco nos fue siguiendo todo el camino”, denuncia Omar Esparza.

A través de una llamada telefónica le avisaron a Esparza que una mujer herida había llegado al hospital del IMSS en Santiago Juxtlahuaca.

Inmediatamente regresaron a Yosoyuxi y de ahí se trasladaron a la cabecera municipal de Juxtlahuaca.

Al llegar al nosocomio, Omar intentó entrar a averiguar quién era la herida. Por varios minutos le impidieron la entrada y le negaron información. Forcejeó con elementos de la policía estatal que ya se encontraban en el hospital. Instantes más tarde le permitieron la entrada al lugar.

En una habitación con dos camillas encontró a Mónica Citlalli Santiago, estudiante de la UABJO y a Martín Sautan, observador belga. Ambos tenían heridas producidas por esquirlas de bala.

Omar les preguntó cómo se sentían y qué había pasado. Mónica lo abrazó; con voz apenas perceptible le dijo que Bety estaba muerta. Ambos viajaban en la misma camioneta en la que aún yacían los cuerpos de Cariño y Jaakkola.

Un escalofrío recorrió la espalda de Omar. Estaba atónito. No sabía si creer las últimas palabras pronunciadas por Mónica; sentía un vacío en el pecho y algo se acumulaba en su garganta impidiéndole pronunciar palabra.

Para esos instantes, el ataque a la caravana ya empezaba a *ser nota* en algunos medios y portales electrónicos, aunque circulaban muchos rumores sobre el número de heridos.

Desde las seis de la tarde del mismo 27 de abril, Omar exigió la entrada de la policía estatal para saber en qué condiciones estaban sus compañeros. Aunque le decían que Bety había muerto, él conservaba la esperanza de que sólo hubiera heridos.

“Los dejaron, por negligencia del estado, del procurador; ellos tienen parte de esa responsabilidad y también tendrían que estar en la cárcel por los asesinatos”, refiere Omar Esparza.

A pesar de las exigencias de Esparza y de representantes de otras organizaciones sociales y de derechos humanos que rápidamente se movilizaron a brindarle apoyo, la policía estatal les dijo que si no había órdenes de arriba, no entrarían a la zona triqui; lo que según la lectura de Omar, evidenció el vínculo del estado con la Ubisort como su grupo armado.

Desde el arribo de Omar a Santiago Juchitán su teléfono celular no dejó de sonar. Varios familiares de Bety habían tratado de comunicarse con él en el transcurso de la tarde para preguntarle qué pasaba y dónde estaba ella, pues algunos noticieros locales daban cuenta del ataque a la caravana y la posible desaparición de varios de sus integrantes.

“En esos momentos estás hecho una mierda, no sabes ni qué chingados, estás con la angustia y con la esperanza de que puedan regresar con vida, aunque en el fondo sentía que algo estaba muy mal”, dice Omar Esparza, llevándose las manos al rostro y frotándolo por algunos instantes.

A las 11 de la mañana del 28 de abril de 2010 recuperaron los cuerpos y se confirmó de manera oficial la muerte de Bety y Jyri.

Omar afirma que la policía del estado alteró la evidencia, que movieron los vehículos que habían entrado con la caravana para desvirtuar las declaraciones y gracias a videos que se filmaron durante el recorrido se pudo demostrar la alteración.

Tras recuperar los cuerpos, la policía ministerial amagó con detener a Esparza Zárate sin explicarle de qué delitos se le acusaba.

“Venía todo elaborado desde el estado, pero empezó a haber una reacción de respaldo y apoyo desde afuera muy fuerte que no dimensionaron. Empezó a darse una presión fuertísima en medios de comunicación; pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales y exigencias al gobierno del estado para que investigara los asesinatos.

“Yo creo que les hablaron (a los ministeriales) para decirles que no hicieran pendejadas”, dice Omar, echándose hacia atrás en un pequeño sillón marrón.

El cuerpo de Betty fue trasladado a Huajuapán de León esa noche. Cuatro cirios la esperaban en la casa que por varios años compartió con su familia.

II. Bety Cariño y Jyri Jaakkola

“Un campesino sin tierra no existe... es un campesino muerto”

“Apenas hace dos días yo pensaba, ¿a qué grupo de campesinos pertenezco en este país? Creo que a los sin tierra. Pensaba en lo bondadosa que puede ser la tierra a pesar de ser tan pobre”, dice Alberta Bety Cariño en una videoentrevista que circula en la red², realizada en mayo de 2008; dos años antes de su asesinato.

La joven mixteca pronunciaba estas palabras sentada en un sillón tapizado de tonos neutros; unas líneas perpendiculares rojas delimitan cuadros simétricos que contrastan con el blanco de la pared que sirve como fondo a la toma y con la serenidad de su mirada.

Se encontraba en las instalaciones del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), una casa acondicionada como oficina, ubicada en la colonia Jardines del Sur, en la ciudad de Huajuapán de León, Oaxaca; una colonia que a pesar de las amplias casas y relucientes fachadas que la caracterizan, se inunda en tiempos de lluvia. Hace más de un año que esa oficina está cerrada.

En los recuerdos y anécdotas de su infancia, Bety da indicios de sus preocupaciones, de su interpretación de la realidad que como hija de campesinos le tocó vivir y delinea una de sus principales inquietudes: la desigualdad social y la necesidad de impulsar la autonomía alimentaria para contrastar la dependencia económica de los grandes capitales.

“Mi papá no heredó tierras porque mi abuelo no tenía, más bien era mediero”, continúa Bety el relato, mientras mueve los dedos lentamente, como buscando las palabras ideales para explicar lo que implica ser mediero: sembrar la tierra de alguien más, hacerse cargo de todo el trabajo que eso genera y una vez lista,

² Marisa Sulmoni, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos de Gobixha, Código DH. <http://vimeo.com/64932044>, 12 de marzo de 2014.

dividir la cosecha en partes iguales, como si el propietario de la tierra hubiera trabajado tanto como el campesino que ofreció su paciencia, tiempo y cuidado al campo y a las pequeñas matas que mes con mes crecían ante sus ojos.

“El otro no hizo nada, sólo puso el terreno y dio la semilla; tú pusiste la siembra, la labor, la segunda, el deshierbe, la pizca. Todo lo pusiste tú y el otro fue a dividir a la mitad lo que salió”. El semblante de Bety luce sereno, pero a la vez ausente, como si con cada palabra que pronuncia regresara a esos días de niñez, a la carencia que implicaba la condición humilde de sus padres.

“Mi mamá era huérfana desde los siete años, pero sus padrinos le dejaron poquito menos de una hectárea, y ese terreno, al casarse con mi papá, fue de los dos”.

La Loma, como cariñosamente le dicen al terreno familiar, está en la ladera de un cerro seco, de tierra delgada y sin ningún afluente de agua cercano. De la siembra que de ahí se ha hecho por décadas, se sostuvo la familia Cariño Trujillo.

La mirada de Bety no hace contacto directo con la cámara, más bien levanta la cabeza que gira hacia su lado derecho de vez en vez para echar una mirada a su entrevistador que permanece en el anonimato toda la grabación. La lente estática solamente enfoca a la activista.

Alberta recuerda que aunado a las carencias de sus padres, les era imposible obtener apoyo de Procampo, un programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) destinado a financiar e impulsar la producción agrícola, pues para ello es necesario tener título de propiedad, ser ejidatario o comunero, y su papá no es nada de eso.

“Nunca tuvo acceso a los fertilizantes, y ¡qué bueno! Nunca tuvo acceso a créditos para el campo; entonces, todo lo que sembró, y hasta este momento lo que siembra, es en autonomía, es lo que él puede hacer.

“Me acuerdo que ocupábamos como abono el estiércol de los animales, llenábamos unos costales y eso le echábamos a la milpa todos los años”. Un breve gesto parecido a una sonrisa se dibuja en su rostro al comentar que empezó

a trabajar en el campo desde los cuatro años por ser la hija mayor y no tener hermanos varones.

Bety gira un poco la cabeza hacia la izquierda, se lleva la mano derecha al cuello, con un movimiento rápido aleja un mechón de cabello, cabello oscuro y poco ondulado que cuelga a la altura de sus hombros, se rasca ligeramente y vuelve a girar la cara en busca de su interlocutor: “me preguntaba ¿cómo sobrevivimos?, ¿cómo le hicimos?, ¿cómo le hizo mi papá? Pero la milpa no está sola, es un concepto diferente, ahora lo entiendo. La milpa es el maíz, el frijol, es la calabaza, son los quelites, los alaches, las pepichas, los pápalos; son todas las hierbas que ahí salen, las guayas, como le decimos a la flor de calabaza. Es todo lo que ahí sale.

“Cuando está creciendo la milpa, tú cortas unos quelites y haces una comida, cortas unos alaches y haces otra; cuando las calabacitas están tiernas, comes calabacitas, pero también puedes poner unas plantas de jitomate o algo y salen en tiempos de lluvia”.

El relato de Bety se acompaña de breves movimientos con las manos; cuando habla de cómo crece la milpa, pone la palma de su mano izquierda sobre la palma derecha y poco a poco hace que se alejen dando espacio a la planta que imaginariamente se forma y crece entre ellas.

“Así fue como vivimos. Mi papá sembraba ese pequeño terrenito y seguía siendo mediero, como siempre. Es muy triste ser mediero. Creo que desde niña lo entendí clarito, clarito. Desde niña dije: ‘no, esto no es justo’”.

Desde los seis años, al terminar las clases, Bety salía corriendo de la escuela; la tierra suelta de Chila de las Flores, Puebla, su tierra natal, alborotada por el viento seco y caluroso que prevalece en la mixteca poblana, se pegaba a sus piernas y brazos.

Llegaba a su casa exhausta, con la garganta y los labios secos, bajaba su mochila cargada con apenas algunos libros y uno o dos cuadernos y agarraba su morral para ir al monte a dejarle un taco a su papá y trabajar bajo el sol.

Cariño recuerda que alrededor de los 13 o 14 años una incógnita comenzó a rondar repetidamente en su cabeza: ¿por qué a la hora de la pizca el dueño se aparecía en la milpa y había que darle la mitad de la cosecha?

“Recuerdo a la hija de uno de los dueños con quien trabajaba mi papá: estaban los costales ya llenos de mazorca, ya divididos. Ella decía, por ejemplo: ‘papá, esta mazorca me gusta’, y la quitaba del costal de mi papá y lo ponía en el de su papá sólo porque le gustaba.

“Yo decía: ‘¿por qué ellos vienen a hacer eso?, una niña igual que yo, de 13 años, ¿por qué ella puede venir hasta el último, bajarse de su camioneta, llevarse los costales y nosotros tenemos que compartirlos con ellos, cargar nuestros burros y llevarnos nuestra mazorca?’. Es doloroso ver que el que tiene dinero, el rico, puede disfrutar de tu trabajo”.

Bety pronuncia la última frase con voz entrecortada; aprieta los labios por un instante, sus ojos oscuros se han hecho pequeños y vidriosos, la humedad busca adueñarse de ellos al mismo tiempo que sus fosas nasales se expanden. Cariño parpadea varias veces de manera rápida, como queriendo ahuyentar las lágrimas que se apilan en el contorno de sus ojos ya punto de derramarse. Frota sus manos y respira hondo. Con su dedo índice retira de sus pómulos las gotas saladas que le fue imposible contener.

Ahí continúa Bety, sentada; un cojín cuadrado con funda negra y diseño simétrico sobre sus piernas impide ver el dibujo que se delinea en la playera beige que viste; sólo se distingue el encabezado de la impresión, dice: “Liberando”.

“Mi mamá siempre se preocupó porque nosotros fuéramos a la escuela y aprendiéramos, porque no quería que sufriéramos tanto. Pensaba que yendo a la escuela ya no íbamos a sufrir, pero este país no tiene oportunidades”; agrega la activista ya sin lágrimas en los ojos, pero con la cabeza baja, su mirada perdida en la nada y sin dejar de frotarse las manos.

“En el camino vas adquiriendo conciencia y vas diciendo: ‘esto no es justo, no es normal, no tiene que ser así’. La lucha de todos estos años ha sido por tener

oportunidad de que nos dejen ser, porque un campesino sin tierra no existe; un campesino sin tierra, es un campesino muerto”.

La activista se frota la cara y cruza las manos sobre el cojín que sostiene en sus piernas. Pareciera que se abraza a sí misma. “Yo no entiendo cómo con este pedacito de tierra logramos comer todos los días. Fueron años muy difíciles, pero hasta este momento mi padre sigue llevando a la casa maíz, frijol, calabaza, agua y leña”, dice al recordar que su infancia fue una de las etapas más difíciles que le tocó sortear.

Hace un movimiento brusco y se echa hacia atrás para recargarse en el sillón, una mueca de duda se instala en su rostro, alza su mirada al cielo como buscando alguna explicación a la actitud de su padre, quien nunca ha pretendido tener otra cosa, pues a pesar de lo limitado de su ingreso, él siente que ha cumplido con su deber como el hombre de la familia.

Un inesperado brillo aparece en la mirada de la activista al comentar que su mamá era la que se preocupaba de su educación y la de sus hermanas.

“Ella fue la que empezó a trabajar el maíz que mi papá llevaba, lo convirtió en tamales y pozole, en gorditas de frijoles, en tamales de elote que nos mandaba a vender a las casas por las tardes cuando no era tiempo de siembra o de estar en el campo. De eso salió para que fuéramos a la escuela”, recuerda.

Una amplia sonrisa ilumina el rostro de Bety cuando se da cuenta que la creatividad y entereza de su madre generaron una cadena productiva que ayudó a conseguir los recursos necesarios para que pudiera cursar la primaria y la secundaria en su pueblo, y la preparatoria en Huajuapán de León.

Los recorridos de 24 kilómetros que Bety hacía diariamente para asistir a la preparatoria fueron dándole una perspectiva más amplia de las carencias y necesidades de la zona; entre las veredas polvorientas de las mixtecas se enteraba de la escasez de alimentos, el despojo de tierras, la migración de cientos de personas y el abandono del campo; vio que su familia no era la única que sufría privaciones y concluyó que algo debía hacer para denunciar todas esas injusticias.

La organización y resistencia, fueron sus primeras herramientas de lucha.

“Puedo decir que si me muero hoy, mi hijo mañana va a seguir con esta lucha y espero que él a sus hijos también les enseñe eso y podamos hacer una cadena larga que nunca termine, que sigamos resistiendo hasta siempre porque somos un pueblo fuerte”.

“Yo no soy yo, soy muchas”

“Somos una organización social comprometida con los pueblos en resistencia, donde las personas y las comunidades son lo más importante”, decía Bety a pregunta expresa sobre el trabajo que desempeñaba el Centro de Atención Comunitaria Trabajando Unidos (CACTUS).

Fundado en 1998 por Bety, Omar Esparza Zárate, su esposo, y otros colaboradores, CACTUS se ha caracterizado por desarrollar acciones y proyectos con un enfoque incluyente que pueda servir como alternativa a los impulsados por las dependencias gubernamentales, consideradas como estructuras excluyentes y deshumanizantes que dejan de lado a las minorías.

Uno de los objetivos de CACTUS es contribuir a la creación de un mundo incluyente, donde puedan desarrollarse y complementarse muchos mundos y cosmovisiones.

“Nuestro quehacer es sembrar sueños para cosechar esperanzas”, declaraba Bety en 2008: “en el futuro queremos ser un movimiento social que pueda dar elementos para generar autonomía y autogestión”.

Pero el centro de apoyo no nació de la nada ni Bety era una improvisada en el tema. Al momento de su asesinato, tenía una trayectoria de más de 15 años de trabajo con comunidades indígenas de Guerrero, Puebla y Oaxaca.

Desde muy pequeña adoptó los conceptos de organización y cooperación mutua, lo que la llevó a conformar un grupo de niñas llamado “Las abejas”, en su natal Chila de las Flores, en la Mixteca poblana.

En su adolescencia entabló lazos con Alianza Cívica, una organización ciudadana plural e independiente, cuyo objetivo principal ha sido contribuir a la transición democrática mediante el impulso de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Bety también era parte de un grupo de jóvenes llamado PACID, perteneciente a las comunidades eclesiales de base; mismo que años después fue diluido por la propia Iglesia. Este grupo presentaba obras de teatro en las comunidades marginadas, como un medio para acercarles diversas expresiones artísticas y culturales.

Colaboró como maestra con el Patronato Nacional de Educación (Panae), de identificación marista, donde conoció a Luis Ramírez, cofundador de CACTUS, quien le ayudó a conseguir una beca en el Colegio de las Hermanas del Divino Pastor, en Tehuacán, Puebla, donde estudió la licenciatura en educación primaria.

Mientras estudiaba en Tehuacán, Cariño se sumó al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), en la alfabetización de la población adulta de las colonias marginales; en su mayoría trabajadores de maquiladoras e indígenas migrantes de la zona Mazateca, la Sierra Negra y la Mixteca.

En 1994, Bety conoció a Omar Esparza Zárate, su pareja, de quien sólo la pudieron separar las balas.

Se conocieron cuando ambos participaban como observadores ciudadanos de aquel histórico proceso electoral federal que llevó a la silla presidencial a Ernesto Zedillo Ponce de León, luego de que el *delfín* de Carlos Salinas de Gortari, Luis Donaldo Colosio, fuera asesinado en Lomas Taurinas. En ese tiempo mucha gente creía que la observación ciudadana podía evitar un fraude electoral.

El término de las elecciones no fue motivo de distanciamiento entre ambos. Omar la invitó a colaborar como maestra en San Esteban Necoaxcalco, una comunidad indígena ubicada al sur de Puebla, donde él trabajaba con niños, proyecto que inmediatamente entusiasmó a Bety. Omar correspondió el favor sumándose a las actividades que ella coordinaba en las colonias de Tehuacán.

Al término de sus estudios, Bety desarrolló un proyecto de cooperativas y cajas de ahorro en la región del valle de Puebla. Quería que la gente disminuyera su dependencia económica de los créditos bancarios y de las remesas de sus familiares migrantes para subsistir; estaba convencida de que con su ahorro, las familias podrían acceder a una vida más justa. En esa época, Bety coordinaba más de 100 grupos de mujeres organizadas.

En abril de 2001, Bety y Omar se mudaron a la Mixteca oaxaqueña; a Huajuapán de León, donde retomaron el trabajo con las comunidades, ahora formalmente como CACTUS. Su idea era replicar el esquema de las cajas de ahorro que tan exitoso seguía desarrollándose en Puebla, e impulsar procesos de autonomía económica, con el objetivo de que la gente invirtiera en proyectos de desarrollo dentro de su misma comunidad.

Al principio, la idea de regresar a su comunidad no le agradaba, recuerda Carmen Cariño, su hermana, pero a medida que su trabajo daba buenos frutos en el valle de Tehuacán y adquiría conciencia política y de su entorno, cambió de parecer y decidió que uno de sus objetivos centrales sería el impulso a la educación de jóvenes mixtecos.

En eso concentró sus esfuerzos Bety durante 2004 y 2005, al mismo tiempo que se puso al frente del Panae. A través del patronato, logró la creación de las primeras preparatorias comunitarias indígenas de la Mixteca.

Durante ese mismo periodo, Bety entabló relación con el Centro de Estudios Ecuménicos, con el que colabora en la alfabetización de comunidades marginales en Guerrero.

Durante el movimiento social de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006, la represión sufrida a manos de las dependencias de seguridad estatales y la desinformación, incluida la manipulación de la información que se generaba en medios de comunicación a nivel local y nacional sobre lo que se vivía en la entidad, CACTUS vio abrirse ante sus ojos una nueva ventana de oportunidad: la comunicación indígena.

Con ayuda de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Bety y Omar instalaron una radio alternativa que se convirtió en el medio para denunciar y hacer públicas las agresiones de que eran objeto los simpatizantes de la APPO, ante la subordinación al estado de los medios de comunicación tradicionales.

Para CACTUS y para Bety en particular, era muy importante que las comunidades generaran contenidos originales que fueran difundidos con un lenguaje que les fuera familiar y a través de sus propios medios, no de radiodifusoras comerciales que transmitían conceptos e ideales que les eran completamente ajenos.

El centro se abocó a la construcción de una red de radios comunitarias en la Mixteca oaxaqueña, logrando la creación de: *La voz de las nubes*, que transmite desde San Juan Mixtepec; *La voz del monte*, de San Sebastián del Monte; *Radio liberando la palabra*, de Tezoatlán de Segura y Luna; *La voz de la libertad*, de San Pedro Yosotato y, por supuesto, *La voz que rompe el silencio*, de San Juan Copala.

El asesinato de Teresa Bautista Marino y Felicitas Martínez Sánchez, locutoras de *La voz que rompe el silencio*, el 7 de abril de 2008, fue un duro golpe para Bety.

Las jóvenes triquis habían recibido capacitación de CACTUS, que también acompañó los primeros meses de trabajo de la radio. Un día después de su asesinato, el 8 y 9 de abril, las locutoras participarían en un foro sobre derechos de los pueblos indígenas en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Teresa, Felicitas y Bety eran las encargadas de hablar sobre el trabajo de las radios comunitarias en la Mixteca, en particular de la zona triqui, además de coordinar la comunicación y difusión de los trabajos del encuentro.

Cariño denunció inconsistencias en la investigación de los asesinatos y señaló al gobierno estatal, en ese entonces encabezado por el priísta Ulises Ruiz Ortiz, de comprar testimonios a través de la entrega de casas o automóviles para desvirtuar las indagatorias. Las dependencias oaxaqueñas no consideraron como una de sus líneas de investigación el trabajo periodístico que realizaban las locutoras,

argumentando que carecían de la formación académica que las respaldara como comunicadoras.

A casi seis años del doble homicidio, no se ha esclarecido el motivo del ataque ni se encuentran identificados o detenidos los presuntos responsables del mismo.

Entre las preocupaciones de CACTUS también se encontraba la problemática que en comunidades indígenas generaba la explotación irracional de recursos naturales, sobre todo minerales, y que rápidamente se extendía en el país, encabezada por empresas trasnacionales, principalmente canadienses.

A través de la relación que forjaron con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la que Betty también formaba parte, se dieron a la tarea de documentar y denunciar la explotación irracional de los recursos minerales del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. En Oaxaca comenzaban a ser evidentes los atropellos de las mineras y el saqueo de recursos naturales en las comunidades de San José del Progreso, Ayuquillilla y Amatlán.

CACTUS se percató de que había focos rojos cuando, a pesar de la inconformidad de los pueblos indígenas, compañías trasnacionales ofrecieron comprar tierras ejidales o comunales a precios irrisorios para el desarrollo de megaproyectos, como parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec.

Además de su preocupación por el medio ambiente, Bety sentía especial interés por los derechos de las mujeres indígenas y se reconocía en ellas.

Comentaba, en las pláticas que sostenía frecuentemente con Fernando Urbano, actual coordinador del centro, que a nivel nacional el tema había avanzado sustancialmente; sin embargo, en los pueblos indígenas, los mecanismos con que se sigue ejerciendo violencia contra las mujeres son completamente distintos, de ahí su preocupación por desarrollar alternativas para resolverlos.

“Pensamos en la equidad, en que tengamos oportunidades y que nos dejen, pero creo que eso no nos lo van a dar, lo tenemos que arrebatarse”, decía Bety con un

gesto que denotaba decisión en una entrevista realizada en mayo de 2009³: “si esperamos a que nos den oportunidad de hablar o de hacer las cosas vamos a tardar más.

“La vida nos exige que hagamos algo por nosotras, por nuestras hijas, por las hijas de nuestras hijas y por las demás generaciones que vienen. Ellas tienen que ser mujeres mucho más fuertes que nosotras. En mi caso, yo no soy yo, soy muchas que vinieron antes de mí y que hicieron que yo fuera esta... trabajamos para que ellas puedan tener otro tipo de vida”.

Como parte de ese compromiso con las mujeres, Bety se enfocó a impulsar su participación en lo que llamaba *economías comunitarias*, que tenían como objetivo generar condiciones para que las comunidades reactivaran su economía interna para que no tuvieran que depender de los programas de asistencia social del gobierno federal, e incluso de los abusos de las decenas de casas de empeño que abundan en la Mixteca y que han sido protagonistas de robos y estafas millonarias, siendo la más afectada, como siempre, la población más pobre.

“En las comunidades, el papel de las mujeres es todavía muy marginal. Si es la fiesta del pueblo les toca hacer la comida, servirles a todos y lavar los trastes, pero no la toma de decisiones ni cargos de representación... poco a poco hemos exigido que haya más mujeres participando y ya las hay”, declaró Bety.

“Ha sido difícil que las mujeres puedan involucrarse de manera mucho más integral, están a pedazos, a pedazos de su corazón”, decía Bety entusiasmada por el cambio que se iba generando en las comunidades donde tenía presencia CACTUS.

Lograr una vida digna para sus semejantes, era el sueño viable de Alberta Cariño.

Contrario a las prácticas clientelares oficiales y partidistas, Cariño no veía en la asistencia social y la dádiva gubernamental, una opción para potencializar el desarrollo de las comunidades; más bien estaba convencida de que el ejercicio

³ “Bety Cariño sobre el papel de las mujeres en las radios comunitarias”, <http://www.youtube.com/watch?v=yWpo4X2Hibk>, 17 de marzo de 2014.

pleno de sus derechos, tanto individuales como colectivos, empoderaría a la sociedad mexicana.

Cofundadora de la APPO-Mixteca, integrante de la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas, participante en el Foro Mesoamericano de los Pueblos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos; ecologista, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los migrantes, promotora de la defensa de la milpa y la soberanía alimentaria, hija, hermana, madre y compañera, Alberta Cariño murió acribillada por las balas de un grupo paramilitar en su intento de llevar esperanza a la comunidad triqui.

El otro crimen

El jueves 29 de abril por la mañana, Omar e Itandehui Esparza Cariño recibieron una noticia que les cambió la vida.

Hacía unas horas que su padre, Omar Esparza Zárate, había regresado de Santiago Juxtlahuaca escoltando una camioneta de la Subprocuraduría Regional de la Mixteca en la que trasladaban el cuerpo de Bety Cariño, su esposa y madre de los niños.

Cuando llegó a Huajuapán de León, el cuerpo de Bety fue llevado al antiteatro del panteón El Gólgota para hacer la necropsia de ley y posteriormente fue entregado a sus familiares.

Durante algunas horas, decenas de personas velaron a Bety en su propia casa y posteriormente, sus restos fueron trasladados a Chila de las Flores, Puebla, donde fueron “sembrados”. Omar quería que sus hijos la acompañaran en sus últimos momentos, por lo que tuvo que decirles que su madre no volvería.

“Les dije que tenía una noticia grave que contarles y que esperaba que lo tomaran con tranquilidad. Les dije que había habido un accidente y que mamá no

iba a regresar a casa”, recuerda Omar Esparza frente a un vaso de agua mineral que burbujea y comienza a opacarse por lo frío del líquido.

“Me preguntaron qué había pasado, les repetí que su madre había tenido un accidente y que no volvería a casa, que íbamos a ir a acompañarla para llevarla al panteón, que íbamos a acompañar a su madre en sus últimos momentos y que era momento de despedirla. Les dije que no sintieran miedo, que ella iba a estar con nosotros, que siempre iba a estar en nuestro corazón y que tenían que ser fuertes”, dice Omar, un hombre alto y corpulento.

Lleva la melena ondulada atada hacia atrás; algunos cabellos más rebeldes escapan de la liga que los rodea y se enrollan sobre sí mismos dando la apariencia de estar enmarañados. Omar conserva esa apariencia desgarrada que lo caracteriza: barba media, bigote sin recortar, patillas largas y cabello hasta los hombros.

Recuerda el llanto de sus hijos, sus caritas tristes, las constantes preguntas sobre su mami. Lloraron, lloraron mucho. Sufrieron, sufrieron mucho; su tristeza inundó a Omar que no pudo hacer más que abrazarlos y mantenerlos a su lado, de la mano, mientras depositaban los restos de Bety en la tierra que la vio crecer.

A cuatro años del asesinato de Bety, Omar continúa exigiendo justicia: “cuando hablamos de justicia, no hablamos de justicia solo para Bety, sino para Omar, para Ita y todos aquellos que caminamos con Bety; justicia para los 23 muertos de Copala, para las mujeres, para el pueblo triqui”.

Ha alzado la voz; su rostro se ha puesto serio, su mirada endurecido, frunce el ceño como aquella vez en 2008 que se enfrentó a elementos de la Policía Federal cuando desmantelaron *La rabiosa*, radio comunitaria que transmitía desde Huajuapán de León y que otras emisoras locales denominaban “pirata”.

Pareciera que no ha pasado tanto tiempo; de no ser por las canas en su cabello y una que otra que se asoma en la tupida barba que Omar conserva; esos recuerdos parecen no estar muy distantes.

“Omar ya tenía conciencia de lo que yo le decía”, continúa narrando Omar el activista, ahora en su faceta más humana, la de padre: “era un niño de ocho años, pero de una conciencia más clara. Sufrió, como hasta ahora sufre, pero con los años se ha aliviado un poco”.

Su rostro vuelve a transformarse; lo ha invadido la ternura, un pequeño brillo invade sus ojos y por un instante se le quiebra la voz cuando empieza a hablar de su hija: “Ita dice que no la recuerda mucho, que no recuerda cómo era. Le describo cómo era con ella, cómo jugaban, cuándo se enojaba...Le digo que la amaba, se la describo como madre, le describo al ser humano, a Bety como mujer”.

Omar admiraba de Bety su persistencia. Afirma que era capaz de convertir en realidad las ideas, aterrizar las reflexiones que como equipo y familia se generaban a su alrededor a través de su carisma y el uso adecuado de las palabras. Recuerda que era muy fuerte y eso le permitió posicionar las necesidades de las comunidades como temas centrales de la región.

A pesar de en la Mixteca persiste el machismo, Bety defendía y les daba voz a las mujeres que raramente asistían a las asambleas en donde eran prácticamente invisibilizadas; tomaba la palabra y decía lo que pensaba, aunque no perteneciera a esa comunidad y hubiera llegado como simple invitada.

Omar recuerda que en una reunión en Guadalupe Xonoxtle, localidad de San Miguel Amatitlán, los hombres “se encabronaron” y terminaron por abandonar la reunión al sentirse agredidos por el discurso de Bety, pero eso no la detuvo y ante la presencia de puras mujeres terminó de explicar su planteamiento y se hizo escuchar.

Betty tenía un carácter fuerte, pero al mismo tiempo era tierna.

Le gustaba bailar música de viento, los jaripeos, los toros, las fiestas de los pueblos y aunque lloviera, tronara o relampagueara, buscaba la forma de asistir a ellas. Por nada se perdía las fiestas de su pueblo.

“Bety se entregaba al dolor de los demás, se involucraba. Cada Semana Santa viajaba a la Sierra Negra de Teotitlán de Flores Magón a compartir con la gente y me invitaba. Recuerdo que una vez en tierra mazateca, veníamos bajando la sierra y encontró a una niña con unos huaraches de plástico y ella llevaba zapatos.

“Recuerdo cómo se quitó los zapatos y se puso los huaraches. Bajamos tres horas, caminando por la montaña al municipio de Teotitlán, en la sierra. Recuerdo sus pies quemados. Era desprendida de las cosas materiales, las soltaba, se desposeía de ellas”, dice Omar al mismo tiempo que en su rostro asoma una sonrisa.

Omar e Itandehui Esparza Cariño nacieron en junio de 2001 y 2004, respectivamente.

La llegada de Omarcito, como cariñosamente lo llama su padre, disminuyó la actividad de Bety porque para ella era muy importante dedicarle tiempo a su hijo.

Por un año dejaron de ser tan frecuentes los viajes a la ciudad de México, a las comunidades de Guerrero, Puebla y Oaxaca. La vida cotidiana de la familia se concentró en el trabajo que desarrollaban en Huajuapán de León y comunidades cercanas; en atender a los compañeros que llegaban a recibir capacitación en las oficinas de CACTUS y en promover en las colonias marginales su proyecto de cajas de ahorro.

Meses más tarde Bety comenzó a dar clases en la primaria Macedonio Alcalá y en la preparatoria Luis Donaldo Colosio, ahí mismo en Huajuapán, mientras reforzaba el vínculo con las comunidades de la zona. Para ella era prioridad pasar tiempo de calidad con sus hijos.

Con la llegada de Itandehui vinieron también más responsabilidades para Bety, pues ese mismo año asumió la coordinación de CACTUS.

Fue imposible que desde sus primeros pasos los niños no se vieran de cerca el trabajo de Bety y Omar, pues a su casa llegaba gente de muchas partes del

mundo a hacer trabajo solidario en la región y los pequeños convivían por semanas o meses con ellos.

“Los niños platicaban con la gente, les preguntaban cómo era su país, por qué luchaban, desde siempre Omar ha tenido una visión clara de la lucha por la tierra, por el territorio, el aporte de Zapata sigue siendo algo que marcó su vida”, dice orgulloso el padre quien además reconoce que tras la muerte de Bety, los niños se han involucrado en el activismo social de manera voluntaria.

Con el paso del tiempo Omar e Ita han querido conocer más detalles del asesinato de su madre. Esparza Zárate dice que con calma, cuidado, paciencia y mucho diálogo, sus hijos han podido ir aliviando sus heridas, miedos e inquietudes. “Ellos saben que mamá no va a regresar, que se fue, que ya no existe, aunque es muy cruel, pero que va a estar en nuestra memoria, en nuestro corazón, en nuestra lucha y en la vida diaria.

“Les digo que si quieren ver a su madre pueden pararse frente al espejo y mirarla porque son parte de ella; una mitad de ella y que ahí pueden encontrarla”.

Actualmente los tres viven fuera de Oaxaca: “hace cuatro años que nos fuimos, después de lo que pasó ya no regresamos más a vivir ahí. Nos exiliamos prácticamente del lugar donde ellos habían crecido, de sus amigos. Para un niño eso es terrible...ese es el crimen que pocos ven o pocos saben, centran toda su atención en Bety por su carisma, su lucha, pero también están los niños, su inocencia, su manera de mirar el mundo sin entender qué pasaba”, dice Omar despidiéndose de prisa, pues ya va tarde a otra reunión.

Jyri y el llamado del sur

A un costado del Palacio de Gobierno de Oaxaca, en una de las calles tapizadas de vendedores ambulantes de tlayudas, quesillo, mezcal, frutas en conserva, artesanías bordadas y otras más esculpidas en diminutos trozos de madera, el sol resplandeciente encandila los azules ojos de Eeva-Leena, una mujer de poco más de medio siglo, de la que un grupo de reporteros con grabadora en mano busca

obtener una declaración, un comentario aunque sea breve y en un español pausado que obliga a los entrevistadores a cuestionar alternadamente para volver a registrar su voz.

El 29 de agosto de 2010, Eeva- Leena y Raimo Jaakkola visitaron el plantón que en el zócalo de Oaxaca, mantiene instalado un grupo de mujeres triquis que salieron huyendo de San Juan Copala a consecuencia de la intimidación, agresiones y actos de violencia que persisten en esa zona de la Mixteca.

Ambos ciudadanos finlandeses acudieron al campamento improvisado con plásticos, cobijas rotas y cartón, a solidarizarse con las mujeres triquis y, sobre todo, a conocer aunque sea de manera escueta, las circunstancias que las alejaron de su comunidad y que propiciaron el interés de su hijo en participar en una caravana humanitaria de la que no regresaría, sino muerto de un balazo en la cabeza, cuatro meses antes.

Eeva y Raimo son los padres de Jyri Antero Jaakkola, promotor y defensor de derechos humanos, asesinado en una emboscada, presuntamente a manos de un grupo paramilitar. Desde hace cuatro años, ellos, al igual que los familiares, amigos y compañeros de Bety Cariño, exigen justicia para sus muertos.

Con una mirada serena y casi resignada, Eeva-Lenna se dice orgullosa de la manera de pensar y la forma de vida que adoptó su hijo.

Jyri, activista de derechos humanos y promotor del comercio justo, llegó a México en febrero de 2010. Desde hacía varios años que venía desarrollando un profundo interés por conocer la forma de vida, organización, usos y costumbres de las comunidades indígenas mexicanas. Planeaba quedarse un año en nuestro país y después regresar a su tierra natal para socializar lo aprendido.

Su madre, una mujer esbelta, rubia, de piel blanca y ojos de un azul tan claro que parecen casi grises, recuerda que Jyri era muy sociable y curioso; desde pequeño hacía muchas preguntas y escuchaba atentamente las respuestas que obtenía.

Deportista en su juventud, también fue artista: le gustaba pintar.⁴

Jyri entendía el español gracias a su parecido con el portugués, que dominaba, y durante los dos meses que estuvo en México; lo aprendió a hablar de manera fluida.

Mantén contacto vía telefónica con sus padres; les contaba sobre Oaxaca y su gente, de la comida, los calores y de las organizaciones civiles y sociales con las que colaboraba.

En la tierra de Juárez, Antero Jaakkola participó como voluntario en la organización Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía Local (VOCAL).

Colaboraba en el desarrollo de proyectos de soberanía alimentaria y cambio climático. Admiraba las formas organizativas de los pueblos y la calidez de la gente.

Le interesaba, además, la aplicación de la justicia. Había suspendido sus estudios universitarios por algún tiempo, porque sentía que era necesaria su presencia en el sur: “para él era necesario venir a aprender cosas que después pudiera utilizar en sus estudios; estudiaba ciencias políticas, sociología y lenguas”, declaró Eeva en una entrevista realizada en diciembre de 2010 con la revista *Contralínea*.⁵

“En la casa se hablaba mucho de justicia y de equidad, esos temas eran importantes para Jyri en sus relaciones con otras personas...era bueno escuchando a los demás; pensaba que los derechos de los demás eran más importantes que sus propios derechos”, decía Eeva con un gesto de admiración y orgullo en su rostro.

En su natal Finlandia, Jaakkola colaboraba con la asociación *Uusi Tuuli* (Viento Nuevo), cuyo principal trabajo es desarrollado a través de los viajes que sus miembros realizan en el barco de vela *Estelle*, con la finalidad de promover el comercio justo en beneficio de comunidades indígenas y pequeños productores.

⁴ Verónica Villalvazo, “Acuden padres de Jyri Jaakkola a Oaxaca”, <http://www.youtube.com/watch?v=OCTicillriM>, 7 de abril de 2014.

⁵ “Jyri Jaakkola y Bety Cariño crimen impune 2/2”, Revista *Contralínea*, <http://www.youtube.com/watch?v=-aZYqGs7a-g>, 31 de marzo 2014.

Había trabajado como voluntario de la Red Europea de Tiendas del Comercio Justo en Holanda y estaba convencido de la necesidad de promover la democracia a través de la elección directa de representantes.

La dedicación y compromiso que ponía en todos sus proyectos le permitieron ver en 2002, la marginación de Angola y la pobreza de Bangladesh.

En sus viajes, Jyri pudo observar la realidad de los países en desarrollo: las injusticias, la inseguridad, el acaparamiento, las tragedias humanas y el abuso por parte de los grandes capitales; la inacción de muchos gobiernos y la corrupción de otros tantos, además de la destrucción de riquezas naturales y el patrimonio cultural de muchos de esos pueblos oprimidos.

Para Jaakkola, acabar con esa opresión ejercida por los grupos de poder era un asunto de vital importancia para recobrar la autonomía y la dignidad de los pueblos.

“Viento Nuevo colaboraba con organizaciones mexicanas en la promoción del comercio justo; importaban café de México a Finlandia y querían generar proyectos con otras organizaciones”, dice Raimo Jaakkola, padre de Jyri.

El hombre de pelo completamente cano y ojos azules agrega que su hijo tenía especial interés en el tema de derechos humanos; particularmente en el derecho a la educación, al acceso a servicios de salud de calidad y en general, a tener una vida segura.

Fue esa inquietud la que lo llevó a viajar a México y posteriormente sumarse a la caravana humanitaria que además de entregar víveres, tenía como objetivo documentar las condiciones de vida de los indígenas triquis; las agresiones de las que eran víctimas a manos de los grupos que se disputan el poder en la zona y las circunstancias en las que sobrevivían tras varios meses de sitio por un grupo armado.

“Tenía un sentido fuerte de justicia; estaba muy interesado por los demás seres humanos”, agrega el hombre que pensaba tener a su vástago de regreso en la helada Finlandia, y lo esperaba vivo.

Los pensamientos e ideales de Jyri se traducían también en acciones solidarias y en su vida cotidiana: procuraba la adquisición de productos agrícolas cultivados en granjas locales y de manera directa, sin intermediarios que incrementaran los precios por el simple hecho de poseerlos.

En un video publicado en mayo de 2011, Jyri expone una hipótesis acerca del porqué de la imperiosa necesidad de la sociedad actual por el consumo: “creo que gran parte de nuestra cultura del consumismo tiene que ver con la falta de oportunidades de elegir nuestras vidas. No somos libres y por eso consumimos, para sentir que estamos en control de lo que pasa y por eso tenemos que hallar nuevas formas de libertad y de autonomía”.⁶

Antero no tenía que esforzarse por tener una actitud positiva ante esa realidad que tanto le lastimaba; se mantenía firme y multiplicaba el mensaje de solidaridad y compromiso con un comercio justo y a favor de los pequeños productores.

Confiaba en que a través de la cooperación, primero entre personas y luego entre pueblos enteros, se podría lograr un intercambio cultural y de aprendizaje más profundo, pues admiraba que aun inmersas en una sociedad de vorágine, hubiera comunidades que preservan sus tradiciones y formas de vida: su identidad y cosmovisión como parte de sí mismos.

Quien compartió con Jyri en Oaxaca afirma que tenía un alma migrante que se movía entre pueblos, entre idiomas, entre culturas y religiones; siempre abierto y escuchando.

Tenía ideas que para muchos podrían ser solamente sueños; sin embargo, con sus acciones demostraba que los sueños pueden hacerse realidad, además, su empatía le permitía compartir las alegrías y tristezas de los demás a un nivel emocional profundo.

En 2010, además del trabajo que desarrollaba con VOCAL, Jyri trabajaba para Viento Nuevo en la promoción del respeto de los derechos de autodeterminación

⁶ “Jyri Antero Jaakkola Asesinado en San Juan Copala Oaxaca por paramilitares MULT-Ubisort”, <http://www.youtube.com/watch?v=HMqprgozeTw>, 14 de abril de 2014.

de las comunidades indígenas, así como en la promoción de condiciones que les permitieran una alimentación autosuficiente y sostenible.

Meses atrás, el finlandés había formado parte de una campaña global que promovía condiciones de equidad para todos los pueblos, así como la aplicación de justicia para las comunidades indígenas que hubieran sido afectadas por el cambio climático; de ahí su intención de conocer San Juan Copala y la forma en que eran explotados sus recursos naturales.

En febrero de 2011, Eeva y Raimo, junto con su hijo menor, viajaron a México para recorrer parte de las comunidades de Chiapas en las que Jyri había trabajado antes de su asesinato. Pensaban que si conocían esos lugares les sería más sencillo poder aceptar que no lo volverían a ver con vida.

Eeva confiesa que tuvo miedo cuando Jyri les comunicó su decisión de viajar a México, y después de su asesinato sintió todavía más, cuando ellos se embarcaron en el mismo viaje.

Como Jyri al dejar Finlandia en febrero de 2010, sus padres sintieron que era necesaria su presencia en México para buscar en los pueblos indígenas del sureste del país la semilla de la verdad y la esperanza, que habrían de llevar a Europa.

“Si con mi sola presencia puedo prevenir la violencia, lo haría”: Jyri

La visión de un barco de vela navegando por el inmenso azul del mar, es la primera imagen que aparece en la toma que lentamente se abre y gira hacia la izquierda, para descubrir que la nave se desliza en una fotografía que se encuentra pegada a una pared blanca, justo por encima del recorte de un artículo del que apenas se alcanzan a distinguir algunos niños rodeados de plantas.

De la nada, emerge una voz serena que es acompañada por algunos acordes de guitarra que se preceden unos a otros, como las diminutas gotas del sereno al amanecer.

“Ésta será, en muchas formas, una experiencia de aprendizaje. Quizá también un viaje para conjuntar esperanzas y puntos de vista diferentes”, decía Jyri Antero Jaakkola, internacionalista y defensor de derechos humanos de nacionalidad finlandesa, en una entrevista realizada en Europa, apenas un par de meses antes de su asesinato en San Juan Copala, Oaxaca.⁷

En un diminuto espacio que parece ser oficina, bodega y archivero, se encuentra Jyri, sentado en una silla negra. El joven de poco más de 30 años viste un pantalón de mezclilla azul deslavado, tenis, una playera negra de cuello redondo y una sudadera café, completa el atuendo.

“Tengo un fuerte presentimiento y creo que todo parece dirigirse en una dirección la cual resolverá el problema del cambio climático, así como otros problemas socioeconómicos, ya que existe la necesidad de un gran cambio cultural y social”, plantea el finlandés con un tono de voz pausado y grandilocuente.

Realiza pocos ademanes, apenas mueve las manos para reforzar sus palabras; su piel blanca, cabello castaño y alborotado, ausente en la frente y retraído hasta la coronilla, terminan de delinear la imagen de quien murió tratando de ayudar y proteger a Betty Cariño, que yacía herida de bala a su lado.

Antero prosigue su hipótesis sobre la necesidad de un cambio social en toda Europa; afirma que el sistema capitalista, basado en el continuo crecimiento económico, ya no es sustentable y debe ser cambiado. Agrega que las diferentes soluciones técnicas implementadas solamente han desplazado las problemáticas de un lugar a otro.

Sin embargo, en la cultura occidental europea, Jyri no vislumbraba esperanza para generar ese cambio social radical, pero sí lo veía en América Latina, y en particular en México, a través de los muchos y diversos movimientos sociales.

Antero Jaakkola quería aprender algo de todos ellos.

⁷ Torsti Suonio, “Jyri Jaakkola interview 01.02.10”, traducción de Miguel Ángel Dávila Espinosa <http://www.youtube.com/watch?v=tMy7yTvFiNU>, 15 de abril de 2014.

Tenía la intención de regresar a Finlandia y compartir los conocimientos asimilados, divulgar que con algunas acciones precisas, generar un cambio es posible; que realmente existen alternativas y esperanzas para cambiar esa forma de vida consumista y banal.

Una puerta al fondo de la toma se abre. De ella emerge una figura masculina vestida completamente de negro de la que no se alcanza a percibir el rostro. Pasa delante de Jyri y su entrevistador, que en ningún momento aparece ante la cámara, y se esfuma por el lado izquierdo de la toma. La puerta al fondo queda entreabierta, mientras Jyri continúa su exposición.

Sabía de lo particular que para los mexicanos era ese 2010 y lo significativo que podía llegar a ser la conmemoración de 200 años del inicio de la lucha por la Independencia y cien más de la Revolución Mexicana.

“Estos días en particular juegan un gran rol en la forma de vivir en México; estos días probablemente generen conversaciones e intentos por cambiar la situación política. Actualmente, la mayoría de las personas cree que la Independencia está vendida y que las grandes compañías e inversionistas extranjeros tienen control sobre los recursos naturales, la economía nacional y todo lo demás.

“No existe nada de la Independencia por la que ellos lucharon; no son los mexicanos quienes realmente toman las decisiones, sino el capitalismo, la economía global, quienes realmente establecen las reglas.

“Lo mismo ocurrió con la Revolución, todos los sueños e ideologías fueron vendidas. De la premisa: ‘Tierra y Libertad’, de Emiliano Zapata, no queda mucha esperanza”.

Cientos de documentos y archivos construyen la fortaleza de Jyri. Carpetas azules, rojas y verdes rotuladas permanecen erguidas escuchando las disertaciones del también estudiante de ciencias políticas. Una antigua computadora alcanza a verse sobre un escritorio a espaldas de Jyri. Junto a ella, una taza amarilla, seguramente compañera solidaria de tantas noches de trabajo y desvelos.

“Parece que es tiempo de poner en práctica algunas de las premisas revolucionarias y volver realidad esos sueños”.

Para Jyri era muy importante estar en México por la creciente posibilidad de que justo el 2010 fuera el telón en que nacieran grandes movilizaciones sociales y acciones políticas.

Creía fervientemente que existía una posibilidad de cambio; lo vislumbraba así tras conocer el levantamiento social en Oaxaca en el 2006, así como la existencia de comunidades que buscan una alternativa al capitalismo.

“Las formas de autonomía desarrolladas por los zapatistas, así como muchas otras cosas, son ingredientes para construir un mundo diferente, por eso considero que en esa vía hay esperanza, además los tiempos coinciden notablemente, por eso quiero estar allá, para aprender de eso”.

A pesar de todo ese entusiasmo, Antero también era consciente de la represión que esos movimientos podrían enfrentar. Veía latente la posibilidad de que las organizaciones fueran cooptadas o agredidas con métodos violentos.

“Si con mi sola presencia puedo cambiar y prevenir un poco la violencia, eso es lo que haría”, sentenció Jyri mientras se mecía levemente en la silla giratoria impulsado con los pies.

“Como Paulo Freire decía: ‘la solidaridad real es que tú te pongas en el mismo lugar que aquellos con los que eres solidario’; lo cual quiere decir, que de alguna manera, debo entrar en el juego.

“Incluso si no me pongo en el mismo lugar de la gente local por mi color de piel, que actúa de alguna forma como protector, sólo con estar con la gente ayudaré e intentaré difundir la información acerca de los problemas que enfrentan así como sus metas. Creo que es la principal razón por la cual voy para allá”.

En todo el video no se escucha pregunta alguna, no aparece el rostro del interlocutor de Jyri ni conocemos su voz.

Antero sentía que su viaje a México sería importante por las conexiones que previamente había forjado con varios movimientos políticos en nuestro país; sabía que muchas veces era más atractiva la presencia de extranjeros para visibilizar sus demandas y estaba realmente decidido a asumir ese rol.

“Siento que vale la pena ir, los movimientos realmente necesitan presencia y apoyo; y visto de esa forma, tal vez tenga la posibilidad de ser una ayuda real para ellos y no solo tener una experiencia de vida o de viaje.

“Aunque creo que mi misión está aquí, en Finlandia, en mi propia cultura, para trabajar por un cambio. Pero nuestra solidaridad no puede ser así; debemos concentrarnos en los cambios que están tomando lugar en todas partes. Después de todo, la causa más grande de la destrucción de la Tierra es nuestra propia cultura y la economía global que sirve a nuestras necesidades y hábitos de consumo; estructuras de poder y relaciones donde somos nosotros quienes tomamos todos los beneficios. Por ello hay que luchar y reconstruir aquí, eso es lo que yo realmente considero importante.

“Ninguna forma de autonomía zapatista puede ser trasplantada aquí, ninguno de nosotros puede empezar a vivir aquí como los mexicanos, tenemos nuestra propia cultura de la cual debe nacer el cambio, duplicar totalmente los modelos es imposible, pero son una forma de inspiración y a la vez, la esperanza de un mundo alternativo que podamos traer de otra parte, que pueda ser valioso y honorable”.

III. Segunda caravana

El tema triqui en el Congreso

La tarde del martes 27 de abril de 2010, se hizo un silencio abismal en una sala de redacción, cuando Jorge Alberto Pérez Zamudio, coordinador del área de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, entró con una petición inusual:

- Ceci, necesito que cheques con tus contactos en Oaxaca -dijo Pérez Zamudio- ¿me urge saber si es verdad que mataron a una tal Bety Cariño! No tengo más datos.

La reportera no reaccionó. Los ojos curiosos de cuatro periodistas más y de la fotógrafa se concentraron en el rostro impávido de la joven que no acababa de procesar la solicitud, y a la que aún le costaba creer la posibilidad de que *la tal* Bety Cariño estuviera muerta.

- Nos ponemos en eso -exclamó Juan Marcial Copado, quien inmediatamente entendió la dimensión de la solicitud; se levantó de su escritorio y dejó inconclusa la revisión de un boletín de prensa.

No en vano había trabajado más de 12 años en esa sala de redacción como jefe de información y había sido testigo de innumerables momentos históricos ocurridos en San Lázaro: la alternancia en la presidencia del país con la toma de protesta de Vicente Fox en el 2000; el bloqueo a la Cámara de Diputados como parte de la manifestación contra del desafuero del, hasta ahora, dos veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en 2004, y la aprobación del mismo en 2005, entre muchos otros acontecimientos.

Juan Marcial olía las noticias y sabía que la solicitud de Zamudio podría confirmar una grande.

- ¿La conoces? -cuestionó Pérez Zamudio, dirigiéndose a la reportera, sin dejar de teclear en su BlackBerry y alzando la mirada.

- Sí, la conozco; también a su familia, su esposo, sus niños. Ya les marco - balbuceó la reportera, que ya con los ojos llorosos intentaba buscar los números indicados para comunicarse.

Zamudio dio media vuelta y salió del lugar. Pocas veces había silencio en la sala de redacción, a no ser por la ausencia de todos, o la mayoría de sus integrantes.

Los teléfonos timbrando y al otro extremo de la línea algún reportero solicitando información de tal o cual diputado, la gestión de una entrevista o reclamando porque los audios de la última conferencia de prensa no le habían llegado a su mail, eran entre otras cosas, los asuntos que debían resolverse de inmediato, pero de eso se encargarían los demás; el jefe de información y la reportera estaban centrados en la petición.

Después de algunas llamadas con los contactos de Oaxaca, no había suficiente luz sobre el tema.

No fue sino horas más tarde que se pudo confirmar, de manera extraoficial, el asesinato de dos activistas. Algunos rumores apuntaban a que una de las fallecidas era, efectivamente, Alberta Cariño Trujillo; también había versiones de un extranjero asesinado, lo que sin lugar a dudas repercutiría en el tratamiento que las autoridades hicieran del caso. Después, el extranjero sería identificado como Jyri Antero Jaakkola.

La poca información disponible hasta ese momento, indicaba que ambos activistas formaban parte de una caravana humanitaria que trataba de llevar alimentos y medicinas a la comunidad de San Juan Copala, ubicada en la región Mixteca de Oaxaca, cuando fueron emboscados y asesinados a balazos por desconocidos. No había más información disponible.

Esa misma tarde, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, fijó su postura sobre el ataque, a través de un comunicado de prensa en el que condenó la agresión sufrida por integrantes de diversas organizaciones sociales y medios de comunicación.

En el documento, numerado como *Comunicado No. 022*, exigía el esclarecimiento inmediato de “estos arteros asesinatos” y agregaba que los mismos, “vienen a enrarecer el ambiente político en la entidad, a unos días de que arranquen formalmente las campañas políticas para renovar la gubernatura”.

En el comunicado, enviado a través del área de Comunicación Social del GPPRD a más de 60 reporteros y corresponsales de medios impresos y audiovisuales, tanto nacionales como extranjeros, que conforman la fuente que cubre los trabajos del Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados perredistas llamaban al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz a esclarecer los hechos; evitar la polarización en los próximos comicios y a garantizar su realización en un ambiente de paz y civilidad.

Además se afirmaba: “el GPPRD tuvo conocimiento de la realización de esta caravana de observadores internacionales que justamente buscaba prevenir cualquier acto que atentara contra los derechos humanos de los habitantes de San Juan Copala, por lo que exigimos al Gobierno del Estado esclarecer de inmediato el asesinato de las personas que participaban en la caravana de apoyo a la comunidad triqui, quienes acudieron al lugar en calidad de observadores”.

En dicha elección, que se celebraría el 4 de julio de 2010, estaba en juego la gubernatura del estado, 153 ayuntamientos regidos por el sistema de partidos políticos, y la renovación del Congreso de Oaxaca, con la elección de representantes por mayoría relativa y proporcional, para un total de 42 escaños.

Dos días después, en la sesión ordinaria del jueves 29 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ponía a consideración del Pleno, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a través del que se proponía la constitución de un grupo plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca de Juárez, y sobre el incremento de la violencia en Guerrero.

A petición de varios diputados federales del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez propuso a la Jucopo, en su calidad de coordinador de su grupo parlamentario, la

creación de un grupo de trabajo que diera seguimiento a los conflictos en la zona triqui.

En la Junta de Coordinación Política, “expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden”⁸, los coordinadores parlamentarios consideraron que además de dar seguimiento a los conflictos en Oaxaca, el incremento de la violencia en Guerrero merecía una observancia especial, sobre todo, tras el asesinato de Reynaldo Hernández García, dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero, y del presidente municipal de Zapotitlán Tablas, el priísta José Santiago Agustino .

Por mayoría, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la constitución del grupo plural de trabajo.

En el acuerdo se establecía que el grupo sería integrado por 10 diputados: dos legisladores del PRI, dos del PAN, dos del PRD y uno más de cada grupo parlamentario con representación en San Lázaro. También establecía que los miembros del grupo de trabajo deberían ser representantes u originarios de Oaxaca y Guerrero.

A pesar de que el PRD propuso la constitución del grupo de trabajo, la presidencia del mismo recayó en un diputado del PRI. En el acuerdo se enunciaba que cada grupo parlamentario comunicaría a la Jucopo quiénes de sus legisladores se integrarían, a fin de que la Mesa Directiva formalizara la instalación del mismo.

Las labores del grupo de trabajo tendrían vigencia hasta el 31 de agosto de 2012; de manera periódica, debería presentar un informe de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados o ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Para el cumplimiento de su objetivo, se facultaba al grupo para allegarse de la información que considerara pertinente, así como para reunirse con autoridades

⁸ Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 33.

federales, estatales y municipales y organizaciones civiles; podrían desempeñar cualquier otra acción necesaria para la atención de su materia de trabajo, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Además, se establecía que los integrantes del grupo podrían solicitar y recibir los archivos de legislaturas anteriores que se relacionaran con la materia de trabajo por atender.

El séptimo acuerdo rezaba: “dada la importancia y urgencia de su trabajo, el grupo de trabajo podrá iniciar sus labores y convocar a su instalación tan pronto como sea constituido por el pleno de esta Cámara”.

Sin embargo, la dilación es una práctica recurrente en el Poder Legislativo cuando no se tiene la voluntad política de resolver un problema. En los pasillos de la Cámara de Diputados y de Senadores es muy popular una frase: “si no quieres que avance un tema, crea una comisión especial o un grupo de trabajo”.

Durante casi cinco meses, y a pesar de la “importancia y urgencia de su trabajo”, el grupo plural no había sido constituido. Las balaceras y asesinatos en San Juan Copala y sus alrededores, habían cobrado ya más vidas.

El 21 de septiembre en el *Ágora, Boletín informativo del PRD*, N. 2800, se publicó una proposición con punto de acuerdo “de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la instalación del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscritos en la región triqui de Oaxaca de Juárez y sobre el incremento de violencia en el estado de Guerrero, con el fin de llevar a cabo acciones efectivas para garantizar la vida y la integridad física de las y los pobladores del municipio autónomo de San Juan Copala”.

El tema también estaba inscrito en la Gaceta Parlamentaria N. 3100, lo que indicaba que sería abordado en la sesión ordinaria de ese día.

En el documento, los legisladores perredistas señalaban que el acuerdo aprobado el 29 de abril por el Pleno, a través del que se creaba el grupo de trabajo “no ha tenido efecto, puesto que los grupos parlamentarios no han informado a la Junta de Coordinación Política el nombre de los diputados que integrarán el grupo plural.

Mientras, continúa la violencia y se incrementa el número de muertes de los pobladores del municipio autónomo de San Juan Copala.

“Dadas las condiciones extremas de violencia que viven los habitantes del municipio de San Juan Copala, resulta imprescindible la acción de los diferentes órdenes de gobierno para garantizar los derechos humanos y la dignidad de todos y cada uno de los ciudadanos que habitan el territorio nacional, y el Poder Legislativo no puede sustraerse de su responsabilidad”, señalaba el punto de acuerdo.

Por tanto, Encinas Rodríguez, Quezada Contreras y Rosario Morales proponían que la Cámara de Diputados exhortara a las y los diputados integrantes del grupo de trabajo para dar seguimiento a los conflictos en la región triqui de Oaxaca de Juárez y sobre el incremento de violencia en el estado de Guerrero, para que llevaran a cabo acciones efectivas en contra de la violencia ejercida contra las y los habitantes del municipio de San Juan Copala y se garantizara su seguridad e integridad física.

Proponía también, exhortar a Ulises Ruiz Ortiz, para que “en cumplimiento con sus obligaciones constitucionales, garantice el libre tránsito, la seguridad e integridad física de las y los habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala, el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, así como al esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos, lesiones y homicidios realizados en contra de defensores de derechos humanos y habitantes de dicho municipio autónomo”.

Por último, buscaban que desde el Congreso, se exhortara a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca para que “en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen la violación de derechos humanos fundamentales en los que han participado agentes estatales y grupos paramilitares que incurrieron en graves violaciones a estos derechos y se rinda un informe a esta Soberanía respecto al resultado de su investigación”.

El punto de acuerdo presentado por los perredistas, no fue abordado ese martes.

En la siguiente sesión ordinaria, celebrada el jueves 23 de septiembre de 2010, la Jucopo sometió a consideración del Pleno el acuerdo por el que se nombraba a los legisladores que integrarían el grupo de trabajo: Heliodoro Díaz Escárraga y Sofía Castro Ríos del PRI; Javier Corral Jurado, del PAN; Juanita Arcelia Cruz Cruz y Florentina Rosario Morales, por el PRD; Alejandro Carabias Icaza, del PVEM; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, por el PT; María Guadalupe García Almaza, de Convergencia, y a propuesta del diputado Jaime Cárdenas Gracia, se aprobó la incorporación de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, también del PT, al grupo de trabajo.

La presidencia del grupo fue asumida por el diputado por el distrito electoral federal 06, con cabecera en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, el priísta Heliodoro Díaz Escárraga. Dicha cabecera distrital, es también la más cercana a la zona triqui.

Cinco meses después de haber sido aprobada la creación del grupo de trabajo, por fin el martes 28 de septiembre, se instaló formalmente.

Ante cinco legisladores, Díaz Escárraga manifestó “que como presidente del grupo de trabajo pondrá todo de su parte para encontrar acuerdos y consensos para el logro de los objetivos de este órgano colegiado y que tal y como lo expresó ante el pleno de esta Cámara, propondrá acciones que permitan no sólo el análisis punitivo por la violencia que padecen los pueblos triquis y el estado de Guerrero, sino revisar sus causas, buscando procurarles apoyo en el Presupuesto de Egresos de la Federación”⁹.

En esa primera reunión, ni siquiera se habló de la problemática en la zona triqui ni del incremento de violencia en Guerrero. La instalación del grupo apenas tardó 65 minutos.

⁹ Gaceta Parlamentaria N. 3228, acta “Del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la violencia en el estado de Guerrero, correspondiente a la reunión efectuada el martes 28 de septiembre de 2010”, viernes 25 de marzo de 2011.

El 25 de octubre, el grupo de trabajo se reunió con María de la Luz Candelaria Chiñas, quien se desempeñaba como procuradora general de justicia de Oaxaca.

Tras esa reunión, Heliodoro Díaz Escárraga declaró que el recrudecimiento de los niveles de violencia entre el MULT, MULTI y Ubisort, se relacionaba con la disputa por el control político y el manejo de recursos económicos.

“Sin lugar a dudas, en la medida en que se incrementan los recursos, esto se vuelve una disputa; quisiéramos conocer los recursos que se le suministran a San Juan Copala y los que se dan a estas organizaciones. Estoy convencido de que algo que pudiera ser una vertiente, es la disputa por el control de los recursos”, afirmó el priísta.

Por su parte, Candelaria Chiñas resaltó que San Juan Copala “es una zona conflictiva por su aspecto étnico, por su condición geográfica y carácter beligerante, además de que persiste el uso del trueque como parte de su economía y la constante portación de armas de los habitantes de la zona triqui”.

Añadió que el conflicto en la zona se da por el antagonismo entre las organizaciones, así como entre sus líderes: “es un encono que no ha permitido que exista la paz en el lugar; atendiendo eso le hemos solicitado a la Secretaría General del estado que convoque a la conciliación, pues en la medida en que se solucione el conflicto socialmente disminuirá el índice delictivo”.

Chiñas declaró que el gobierno de Oaxaca “no es omiso, negligente e indiferente ante las necesidades que se han agudizado a partir de los últimos tres años, donde se recrudeció la violencia, así como el resultado de homicidios y lesiones”.

En una reunión del 7 de diciembre, el grupo de trabajo acordó solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob) -en ese tiempo bajo la tutela del fallecido Francisco Blake Mora- informara sobre la respuesta del gobierno federal y en su caso, sobre los avances, respecto a la provisión de medidas cautelares otorgadas el 7 de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de 135 habitantes de San Juan Copala.

Los legisladores también acordaron invitar a San Lázaro a representantes de la Segob y al procurador general de Oaxaca -Manuel de Jesús López López fue electo por el Congreso de Oaxaca el mismo 7 de diciembre, luego de que Candelaria Chiñas renunciara a su cargo el 3 de diciembre; es decir, 48 horas después de que Gabino Cué Monteagudo rindió protesta como Gobernador Constitucional del estado- para que informaran sobre la situación en la zona triqui y sobre las acciones que habían emprendido para resolver la problemática económica, social y política de la región.

También acordaron “extender una invitación a la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) a fin de que exprese sus puntos de vista sobre la problemática en la región”¹⁰.

Aunque existen tres organizaciones involucradas en los conflictos de la zona, los legisladores decidieron únicamente invitar a la que ha sido señalada como un grupo paramilitar al servicio del gobierno del estado: la Ubisort.

Acordaron además, convocar a la presidenta municipal interina de Santiago Juchitán, Noelia Josefina Vera Guzmán, y al diputado local electo, Carlos Martínez Villavicencio –quien solicitó licencia como presidente municipal de dicha comunidad para contender con las siglas del PRD y por la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”- para realizar una reunión de trabajo, además de impulsar una reunión con Cué Monteagudo.

La reunión con Cué se pudo concretar tres meses después, hasta el 11 de marzo de 2011.

Pasado el mediodía de aquel viernes caluroso y seco en Oaxaca, Gabino Cué recibió en el Palacio de Gobierno a la comitiva frente a quien externó “su más decidida convicción de buscar todos los mecanismos que estén a su alcance para propiciar el diálogo permanente y sentar las bases de solución al conflicto en la comunidad triqui”.

¹⁰ Ídem.

Cué informó, ante Manuel García Corpus, del PRI, quien no era parte formal del grupo, pero había dado seguimiento a su trabajo; las perredistas Juanita Cruz y Florentina Morales, y el petista Gerardo Fernández Noroña, que su gobierno atendía las recomendaciones de medidas cautelares dictadas por la CIDH para brindar atención a los desplazados de San Juan Copala con quienes ya había sostenido reuniones en más de seis ocasiones.

El Ejecutivo estatal aseguró que en las mesas de negociación ya se había planteado la necesidad de la “aplicación de la justicia y revisión de las demandas sociales”; añadió que “existe toda la voluntad del gobierno del estado para enfrentar los rezagos mediante programas y recursos federales y estatales, en la búsqueda de un mejor desarrollo económico y social para esta zona”.

En su oportunidad, Cruz Cruz señaló: “nos duele que en nuestro propio estado sucedan estas cosas, y confiamos que con estas negociaciones podamos avanzar en la solución de la problemática que enfrenta San Juan Copala”. Lamentó que administraciones anteriores “no hayan actuado para reconstruir el tejido social en esa zona, cuyo resultado ha sido el agravamiento de la violencia con su cauda de muertos, desplazados, viudas y huérfanos.

Manuel García Corpus indicó que uno de los propósitos del grupo de trabajo era apoyar al gobierno del estado en términos de recursos y que para el próximo presupuesto (PEF 2012), se generaría un fondo especial para la zona triqui. Habló también de la importancia de propiciar “el regreso de la institucionalidad”, a través de programas de salud, obra pública, vivienda y educación.

“Estamos construyendo acuerdos y veo que hay consensos en las organizaciones para que el gobierno del estado avance en este proceso de conciliación”, aseveró.

En su intervención, Gerardo Fernández Noroña expresó su deseo de visitar San Juan Copala.

Todo parecía avanzar; sin embargo, el 23 de diciembre de 2011, la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz denunció ante medios de comunicación de Oaxaca, la “falta de responsabilidad” de Heliodoro Díaz Escárrega como presidente del grupo

de trabajo, y afirmó que la última vez que el oaxaqueño convocó a una reunión, fue en abril de 2011, cuando sostuvieron la reunión con Gabino Cué; misma a la que no asistió Escárrega.

Añadió que, a pesar de que en varias ocasiones solicitó al priísta convocar a reunión del grupo, obligación que recaía en él como titular del mismo, hizo caso omiso.

“Nunca se volvió a convocar por parte del diputado federal del PRI, Heliodoro Díaz Escárrega; él es el presidente. A pesar de haber hablado con él, sólo esperamos que el próximo año se retome el trabajo para la zona triqui, en beneficio de dichas comunidades”, expresó.

Caravana humanitaria Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Hay algunas derrotas que tienen que ser capitalizadas como victorias, y este es uno de esos casos.

El hecho de que la *Caravana humanitaria Bety Cariño y Jyri Jaakkola* no haya podido entrar a la comunidad de San Juan Copala, ratificó y visibilizó sin lugar a dudas, el estado de excepción que se vive en la zona triqui de Oaxaca, a la que ninguna autoridad, estatal o federal, está dispuesta a entrar por temor a no salir.

Las peripecias de la caravana no iniciaron cuando decenas de autobuses y autos particulares salieron del Zócalo capitalino de la ciudad de México rumbo a San Juan Copala; iniciaron cuando los representantes del municipio autónomo convocaron a organizaciones sociales, colectivos, pueblos indígenas, medios de comunicación nacionales y extranjeros, organismos de derechos humanos y a la opinión pública en general, a participar en una nueva caravana.

Las peripecias de la caravana se multiplicaron cuando un grupo de diputados federales y un par de asambleístas del Distrito Federal, en su gran mayoría del Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidieron, para bien o para mal, adoptar el tema como propio y sumarse a la solicitud de romper el cerco.

Luego de mucho diálogo, indecisión e incertidumbre, se decidió que los participantes de la caravana se reunirían el 7 de junio, e iniciaría la travesía hacia Copala alrededor de las 19:00 horas. El punto de encuentro sería la Plaza de la Constitución, ubicada en el centro de la ciudad, frente a la Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno, y a un costado de las ruinas del Templo Mayor.

Desde semanas atrás se había generado mucha expectativa por la caravana y, sobre todo, por la decisión de un grupo de legisladores de sumarse a ella.

Cerca de las 18:40 de ese lunes, una decena de diputados locales y federales flanqueaban a Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del GPPRD, quien ante decenas de reporteros, fotógrafos y camarógrafos, declaraba en el Zócalo de la ciudad de México, que el único objetivo de la caravana humanitaria era romper el cerco y llevar varias toneladas de alimentos a la comunidad.

En esa improvisada entrevista, a no más de cinco metros de vendedores ambulantes de refrescos, aguas embotelladas, galletas, chicharrones y dulces, que en menos de 10 minutos incrementaron el precio de sus productos ante la inusitada demanda de los caravaneros por hacerse de sus propias provisiones, se cuestionó al legislador sobre los posibles tintes políticos de la caravana y la cercanía de la elección que daría un nuevo gobernador a Oaxaca.

Encinas negó rotundamente que existiera la más mínima intención de que la presencia de los diputados, y meno de la caravana humanitaria, pudiera incidir en los resultados; “no hay tintes políticos ni electorales, sólo humanitarios”, recalcó ante los comunicadores que no terminaban de aceptar el argumento.

En la plancha del Zócalo podían observarse camiones de carga con capacidad de transportar varias toneladas de víveres; más de 20 camiones de transporte foráneo se sucedían unos a otros formando laberintos que dificultaban ver el Zócalo de un extremo a otro.

Camionetas de redilas continuaban llegando cargadas de cobijas y bolsas de ropa que rápidamente eran descargadas para volverlas a acomodar en el contenedor

de un tráiler, que una vez lleno, fue sellado con una enorme placa de metal que no dejaba pasar ni un resquicio de luz al interior.

Los reporteros que acompañarían a la caravana arribaban poco a poco. La mayoría solamente cargaba una pequeña mochila de la que se deshacía inmediatamente al ubicar el camión en el que viajaría; la bolsa del pantalón era el resguardo de la grabadora, mientras la libreta y el celular permanecían en las manos de los ansiosos que preguntaban insistentemente a qué hora empezaría el trayecto.

Otros más, recargados en algún autobús, fumaban tranquilamente un cigarro mientras hablaban de los temas de coyuntura o trataban de adivinar el destino de la caravana. La mayoría no sabía de la existencia de San Juan Copala ni de la etnia triqui antes del asesinato de los activistas de derechos humanos, ocurrido hacía poco más de un mes.

Tres horas se prolongó la salida del Zócalo. Mientras los dirigentes de la caravana terminaban de organizar los autobuses, los que esperaban iniciar el viaje estiraban las piernas, compraban algo de beber o pensaban sobre lo largo que sería el trayecto.

Una vez que la caravana arrancó, la atmósfera se inundó de una tensa calma que se extendería hasta Huajuapán de León, Oaxaca.

A esa hora, las calles de la ciudad sólo eran transitadas por indigentes que buscaban un lugar más cálido para dormir; los taqueros de las esquinas guardaban sus cuchillos y vaciaban en botes los restos de salsa roja; taxistas recogían algún desesperado por transporte y decenas de automovilistas no veían la hora de llegar a sus casas. Eso se podía percibir desde el frío vidrio polarizado de uno de los asientos traseros del autobús de pasajeros donde viajaban nueve diputados federales, -algunos de ellos acompañados de sus asesores o secretarios particulares- un asambleísta del Distrito Federal, reporteros, fotógrafos y camarógrafos.

Luego de avanzar por la avenida Ignacio Zaragoza y llegar a la caseta de Chalco, la caravana siguió por la carretera hacia Cuautla, Morelos. Lentamente avanzaban los autobuses y demás vehículos particulares. Por la ventanilla se alcanzaba a ver cómo uno a uno desaparecían por instantes al girar en una curva y volvían a aparecer en las rectas. No hacía frío, pero los cristales se empañaban con las respiraciones silenciosas de los viajeros.

En el autobús en el que viajaba el contingente de la Cámara de Diputados reinaba el silencio. Apenas podían distinguirse dos voces fantasmagóricas provenientes de la parte trasera del camión.

Ahí, una reportera escuchaba atenta la anécdota de su jefe de prensa, que recordaba los días en que era fotógrafo de estudio en su tiempo libre. Por algunos meses fue un negocio lucrativo; madres emocionadas llevaban a sus bebés para inmortalizar su imagen. Enormes ojos y sonrisas amplias eran capturados por la lente del entonces principiante reportero; si el niño en turno no estaba de humor para mostrar sus mejores gracias al fotógrafo, no tardaba en probar un trozo de limón, que para deleite de la cámara, exponía un amplio repertorio de gestos.

Una serie de seis fotografías enmarcadas era el producto final que recibían las felices progenitoras. El negocio decayó cuando la familia del principiante reportero encontró la fórmula ideal para preservar los momentos más significativos de bautizos, bodas, primeras comuniones y 15 años sin gastar un centavo: lo escogían como padrino de foto.

Después de varias horas de viaje, la caravana se detuvo en las inmediaciones de Izúcar de Matamoros, Puebla. De los vehículos descendía gente a estirar las piernas o fumar un cigarro. Los más atrevidos se aventuraban a caminar por los pastos y matorrales secos de la orilla de la carretera para buscar el lugar idóneo para orinar. Unos pocos permanecieron dormidos al interior de los vehículos sin percatarse de la parada y avance del convoy.

Dos o tres kilómetros delante de la caravana, viajaba un grupo de cinco personas que tenía como objetivo generar una visión del entorno en que avanzaban los vehículos. Era el equipo de logística de los diputados.

Carlos Francisco Fragoso Velasco, asesor del actual senador de la República, Alejandro Encinas, pertenecía a esa avanzada. “Desde el momento en que cruzamos la frontera de Oaxaca, tuvimos seguimiento de personal del gobierno. Nos iban monitoreando paso a paso. El gobernador tenía información precisa, kilómetro a kilómetro, de dónde iba la caravana”, recuerda el asesor.

Una camioneta tipo estaquitas con emblemas de servicios médicos, dio marcaje personal a la caravana.

En las inmediaciones de Huajuapán de León, el gobierno del estado dio la bienvenida a la caravana con un retén. Varias camionetas de la policía estatal se encontraban a ambos lados de la carretera y marcaron el alto a los camiones que se disponían a entrar a la población a través del bulevar. Los diputados federales, reporteros y demás acompañantes descendieron del vehículo.

La policía estatal “sugirió” a la caravana humanitaria hacer su arribo a la Plaza de la Libre Expresión, ubicada en el centro de la comunidad, justo frente al palacio municipal, que recientemente había sido adornado con suntuosos murales de fondo dorado donde el pintor José Luis García plasmó algunas tradiciones de la ciudad.

Ya en la plaza, un grupo de reporteros locales se acercó al coordinador parlamentario para registrar sus primeras impresiones: “traemos un mensaje de paz y ayuda humanitaria a la comunidad de San Juan Copala”, declaró Encinas ante los medios.

En la plaza, que de un instante a otro se atiborró de autobuses, camiones de carga, vehículos particulares y camionetas, Encinas habló de la intención de los legisladores de ayudar a crear un clima de entendimiento en la comunidad, pues afirmó “la solución no vendrá de fuera, vendrá del propio acuerdo que pueda construir la comunidad triqui para superar sus problemas”.

Una reportera preguntó la opinión del diputado acerca del bloqueo que la Ubisort decía haber iniciado un día antes, kilómetros adelante de La Sabana, muy cerca de donde se registró el ataque a la caravana del 27 de abril, con el objetivo de no permitir el ingreso de la *Caravana Humanitaria Bety Cariño y Jyri Jaakkola*.

“Esperemos que no haya ningún bloqueo y que la autoridad local y el gobierno federal den las garantías de seguridad y protección a todos los integrantes de la caravana y que permita hacer llegar esta ayuda humanitaria. No venimos a ningún acto de provocación ni a alentar mayor violencia...por supuesto que nosotros no vamos a responder a ningún acto que pudiera generar violencia en la zona”, dijo el entonces coordinador del GPPRD en San Lázaro.

Se dijo en la mejor disposición de ayudar a establecer un diálogo entre las organizaciones, y recordó que en la Cámara de Diputados se aprobó la conformación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a los conflictos de la región.

“El día de ayer el secretario general de gobierno de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, acusó que le solicitó información a usted, completa, de cuántas personas venían, vehículos, y que no la proporcionó”, cuestionó otro reportero.

“Se le entregó puntualmente todo lo correspondiente a la presencia de legisladores federales y locales, del equipo de apoyo y personal de acompañamiento; número de vehículos que participarían. Ha estado informado puntualmente, y no solamente de manera directa, sino de los propios monitores que tenían desde la ciudad de México, donde tomaron las placas, el número de vehículos y contaron a las personas que veían en el convoy. Creo que él tiene la información suficiente y clara, oportunamente entregada, para brindar garantías a la caravana”, atajó el perredista.

En Huajuapán se sumaron al convoy diversos contingentes; organizaciones sociales de Chiapas y Guerrero, así como representantes de la Sección 22 del magisterio oaxaqueño, nutrieron la caravana que siguió rumbo a Juchitán, después de aproximadamente dos horas de su arribo.

El desplazamiento por las carreteras de la Mixteca fue lento. Apenas minutos después de dejar Huajuapán con sus pequeñas y estrechas calles, Oaxaca ofrecía un paisaje completamente distinto: la presa de San Francisco Yosocuta aparecía como una ilusión brillante y plateada en medio de los cerros colmados de cactus y matorrales secos.

La visión de la cúpula de la iglesia principal de San Marcos Arteaga era distorsionada por el tufo de calor que se alzaba del atrio asfaltado que la rodea; kilómetros adelante y resguardado por cerradas curvas, aparecía el cañón de “El Boquerón” de Santo Domingo Tonalá.

A vuelta de rueda se libró “El espinazo del diablo”, nombre dado a un tramo de la carretera Huajuapán-Juxtlahuaca, que en su parte más alta se abre paso a escasos centímetros de un desfiladero y en la que se erige una cruz de varios metros de altura, en recuerdo de decenas de víctimas de diversos accidentes automovilísticos.

El grupo de logística avanzó kilómetros adelante de la caravana. “De repente, al salir de una curva, nos damos cuenta que quien bloquea el camino es la autoridad”, recuerda Francisco Fragozo desde una de las oficinas de Encinas Rodríguez.

Condenas, denuncias, desplegados... burocracia

El 6 de mayo de 2010, en un comunicado difundido a través del portal en línea del *Consortio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Oaxaca*¹¹, un grupo de mujeres y organizaciones feministas de América Latina y Europa, condenaron la “ejecución extrajudicial de la defensora de derechos humanos Bety Cariño”.

¹¹ [Agenda feminista, Boletín feminista la trenza, Defensoras de DDHH](http://consorciooaxaca.org.mx/organizaciones-de-mujeres-condenan-asesinato-defensora-en-oaxaca/#more-868), “Organizaciones de Mujeres condenan Asesinato Defensora en Oaxaca. Denuncia de organizaciones feministas y de mujeres por la ejecución extrajudicial de la defensora de los derechos humanos Beatriz Cariño”, Asociación Civil Feminista Consortio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, <http://consorciooaxaca.org.mx/organizaciones-de-mujeres-condenan-asesinato-defensora-en-oaxaca/#more-868>, 13 de mayo de 2014.

En el comunicado, firmado por organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, se hizo un llamado a las autoridades mexicanas, en particular al Grupo plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui, de la Cámara de Diputados, a hacer lo necesario para que la muerte de Bety Cariño no quedara impune; así como para detener la violencia contra las mujeres de la comunidad y abstenerse de medidas que pudieran deteriorar todavía más sus derechos, como la militarización de la zona.

El llamado también era para el pueblo triqui, al que pedían condenar “toda la violencia en sus comunidades, particularmente la que está afectando la vida e integridad de las mujeres, y emprenda el camino del diálogo y la construcción de acuerdos para superar el conflicto, reconociendo la voz y las demandas de las mujeres”.

Por último, pedían a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA), y al Comité Internacional de la Cruz Roja, que en el ámbito de sus competencias, “coadyuven con el Estado mexicano y las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, en la implementación de medidas que ayuden a la distensión en la zona, la erradicación de la violencia y el establecimiento del diálogo entre las partes en conflicto”.

A pesar de los llamados, ninguna autoridad local o federal, dio respuesta alguna, y las agresiones en la zona triqui no cesaban.

El 17 de mayo, Marcos Albino, impulsor del municipio autónomo de San Juan Copala, denunció ante medios de comunicación, el secuestro sufrido por un grupo de mujeres y niños, a manos del grupo paramilitar.

En una conferencia de prensa organizada en la Cámara de Diputados, convocada por las legisladoras perredistas Leticia Quezada Contreras y Teresa Incháustegui Romero, Albino narró cómo el viernes 14 de mayo, un grupo de aproximadamente

35 mujeres y niños, salió del municipio autónomo para dirigirse a Santiago Juxtlahuaca a comprar víveres y medicamentos.

En el espacio comúnmente conocido por los reporteros de Cámara como *Chacalódromo*, ubicado en un costado del amplio vestíbulo del edificio que en su parte exterior sostiene un enorme escudo de México, Albino denunció que cerca de las 9:30 de la mañana del viernes, el grupo arribó a la cabecera municipal donde fue interceptado por varias personas fuertemente armadas que se llevaron a dos mujeres.

El resto del grupo solicitó auxilio a la policía estatal e hizo el reporte correspondiente; sin embargo, la dependencia no movilizó ninguna unidad para dar con el paradero de las mujeres secuestradas, que fueron liberadas en las inmediaciones del municipio horas más tarde. Cuando fueron localizadas, se negaron a declarar y a hacer la denuncia formal, pues habían sido amenazadas de muerte.

Esa misma tarde, el grupo de mujeres y niños solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su protección y compañía para llegar a Copala. La dependencia designó a ocho observadores para realizar la diligencia, y pidió además, el apoyo de la policía municipal. Aunque el grupo pidió ser conducido a San Juan Copala, fue llevado al municipio de Yosoyuxi.

Cerca del anochecer, y al amparo de la oscuridad y silencio que prevalecía en la zona, el grupo decidió dirigirse a pie al municipio autónomo. Para intentar llegar a él, tuvieron que cruzar La Sabana, comunidad controlada por la Ubisort. En ese lugar, nuevamente fueron atacados por un grupo armado; la mayoría de las mujeres corrió entre los cerros, arbustos y lograron escapar hacia el monte. Una suerte muy distinta tuvieron seis de ellas e igual número de menores que fueron retenidos a punta de armas largas.

El domingo 16, después de mediodía, fueron puestos en libertad. Joaquina Velasco Aguilera, quien fungía como secretaria del municipio autónomo, fue parte del grupo secuestrado. Narró que los tuvieron encerrados en un cuartel militar

abandonado, ubicado en las inmediaciones de Copala. De rodillas y sin poder levantar la mirada, el único paisaje que las rodeaba, era el de los cañones de las armas largas con las que permanecieron todo el tiempo amenazadas. Antes de soltarlas les advirtieron, sin contemplación alguna, que de hacer la denuncia, las matarían junto a sus hijos.

En la misma rueda de prensa, Marcos Albino exigía la intervención expedita del Poder Legislativo: “creo que no ha habido ninguna acción del grupo de diputados que se formó aquí para investigar los hechos...que vayan a documentar por ellos mismos cómo es vivir en el municipio autónomo de San Juan Copala”, sentenció el indígena triqui de pequeños ojos oscuros y piel tostada, antes de soltar el micrófono.

El mismo lunes 17 por la tarde, el líder de la Ubisort deslindaba a su organización del secuestro de las mujeres y niños que según dijo “formaban parte de una segunda caravana que intentó entrar a la agencia de San Juan Copala y que iban acompañados de visitantes de derechos humanos y jefes policíacos”.

En una entrevista concedida a la radiodifusora de Huajuapán de León, Rufino Juárez Hernández “exhortó a los representantes del MULTI a no hacer un uso mediático equivocado para tratar de confundir a la opinión pública y beneficiarse, pues consideró que lo único que provocan es que haya más enfrentamientos violentos”¹².

Tres días después de denunciar el secuestro de las mujeres y niños triquis, los promotores del municipio autónomo anunciaban la realización de la *Caravana Humanitaria Bety Cariño y Jyri Jaakkola*, programada para el 8 de junio de 2010.

“Porque el mundo necesita conocer las condiciones y la complicidad de las autoridades del gobierno de Oaxaca con ese grupo paramilitar, es que hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, a todos los países del mundo, para romper de una buena vez el cerco paramilitar en donde viven más de 70

¹² García, Edwin, “Se deslinda Ubisort de presuntos secuestros”, Sistema Radiofónico Informativo, 17 de mayo de 2010.

familias que se encuentran en condiciones inhumanas y en condiciones de violación permanente a sus derechos, al ejercicio de su propias formas de organización social, política y cultural, y al pleno ejercicio de su vida y convivencia comunitaria”, señalaba la convocatoria.

En el mismo documento, los promotores del municipio autónomo pedían a las organizaciones que quisieran sumarse a la caravana, coordinar acciones con el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCA), de Oaxaca. También solicitaban a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos *Todos los Derechos para todas y todos*, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y al Centro Nacional de Comunicación Social, cubrir informativamente las acciones de la caravana.

Extendían el llamado a la Cruz Roja Internacional, a Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, a sumarse en la medida de sus posibilidades, a la caravana.

Pedían a los medios de comunicación, nacionales e internacionales, “comprometidos con la verdad”, acompañar a la caravana para que documentaran las condiciones de vida de los habitantes de San Juan Copala y “le cuenten al mundo cómo viven los sometidos y explotados en México y Oaxaca”.

En la comunicación se subrayaba que la integridad y seguridad de quienes acompañaran a la caravana, era responsabilidad del Estado mexicano, pues “los derechos tutelados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales no pueden ser limitados por grupos paramilitares o gobiernos corruptos”.

El objetivo de la caravana, además de intentar nuevamente hacer llegar varias toneladas de víveres y medicinas a San Juan Copala, era romper el cerco paramilitar y “salvarle la vida a más de 70 familias que están sobreviviendo en condiciones inhumanas”.

Jorge Albino, un joven indígena triqui también impulsor de la creación del municipio autónomo recuerda que se decidió convocar a la segunda caravana,

porque sus compañeros que permanecían al interior de la comunidad llevaban varios meses sin alimentos ni medicinas: “teníamos varios heridos de bala adentro, desaparecidos, los compañeros no se reportaban y quienes estábamos afuera no sabíamos qué estaba pasando”.

Mientras se esparcía la convocatoria y se tejían acuerdos sobre la organización de la caravana, a más de 280 kilómetros de la ciudad de México, en Yosoyuxi, Oaxaca, cuatro hombres que se hicieron pasar por vendedores de maíz, asesinaban a Timoteo Alejandro Ramírez, líder del MULTI y promotor de la autonomía de San Juan Copala, y a su esposa, Cleriberta Castro.

Para la convocatoria de la segunda caravana, los simpatizantes del municipio autónomo contaron con el apoyo de la Embajada de Finlandia en México, familiares de Bety y Jyri, CACTUS, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), entre otras organizaciones sociales y civiles.

Después de la convocatoria pública, Jorge Albino recuerda que hicieron una invitación formal a diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios, para que se sumaran al proyecto. Solamente obtuvieron respuesta –un día después de lanzada la convocatoria- del GPPRD en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el coordinador del PRD en San Lázaro, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que un grupo de diputados perredistas, con él al frente, acompañaría a la *Caravana Humanitaria Bety Cariño y Jyri Jaakkola*,

“Queremos convocar a otros diputados federales, a otras personalidades, a que nos acompañen en esta caravana, no solamente para romper el cerco en que vive el municipio autónomo de San Juan Copala, sino para generar las condiciones de tranquilidad y de normalidad democrática en esta zona”, declaró el legislador, que a principios de 2011 solicitó licencia como diputado para contender por la gubernatura del Estado de México.

En compañía de dos diputadas, Encinas Rodríguez declaró que en San Juan Copala se vivía un verdadero estado de excepción, en donde, bajo tolerancia y omisión del gobierno estatal, grupos paramilitares vulneran las garantías

individuales y la vida democrática de la región, además de mantener bajo terror a la población.

Lamentó el asesinato de Timoteo Alejandro y su esposa, y resaltó que tal acto “no solamente sigue enrareciendo cada vez más el clima político en el estado de Oaxaca, ya que estos homicidios se suman a otros que ha habido no solamente en la región, sino, incluso, contra militantes del PRD.

“Y en momentos donde se está viviendo una campaña electoral de gran confrontación y polarización política, en nada ayuda a generar condiciones de confianza dentro de este proceso: resulta absurdo que el propio gobernador reconozca que no puede haber abasto de alimentos y medicinas a la zona y garantice que vaya a haber urnas en esa zona.

“Es una burla, porque da cuenta de que tiene la capacidad política de incidir en las decisiones de los grupos paramilitares para los fines políticos del gobierno del estado, y no para salvaguardar la integridad y la seguridad de la comunidad triqui, y que ésta pueda vivir en plena normalidad”, subrayó.

El también exjefe de gobierno del Distrito Federal y actual senador de la República, exigió que el grupo plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos de la zona triqui, aprobado en la Cámara de Diputados, participara en la caravana.

“Lamentablemente, el diputado Heliodoro Díaz, que es el presidente del mismo, no ha convocado a ninguna reunión. Evidentemente, él tiene cercanía con el gobernador Ulises Ruiz. Esperemos que eso no sea el motivo para frenar el trabajo y esperemos que de inmediato, a más tardar el lunes de la próxima semana, sesionen para hacer el seguimiento de esos lamentables acontecimientos”, declaró Encinas.

Ese mismo día, en la página web del periódico local *Crónica de Oaxaca*, se difundían declaraciones de Heliodoro Díaz, en las que afirmaba que la realización de la segunda caravana podría ser un acto de provocación¹³.

El priísta, representante de Tlaxiaco, cabecera distrital en la que se enmarca la región triqui, aseveró que no se tenían claros los objetivos de la segunda caravana, y que se debía dejar que las autoridades estatales y federales intervinieran para lograr la pacificación entre los grupos de poder que se disputan la zona.

En la nota pedía, además, que no se engañara a la población en general, haciéndole creer que esa caravana tenía carácter humanitario, cuando en realidad, podría tratarse de un acto de provocación y consideraba extraño que en tiempos electorales la problemática en la región triqui cobrara mayor relevancia.

Jorge Albino recuerda que los días previos a la realización de la segunda caravana “Heliodoro estaba denunciando muy fuerte a los diputados que entraron. Tenían un solo discurso Heliodoro Díaz y Rufino Juárez Hernández: acusaban a Alejandro Encinas por haber encabezado esa caravana. Nosotros no lo invitamos a encabezarla, él se sumó y en el transcurso de la caravana se fueron dando las cosas. La prensa lo posicionó al frente.

“Con sus discursos y el respaldo que el PRI le daba públicamente a la Ubisort nos decían que ellos estaban detrás, irles a pedir apoyo no era una opción para nosotros”, comenta el indígena triqui, que hace mucho tiempo tuvo que autoexiliarse de su comunidad de origen.

Esa misma tarde, Alejandro Encinas Rodríguez, envió a través de un comunicado de prensa, una serie de cuestionamientos a Heliodoro Díaz Escárraga, respecto a sus declaraciones vertidas en los medios:

“Sus declaraciones, ¿son un reconocimiento a la incapacidad y a la ausencia del gobierno en esa región del estado, donde dominan los grupos paramilitares?

¹³ Redacción, “Caravana por la paz puede ser provocación: Díaz Escárraga”, *Crónica de Oaxaca*, <http://www.cronicaoxaca.info/informaciongeneral/5000-caravana-por-la-paz-puede-ser-provocacion-diaz-escarraga.html>, 21 de mayo de 2010.

Sus declaraciones, ¿son un reconocimiento a la real protección del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz a los grupos paramilitares?

Sus declaraciones, ¿son una amenaza para quienes participaremos en la próxima caravana?”¹⁴.

No hubo respuesta alguna de Heliodoro, ni del área de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) en la Cámara de Diputados a los planteamientos del perredista. El grupo de trabajo plural para dar seguimiento a los conflictos de la zona triqui, presidido por Díaz Escárrega, se instalaría cinco meses después de su aprobación.

En el *Boletín N. 416*, con fecha del 27 de mayo de 2010 que fue enviado a la fuente de la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas Rodríguez informó que se habían girado los oficios correspondientes a la Secretaría de Gobernación, con Fernando Gómez Mont al frente; de la Defensa Nacional, con Guillermo Galván Galván; al procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, y al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, para anunciarles la realización de la caravana que se efectuaría a principio de junio.

A través de dichos oficios, el legislador pedía a los titulares de esas dependencias realizar las acciones conducentes para garantizar la vida, libertad y seguridad personal de todos los participantes de dicha caravana.

En el mismo documento se informaba del envío de los oficios conducentes al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva; al secretario de Gobierno del estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; al representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), embajador Óscar Maúrtua de Romaña; al señor Alberto Brunori, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y, finalmente, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

¹⁴ Comunicación Social del GPPRI, “Comunicado de prensa N. 025”, 21 de mayo de 2010.

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los representantes de la OEA y a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos les solicitó un representante para que acompañara el recorrido y desarrollo de la caravana humanitaria y documentaran las violaciones a los derechos humanos de que son objeto los habitantes de San Juan Copala.

Una semana después, la PGR y la CNDH respondieron a los oficios enviados por el coordinador del GPPRD, a través de los que había solicitado garantías para los participantes de la *Caravana Humanitaria Bety Cariño y Jyri Jaakkola*.

Sin embargo, no había respuesta de la Secretaría de Gobernación, de la Defensa Nacional, del gobernador de Oaxaca, la Secretaría de Gobierno del estado de Oaxaca, el representante de la OEA, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ni de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

La organización de la caravana avanzaba a pasos agigantados, la convocatoria se extendía cada vez más, y diariamente había pronunciamientos de organizaciones sociales y civiles anunciando su participación en la misma. Los simpatizantes del municipio autónomo habían instalado una carpa en el Zócalo de la ciudad de México donde se realizaba el acopio de donaciones de alimentos y medicinas que serían transportados a San Juan Copala.

Pero había un actor que no estaba nada contento con el desarrollo del proceso organizativo, y el 2 de junio envió una advertencia: bloquearía la Ubisort el paso a la caravana encabezada por Encinas Rodríguez.

Rufino Juárez Hernández declaró para el noticiario de La Primera, radiodifusora de Huajuapán de León, que “si a pesar de los bloqueos entran, no se hacen responsables de lo que pase porque estarían dentro de la zona donde el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULTI), no tiene influencia, lugares,

como La Sabana donde hay militantes de la Ubisort que constantemente son víctimas de balaceras de ese grupo y lo mismo podría ocurrirles”¹⁵.

Además de la amenaza, responsabilizaba a los organizadores de la caravana de la seguridad de los legisladores y del resto de sus participantes; incluso declaró que la Ubisort buscaría una mesa de diálogo con la Secretaría General de Gobierno del estado, para impedir que la caravana se llevara a cabo.

“Es una situación preocupante y la dirigencia de Ubisort está haciendo lo posible para platicar con ellos y con el Gobierno del Estado para sellar un acuerdo porque no hay condiciones para que pasen en esta parte de la región triqui”, recalcó Juárez Hernández, como lo hiciera semanas antes, en la víspera de la realización de la primer caravana humanitaria.

Curiosamente, un día después de la amenaza frontal de la Ubisort, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, declaró ante el mismo medio de comunicación, que “todas las organizaciones que busquen la paz en la región serán bienvenidas”.

Pidió a los integrantes de la caravana respetar los usos y costumbres de la etnia triqui, y dijo confiar en que no se politizaría el tema.

“Doy la bienvenida al diputado Encinas Rodríguez que va a venir en la caravana, bienvenidos todos, vamos a tomar todas las medidas de seguridad para quienes lleguen y esperamos reunirnos con los integrantes en los próximos días para estar a la disposición”¹⁶.

En la edición impresa de *La Jornada* del 4 de junio, un texto de Octavio Veles Ascencio, corresponsal en Oaxaca, informaba que “eurodiputados y diputados del Parlamento alemán pidieron al Ejecutivo mexicano asegurar las condiciones de seguridad de los participantes de la caravana de observación civil Bety Cariño y Jyri Antero al municipio autónomo de San Juan Copala, a efectuarse el próximo

¹⁵ García, Edwin, “Bloqueará Ubisort paso a caravana que encabezará Encinas”, Sistema Radiofónico Informativo, 2 de junio de 2010.

¹⁶ García, Edwin, “Respalda Gobierno del Estado caravana a Copala”, Sistema Radiofónico Informativo, 3 de junio de 2010.

martes, ante el riesgo de ser agredida por el mismo grupo armado que atacó la primera misión el 27 de abril pasado.

“En una carta fechada de Bruselas, Bélgica, los parlamentarios europeos informaron que han dado seguimiento puntual a la situación del pueblo indígena triqui y a las condiciones de vida de la comunidad de San Juan Copala”. Para el gobierno de Oaxaca, la presión ya era internacional.

Tras participar en un foro sobre gobernabilidad en la ciudad de Oaxaca de Juárez, como parte del programa de integración de gobierno que proponía Gabino Cué Monteagudo, en ese momento candidato a la gubernatura del estado por la coalición integrada por la oposición, Alejandro Encinas Rodríguez declaró, a pregunta expresa de un grupo de reporteros que lo abordaron, que Ulises Ruiz había contestado los oficios enviados por el legislador y en su respuesta “el gobernador se da por enterado y da instrucciones a Evencio Nicolás Martínez Ramírez, secretario de gobierno, de atenderlo y bueno, tendrá que cumplir con su responsabilidad”.

Informó también que la CNDH nombró a una comisión que acompañaría a la caravana, además de un grupo de visitantes.

Al ser interrogado por las declaraciones del líder de la Ubisort, respecto a su intención de bloquear el paso de la caravana, Encinas afirmó que “es una vergüenza que en este país, y en este estado en particular, un grupo de caciques y gente que está al margen de la ley imponga condiciones por encima de la autoridad.

“Creo que esa declaración, como las que han hecho algunos otros representantes, en este caso del gobierno del estado, el diputado federal Heliodoro Díaz, diciendo que es un suicidio, no muestran más que tres cosas: o una incompetencia del gobierno del estado que no garantiza la responsabilidad fundamental de cualquier autoridad, que es garantizar la integridad de las personas y de sus bienes; que hay complicidad con este tipo de organizaciones muy identificadas con el PRI, o en tercer lugar, es una amenaza”, diría Alejandro Encinas, quien después de

algunas horas regresó a la ciudad de México para terminar de definir la participación de los diputados perredistas en la caravana.

Retén y disuasión: la caravana no avanza

Un reportero radiofónico relataba desde el camión donde viajaban los diputados, pormenores del avance de la caravana: “te comento que en estos momentos estamos llegando a Juxtlahuaca, en el estado de Oaxaca, estamos aproximadamente a unos 15 o 20 minutos de lo que es San Juan Copala y déjame comentarte que a la entrada de esta población, algunos funcionarios del gobierno estatal hicieron una especie de bloqueo para advertir a los diputados, encabezados por Alejandro Encinas, que no existen las condiciones para entrar a esta comunidad triqui, debido a que hay grupos armados ya esperando a esta caravana que, te repito, trae 30 toneladas de víveres”, narraba para el noticiario.

“Prácticamente era un retén. La autoridad estatal se encargó del primer cinturón, pero la negociación (del avance de la caravana) la condujo la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). La autoridad local advirtió en varias ocasiones que no siguiéramos adelante”, recuerda Francisco Fragoso, parte de la avanzada de la caravana, desde el tercer piso de una torre de la nueva sede del Senado –donde se desempeña como asesor de Alejandro Encinas- ubicada sobre Reforma.

A escasos metros de la *Laguna encantada*, espacio de recreación que anuncia la llegada a Santiago Juxtlahuaca, más de cien elementos de la policía estatal bloqueaban la carretera. José Alberto Quezadas Jiménez, comisionado de la Policía Estatal y María de la Luz Candelaria Chiñas, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), encabezaban el “operativo de seguridad”.

Candelaria Chiñas, mujer delgada, de tez morena, estatura promedio, de abundante y alborotada melena oscura y lentes de sol, se acercó al autobús que encabezaba la caravana con la intención de hablar con Alejandro Encinas.

“Aquí no viaja ningún diputado”, fue la respuesta del operador del vehículo. La procuradora buscó al legislador en el autobús siguiente. Ahí sí lo encontró.

Intercambiaron saludos, Chiñas dio la “bienvenida”, Encinas agradeció “las atenciones”.

Representantes del municipio autónomo, activistas y observadores de derechos humanos descendieron de los autobuses para exigir que la policía permitiera el avance de la caravana y garantizara su llegada a San Juan Copala. Mientras esperaban entablar algún tipo de diálogo con la autoridad, a menos de dos metros, había grupos de cuatro o cinco uniformados con armas largas en mano.

Al no ver movimiento en los vehículos de las dependencias de seguridad y sentirse ignorados por la procuradora, quien buscaba al coordinador del GPPRD para “acordar el ingreso”, un grupo de caravaneros decidió entrar a Juchitán a pie. Los diputados permanecieron en su autobús.

Menos de un kilómetro había avanzado el grupo cuando las camionetas de la policía estatal y de la procuraduría comenzaron a avanzar. Chiñas decidió entablar diálogo con la coordinación de la caravana; una comisión integrada por representantes del municipio autónomo, un representante de organizaciones sociales y otro más del grupo de diputados.

La procuradora informó que en un recorrido previo, el comisionado de policía pudo identificar la presencia de “los grupos en conflicto”, apostados en la zona y que no permitirían la entrada de la caravana. “Yo personalmente hablé ya con uno de ellos, estoy disuadiéndolo... les estamos advirtiéndoles que por favor se retiren y que permitan el paso de la caravana sin ningún acto de violencia; sin embargo, ellos nos dicen que no, que no quieren que entren”, dijo.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Oaxaca, Heriberto Antonio García, se sumó a la advertencia de que no existían condiciones para la entrada de la caravana: “estamos muy preocupados... con otros miembros de la comisión hemos estado dialogando de manera permanente, sobre todo con uno de los líderes, Rufino (Juárez Hernández), y lamentablemente consideramos que no hay las condiciones para entrar”.

Instantes después, las dependencias permitieron el avance de la caravana acompañada de la Policía Federal.

Tras cruzar el municipio de Santiago Juxtlahuaca, el progreso del convoy se volvió más lento. Prácticamente a vuelta de rueda, la caravana llegó a la comunidad de Santa Rosa Caxtlahuaca, donde las autoridades volvieron a intentar detenerla.

Candelaria Chiñas descendió de la camioneta que la transportaba y se acercó al autobús donde viajaban los diputados para intentar dialogar nuevamente con Alejandro Encinas y explicar “los inconvenientes” de seguir adelante. Sin descender del camión, el diputado recordó a la procuradora que él no podía decidir si la caravana continuaba rumbo a San Juan Copala o no, y le pidió dirigirse a la comisión organizadora.

Un grupo de reporteros que viajaba en el camión de los diputados, tomó su equipo y descendió a registrar el diálogo entre la procuradora y la comisión organizadora de la caravana.

Al centro de un amplio grupo de camarógrafos y fotógrafos, que bajo un calor abrazante y seco se apretujaban para disparar sus lentes, y de reporteros que acercaban sus grabadoras sin preocuparse a quién apachurraban en su intento, quedó la funcionaria.

Visiblemente alterada y tras la insistencia de los activistas de que se permitiera el avance de la caravana, la procuradora advirtió: “ustedes dicen que lo que piden es que se les den garantías para que puedan entrar y salir. Nosotros les estamos diciendo que les damos esa seguridad; sin embargo, no podemos garantizar al ciento por ciento que no vaya a haber problemas. Eso lo dejo muy claro... nosotros no tenemos el control sobre la gente... si se da un problema, un malentendido o lo que fuese que provoque un acto de violencia, de eso no es responsable el gobierno del estado... las veces que se ha intentado entrar, incluso nuestra propia policía estatal, ha habido balaceras, muertes y lesionados”.

La procuradora repetía los argumentos con los que insistentemente la Ubisort había rechazado la presencia de la caravana, al considerarla un acto de provocación.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca informó que la dependencia había recibido, días atrás, a una comisión de la Ubisort que solicitó su intervención para que la caravana no ingresara a Copala; “Rufino Juárez está más adelante con un grupo de personas y nosotros prevemos que puede haber algún conflicto. Ellos, al igual que ustedes, dicen que su único objetivo es dialogar, que no se les tomó en cuenta, que no se ha dialogado con ellos”.

Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, recordó a ambos funcionarios la existencia de una averiguación previa por el homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, en la que se señalaba a miembros de la Ubisort y al propio Rufino Juárez Hernández, como probables responsables de la agresión en que murieron los activistas.

“No es posible que esta persona, señalada en una averiguación previa que se investiga de oficio, pueda estar tranquilamente sin haber sido citada y además se tenga constatada la presencia de grupos armados, que ustedes mismos están señalando, y la autoridad no sea capaz de responder”, cuestionó.

La procuradora insistió en la necesidad de establecer una mesa de diálogo con todos los grupos involucrados para tener “una visión objetiva, real e integral de la situación”.

Respecto al señalamiento de Ramírez López, Candelaria Chinas se limitó a contestar que “las investigaciones están avanzando; tenemos, desde luego, girados oficios y no solamente para él, sino para las tres organizaciones; hay órdenes para todos porque todos han incurrido en este problema, señor”.

La comisión organizadora decidió que la caravana se acercaría lo más posible a San Juan Copala, centro ceremonial triqui.

El grupo de logística de la Cámara de Diputados ya no funcionaba como avanzada de la caravana; desde su arribo a Santiago Juxtlahuaca, se había mantenido solamente algunos metros adelante del resto del convoy, incluido el policial.

“Al acercarnos a la zona de conflicto comenzamos a darnos cuenta de que se enrarecía el entorno, porque hasta la propia autoridad nos decía que no era seguro que avanzáramos. Con esa declaración de la autoridad del estado, de la procuradora, el gobierno acepta de facto, la pérdida del territorio”, afirma Francisco Fregoso.

Además de los vehículos de seguridad que avanzaban junto con la caravana, en ambos lados de la carretera, en los cerros, montículos y laderas, había presencia de la policía estatal, de la Policía Federal e incluso del Ejército. Decenas y decenas de encapuchados vestidos de negro, con lentes de sol, chalecos antibalas y armas largas, siempre con el dedo en el gatillo y apuntando a la carava, integraban una valla serpentaria que fluía con el andar del sinuoso camino de entrada a la nación triqui. El operativo desplegado era fastuoso y teatral.

Según las descripciones que aportaron los sobrevivientes del ataque del 27 de abril, ampliamente difundidas por varios medios de comunicación, en ese momento no podía establecerse con exactitud, distinción alguna entre paramilitares y policías. Era, además, un operativo disuasivo.

A vuelta de ruedas la caravana logró llegar a Agua Fría. Ahí nuevamente, José Alberto Quezadas Jiménez recordó los inconvenientes de seguir adelante. La procuradora propuso que, para evitar la violencia, la caravana depositara en una comunidad cercana a Copala, las toneladas de víveres y posteriormente los habitantes de los municipios vecinos, o las propias organizaciones en conflicto, se acercaran a recogerlas.

“No obstante esto, ustedes insisten, desde luego que se les va a acompañar; ya tenemos desplegada toda la seguridad en el entendido de que, quiera Dios, no pase nada que podamos lamentar”, atajó la funcionaria.

La comisión organizadora decidió que avanzara más el convoy, que nuevamente se detuvo en la entrada de La Sabana. Una nueva evaluación de la situación permitió el avance algunos kilómetros más, hasta la comunidad de Diamante.

Jorge Albino, impulsor de la creación del municipio autónomo y parte de los activistas que viajaban en el autobús que encabezó la caravana, asegura que el verdadero propósito de la autoridad estatal, fue bloquear el paso de los vehículos: “nos estaban intimidando e intimidando a la gente que se solidarizó, no era por protección a la caravana. De hecho, más adelante, en Diamante, los comandantes que encabezaban ese operativo amenazaron a muchos compañeros que iban con nosotros; les decían que podrían ser detenidos, que más adelante había gente armada, que si la caravana quería pasar, lo tendría que hacer sobre ellos”.

En Diamante la comisión organizadora de la caravana anunció que a consecuencia de que el Estado no podía garantizar completamente la seguridad del convoy, éste avanzaría a Copala solamente si la Ubisort no mantenía bloqueado el acceso.

La policía estatal ofreció revisar la zona y propuso que los diputados designaran a algún integrante de su equipo para que los acompañara y comprobara las condiciones de acceso.

Xavier Pacheco Boix, quien por muchos años se ha desempeñado como chofer de Alejandro Encinas, fue el elegido.

Quezadas Jiménez ordenó que le pusieran un casco y chaleco antibalas. Acompañados de alrededor de ocho elementos de la policía estatal, Quezadas y Pacheco avanzaron cerca de cinco kilómetros en dos camionetas de la dependencia; luego siguieron a pie. Alrededor permanecían apostados varios elementos de la policía de Oaxaca.

A cuatro años del incidente, Pacheco Boix recuerda: “nos bajamos de las patrullas y nos adentramos caminando por la sierra, para ver cómo estaba el camino. Copala tiene una brecha para descender y poder llegar al pueblo. Estaba bloqueado el único camino de terracería. Había un montón de piedras, ramas y

troncos tirados en el piso. Había presencia de los grupos de Copala, pero estaban ocultos.

“Cuando bajamos, a determinada distancia, hicieron un aviso: dispararon una ráfaga al aire. En presencia de la autoridad, de la policía estatal. Yo iba con el comisionado y nos dieron el aviso de: ‘ya no más’”.

La policía estatal no hizo nada. Cuando se escuchó la ráfaga todos se tiraron al suelo. No supieron desde dónde se hicieron los disparos. No intentaron siquiera repeler la agresión. Se quedaron quietos. Cuando ya no escucharon nada, se incorporaron y regresaron a las patrullas.

Mientras avanzaban de regreso al convoy, la policía alcanzó a detener a un grupo de activistas que por su cuenta había decidido seguir avanzando, rompiendo con el esquema de la caravana. Quezada y sus hombres no los dejaron seguir, y regresaron todos juntos.

Se reincorporaron a la caravana y Xavier le contó a Alejandro Encinas lo que había pasado. Para no poner en riesgo la vida de ningún integrante de la caravana, decidieron regresar.

Los vehículos con la ayuda humanitaria no pudieron avanzar más allá de una cerrada curva rodeada de precipicios; el mínimo espacio que había entre los únicos dos carriles retrasó la salida inmediata de la zona. No pudieron virar con una simple vuelta en U, los autobuses tuvieron que buscar un paraje donde pudieran maniobrar, e iniciar el regreso a Huajuapán de León.

Un grupo de reporteros que viajaba junto con los diputados se adentró caminando hasta donde estaba Rufino Juárez Hernández y lo entrevistó. Nadie se percató de su ausencia hasta que fue imperativo iniciar el viaje de regreso.

Al día siguiente, varios medios de comunicación, nacionales y extranjeros, dieron cuenta de las palabras de Juárez Hernández.

A pregunta expresa de por qué no habían permitido el paso de la caravana y de los diputados, el “líder” de la Udisort respondió: “no hay ninguna convocatoria que

diga que a eso venían. Venían solamente a apoyar al MULTI. Si me señalan un documento que me señale que venían a eso, entonces con mucho gusto, y tendría que ser en otra parte, porque San Juan Copala es un centro ceremonial, espiritual y es de todos los pueblos triquis, y es necesaria la seguridad para que toda la gente pueda transitar libremente”.

Cuestionado sobre las condiciones en que el grupo que encabezaba permitiría la entrada de la caravana, señaló: “podemos permitir que vengan si firman un documento en el que no nos van a responsabilizar de lo que pase, porque no solamente hay intereses de nosotros, sino de todas las organizaciones que existen en la zona triqui”.

El contingente regresó a Huajuapán de León, la misma tarde del martes 8 de junio de 2010. En el salón de fiestas, Flamingos, ubicado a cuatro cuadras del centro de la comunidad y pintado totalmente de rosa, Omar Esparza, de CACTUS; Alejandro Encinas y Jorge Albino Ortiz, ofrecieron una conferencia de prensa en medio de un clima tenso y con reclamos de integrantes de la *Otra Campaña* por la presencia y participación de los diputados en la caravana.

Las toneladas de ayuda humanitaria quedaron bajo el resguardo del párroco de *El Sagrario*, quien se comprometió a entregarlas a la Cruz Roja, con la intención de que ellos, a su vez, las hicieran llegar a los habitantes de San Juan Copala.

A la postre, Jorge Albino reflexiona: “ellos que eran la autoridad y no se impusieron. Prácticamente le dieron todo el poder a la Ubisort y apostaron al exterminio de los compañeros de adentro. Son varias estrategias; en Oaxaca éramos el único municipio que se declaró autónomo formalmente. El Estado le apostó a desaparecerlo, era un mal ejemplo”.

Ese día, la autoridad de Oaxaca, no tuvo autoridad, ni para garantizar el libre tránsito.

IV. La investigación: Ubisort en la mira

Fuero común, fuero federal: ineficacia compartida

Los cuerpos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola fueron recuperados y trasladados a la cabecera municipal de Santiago Juxtlahuaca, cerca de 24 horas después del ataque a la caravana.

El miércoles 28 de abril, un grupo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), encabezados por Lázaro Hernández, comandante regional de la dependencia, ingresó a la zona triqui, no sin antes contar con el permiso verbal de la Ubisort.

“Nadie puede ir ahí, ni el Ejército. Nosotros negociamos llegar hasta cierto punto y, aun así, ellos (los paramilitares) hacen disparos al aire. Si nos pasamos del punto al que acordamos llegar, sí nos disparan a dar”¹⁷, explicó Hernández a Zósimo Camacho, jefe de información de *Contralínea*, quien se desplazó a Juxtlahuaca tras enterarse de la desaparición de Érika Ramírez y David Cilia, reporteros del semanario.

Cerca de las 8:30 de la mañana de ese miércoles, los elementos de la AEI, un grupo de peritos y otro de médicos, dejaron la cabecera municipal para trasladarse a la zona de la emboscada. Curiosamente, ningún agente del Ministerio Público los acompañó.

Horas más tarde, los cuerpos de Bety y Jyri, transportados sin mayor cuidado en la batea de una de las camionetas de la Subprocuraduría Regional de la Mixteca, llegaron a Santiago Juxtlahuaca. Ahí, el agente del Ministerio Público del fuero común, abrió el legajo de investigación 114/(SJ)/2010, por los delitos de homicidio, lesiones y otros, en contra de quien o quienes resultaran responsables.

¹⁷ Camacho, Zósimo, “Grupo paramilitar priísta impone su ley y amedrenta al Estado”, *Contralínea*, <http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/02/grupo-paramilitar-priista-impone-su-ley-y-amedrenta-al-estado/>, 2 de mayo de 2010.

La investigación había iniciado formalmente; sin embargo, inmediatamente comenzaron a generarse más interrogantes que respuestas.

Tras la recuperación de los cuerpos, también se efectuó el traslado de los vehículos en que viajaban los observadores de derechos humanos y los reporteros de diversos medios de comunicación.

Esa misma tarde, el comandante Lázaro Hernández declaró, ante la prensa nacional e internacional que se dio cita en Juxtlahuaca, que no había encontrado nada más en la zona, pero reconoció que los elementos que se trasladaron con él al sitio del atentado, hicieron su trabajo muy rápido para permanecer el menor tiempo posible en las inmediaciones de La Sabana.

Al mismo tiempo, en conferencia de prensa con dirigentes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la ciudad de Oaxaca, Gabriela Jiménez Rodríguez, concejal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y quien también formó parte de la caravana, declaró que al intentar escapar: “nos detuvieron, todos eran encapuchados, jóvenes, que estaban cubiertos de la cara, ya cuando nos tenían detenidos, nos sentaron sobre unas piedras y nos dijeron que quien mandaba allá era Heriberto Pazos y Rufino Juárez”¹⁸. Se refería al dirigente del MULT, y de la Ubisort, respectivamente.

En la misma declaración, Jiménez Rodríguez afirmó que los encapuchados les dijeron que el territorio en que se encontraban era controlado por la Ubisort, y que “eran protegidos del gobernador Ulises Ruiz Ortiz”¹⁹.

En la ciudad de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tuvo conocimiento de la emboscada y ataque a la caravana que se dirigía a San Juan Copala, a través de las notas difundidas en medios de comunicación, a escasas horas de haber ocurrido.

Dos días después del atentado, el 29 de abril, la dependencia recibió dos quejas de particulares interesados en el tema, así como comunicados de diversas

¹⁸ Rosario Avendaño, Olga, “Trasladan cuerpos tras emboscada en Oaxaca”, *El Universal*, <http://www.eluniversal.com.mx/notas/676468.html>, 28 de abril de 2010.

¹⁹ Ídem.

organizaciones civiles y medios de comunicación en los que solicitaban su intervención y condenaban el ataque a la caravana, por lo que radicó el expediente de queja número CNDH/4/2010/2761/Q, y su acumulado, en el expediente CNDH/5/2010/2256/Q.

A causa de la agresión a la caravana, que tuvo como consecuencia el asesinato de Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, así como la desaparición de Érika Ramírez y David Cilia por más de 60 horas, la CNDH solicitó al gobierno de Oaxaca, mediante oficio número 73/2010, la implementación de medidas cautelares en favor de los sobrevivientes del ataque, y que adoptara las medidas necesarias para realizar una investigación a fondo del caso.

En el documento también se solicitaba que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, garantizara la seguridad de los habitantes de la comunidad triqui de San Juan Copala.

Evencio Nicolás Martínez Ramírez, entonces titular de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, aceptó las medidas cautelares, y así se lo hizo saber a la CNDH, a través del oficio SUBDH/04-10/USA/DCR/449CNDH, con fecha del mismo 29 de abril de 2010.

El primero de mayo de 2010, la página en línea de *El Universal*, difundió una nota en la que informaba que la delegación en Oaxaca de la Procuraduría General de la República (PGR), había atraído la investigación del ataque a la caravana.

“La dependencia federal informó que el agente del Ministerio Público de la Federación, con residencia en Huajuapán de León, a unos 150 kilómetros de distancia de San Juan Copala, inició la averiguación previa PGR/OAX/HL/102/2010, contra quien o quienes resulten responsables de los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”²⁰, abundaba la nota.

²⁰ Rosario Avendaño, Olga, “PGR atrae caso de emboscada en Oaxaca”, *El Universal*, <http://www.eluniversal.com.mx/notas/677213.html>, 1 de mayo de 2010.

El 25 de mayo de 2010, en seguimiento al expediente de queja CNDH/4/2010/2761/Q, la CNDH emitió un acuerdo de atracción del caso, y volvió a solicitar al gobierno de Oaxaca, la aplicación de medidas cautelares para garantizar los derechos de los habitantes de San Juan Copala, en particular a la vida, seguridad, e integridad personal.

Posteriormente se hizo de conocimiento público, que la PGR también atrajo la investigación por el asesinato de los activistas, a través de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, e inició la averiguación con número de control: PGR/DGCAP/DF/060/2010.

Sin embargo, el 27 de diciembre de 2010, un juez desechó la averiguación previa consignada por la PGR, argumentando que existían evidentes inconsistencias.

Omar Esparza reaccionó a este hecho exigiendo a la PGR que, a la mayor brevedad posible, integrara debidamente la averiguación y que ésta fuera consignada ante un juez para que librara órdenes de aprehensión en contra de los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos, pues la dilación y mal desempeño de los funcionarios públicos federales, permitía que los responsables siguieran gozando de impunidad.

Después de un año del asesinato de ambos activistas, y ya con Gabino Cué Monteagudo encabezando el gobierno de Oaxaca, las dependencias no tenían avances significativos en la investigación.

El 24 de abril de 2011, a través de un comunicado de prensa difundido en varios medios de comunicación, Omar Esparza Zárate denunció la impunidad en la que permanecían los asesinatos: “tenemos claro que desde la presidencia municipal de Santiago Juxtlahuaca, con el respaldo de Carlos Martínez, presidente municipal por el Partido Unidad Popular y actualmente diputado local por el PRI, así como desde el control de esa presidencia de los hermanos Mejía, se administraron los

recursos para atacar la caravana. Son ellos quienes operan la Udisort como grupo de contrainsurgencia, paramilitar y control social”²¹.

En el documento, quien fuera pareja de Bety y padre de sus dos hijos, denunciaba la incapacidad de las instituciones estatales y federales para impartir justicia; afirmó que ambas dependencias carecían de imparcialidad, capacidad, y de un verdadero interés por esclarecer los crímenes, pero sobre todo, por generar condiciones de paz y reconciliación entre la comunidad triqui.

Señalaba además que: “la política está secuestrada por grupos de poder, caciques políticos al servicio del príismo y un Estado autoritario que busca criminalizar a la sociedad, al movimiento social, a las defensoras y defensores de los Derechos Humanos. Sus más de 27 grupos paramilitares en Oaxaca son entrenados y supervisados por el Ejército, quien “defiende” nuestra soberanía asesinando niños, mujeres y personas inocentes que son mexicanos como cualquiera de nosotr@s.

“Exigimos la detención inmediata de los asesinos de Bety y Jyri quienes están plenamente identificados y hasta hoy caminan libres sin que la justicia haga caso de nuestras demandas, exigencias y denuncias. A caso las más de 240 mil cartas que llegaron a la PGR exigiendo justicia, ¿no significan nada?, las exigencias de más de 25 países en el mundo quienes se pronunciaron por este cobarde asesinato en consulados, actos públicos, correos, movilizaciones, actos culturales, plantones, marchas, prensa escrita, medios de comunicación alternativos, pláticas, foros, volantes, revistas y más, ¿no les dicen nada?”²².

En el mismo desplegado, a nombre del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Omar exhortó a la sociedad civil a participar en una jornada para exigir justicia por los asesinatos de los defensores de derechos humanos. Se tenían programadas tres actividades en Huajuapán de León: una manifestación frente a

²¹ Esparza Zárate, Omar, “A un año del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola”, *La Voladora Radio*, <http://lavoladora.net/?p=319>, 24 de abril de 2011.

²² Ídem.

la Subprocuraduría de Justicia de la Mixteca, una marcha a la Plaza de la Libre Expresión y otra manifestación ante la delegación de la PGR. Posteriormente, una caravana hacia el municipio de Chila de las Flores, Puebla, para llevar arreglos florales a la tumba de Bety Cariño.

Curiosamente, un día antes de que se cumpliera un año del asesinato de Bety y Jyri, Omar Esparza y Fernando Urbano fueron detenidos por la Policía Federal.

Alrededor del mediodía del 26 de abril de 2011, mientras circulaban en la carretera México-Oaxaca, y cuando se disponían a pagar el peaje correspondiente en la caseta de San José Miahuatlán, Puebla, cerca del municipio de Tehuacán, elementos de la dependencia federal les marcaron el alto, argumentando que el vehículo en el que viajaban tenía reporte de robo.

Inmediatamente fueron trasladados a la comisaría del sector Tehuacán 088-XXI, no sin antes haber sido conducidos a la Cruz Roja para que les realizaran un examen médico. Fueron liberados después de las ocho de la noche, luego de que sus abogados acreditaran que el vehículo en cuestión, pertenecía a Omar y que así había sido desde varios años atrás.

Esta detención fue leída por los activistas como una arbitrariedad, un mensaje de violencia, amedrentamiento y represión contra defensores de derechos humanos.

A pesar de las detenciones, las actividades programadas para el día siguiente, para conmemorar el primer año del asesinato de Bety y Jyri, se realizaron sin mayores inconvenientes.

Tras el ataque en abril de 2010, la CNDH continuó recibiendo información de las agresiones de las que los habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala eran víctimas a manos del grupo paramilitar que mantenía el cerco a la comunidad indígena triqui.

En mayo de 2011, en la Gaceta N.250, la CNDH publicó la recomendación 26/2011, titulada “Sobre el caso de la comunidad indígena triqui de San Juan Copala, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca”.

En el análisis jurídico del documento, la dependencia afirmaba que tras el asesinato de los activistas, y posteriores ataques a los vecinos de la comunidad, “se observó que se vulneraron los Derechos Humanos a la libre determinación como comunidad indígena, a la vida, a la integridad y seguridad personal; a la seguridad pública, legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, a la educación y a la protección de la salud y al libre tránsito, en agravio de los habitantes de San Juan Copala, atribuibles a servidores públicos del Gobierno del estado de Oaxaca, así como del Ayuntamiento de Santiago Juchitán”²³.

Sobre el caso, la dependencia formuló recomendaciones a Gabino Cué Monteagudo, titular del Ejecutivo en Oaxaca; a Eufrosina Cruz Mendoza, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del H. Congreso del estado de Oaxaca; y a los integrantes del Ayuntamiento de Santiago Juchitán.

Cuatro meses después, en septiembre de 2011, David Peña Rodríguez, abogado del municipio autónomo y de la familia Esparza Cariño en el seguimiento al asesinato de Bety Cariño, explicó en entrevista con *Contralínea*, que a nivel federal, la PGR no tenía avances en la investigación porque carecía de las armas utilizadas en el ataque para comprobar su portación, y tampoco existían testimonios: “no hay ninguna red de investigación que nos señale cómo actúan los grupos, ni quiénes los financian”, declaró el abogado²⁴.

En la misma entrevista, Peña Rodríguez informó que se había solicitado la intervención del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR y también del área de Inteligencia Militar; sin embargo, “nadie tiene nada, no se puede vincular. Se necesita gente de

²³ Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 26/2011, “Sobre el caso de la comunidad indígena triqui de San Juan Copala, Santiago Juchitán, Oaxaca”, *Gaceta CNDH* N. 250, <http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Gacetas/250.pdf>, 24 de junio 2014.

²⁴ Ramírez, Érika, “Paramilitares de Oaxaca en la impunidad: eurodiputadas”, *Contralínea*, <http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/09/29/paramilitares-de-oaxaca-en-la-impunidad-eurodiputadas/>, 29 de septiembre de 2011.

adentro que explique cómo funciona, quién aporta el financiamiento y cómo está [constituida] la estructura”²⁵.

El testimonio de “gente de adentro”, se hizo público el primero de enero de 2012.

En la página web de la revista *Contralínea* se publicó un reportaje por el que se difundió el testimonio de un indígena triqui, que no dio su nombre, pero que se identificó como miembro de la Ubisort. Afirmó haber estado presente en el ataque a la caravana el 27 de abril de 2010.

En un video de hora y media, integrado al expediente abierto de las investigaciones, al que tuvo acceso *Contralínea*, el hombre de playera oscura y chamarra de mezclilla, afirma que luego de tres días de reuniones entre los dirigentes de la Ubisort, para diseñar una estrategia e impedir la llegada a San Juan Copala de la caravana humanitaria, la noche previa al ataque, Antonio Cruz García, alias *Toño Pájaro*, sentenció: “¡Si vienen, nos los *chingamos!* Nadie llamó a esa gente”²⁶.

La maniobra diseñada incluía el bloqueo con piedras de la salida de La Sabana, para impedir que los caravaneros tuvieran contacto con quienes permanecían en el municipio autónomo de San Juan Copala, cuya creación fue impulsada por el MULTI.

Al inicio de la filmación, abunda el reportaje de Érika Ramírez –quien junto con David Cilia permaneció oculta por casi tres días en la sierra triqui, tras el ataque a la caravana- el testigo dice, con ayuda de un traductor, que está dispuesto a declarar todo lo que sabe a cambio de protección. El traductor dice a quien realiza la grabación que el sujeto entiende español a un 80 por ciento y que no lo habla.

El hombre enlistó a quiénes planearon la emboscada a la caravana: los hermanos Rufino y Anastasio Juárez Hernández; Antonio Cruz García, Cirino López Ramírez, Julio César Martínez Morales, Mauro Vázquez y Daniel Martínez López.

²⁵ Ídem.

²⁶ Ramírez, Érika, “¡Si vienen, nos los *chingamos!*”, *Contralínea*, <http://contralinea.info/archivo- revista/index.php/2012/01/01/si-vienen-nos-los-chingamos/>, 1 de enero de 2012.

Ayudado del intérprete, el testigo afirmó ser testigo de la repartición de armas y haber recibido, de manos de Rufino Juárez Hernández, un rifle calibre 22.

Los paramilitares se citaron en un paraje de La Sabana. Llegaron puntuales a las siete de la mañana de ese martes 27 de abril de 2010, vestidos con ropa negra y de tipo militar, con camuflaje; llevaban gorras, paliacates y portaban armas largas: AK-47 y rifles. Apostados en la cima de un cerro, esperaban las órdenes de *Toño Pájaro* y Rufino Juárez.

En la publicación, la reportera narra cómo en el minuto 30 de la grabación, el pistolero comenzó a hablar un español fluido y dio detalles de la emboscada.

“Relata que mientras la caravana hacía su recorrido, en la comunidad de La Sabana –bastión de la Ubisort y desde la cual se mantuvo un retén paramilitar– se registraron los primeros actos de violencia. Pasaban las nueve de la mañana. Dos mujeres que habían salido de San Juan Copala caminaban por el monte; una de ellas, embarazada. Se toparon con el grupo paramilitar. Las detuvieron y amenazaron. El indígena triqui que declara ante el video afirma haberse enfrentado a *Toño Pájaro*, quien con su *cuerno de chivo* apuntaba a una de ellas. Buscaba que les perdonara la vida. Las indígenas lloraban. Sólo habían salido en busca de alimento”.

Según el testimonio, las mujeres permanecieron retenidas por el grupo armado hasta que se escucharon los motores de los vehículos de la caravana, instante en el que *Toño Pájaro* ordenó iniciar el ataque.

“Cuando la camioneta se paró al topar con las piedras, *Toño Pájaro* comenzó a disparar. Le siguieron sus “soldados”. Bajaron hasta donde estaban los carros que intentaron dar marcha atrás sin conseguirlo. El ataque fue a matar. No dejaban de tirarles a las personas, que en pocos segundos salieron despavoridas de los vehículos.

“Según el paramilitar que participó en el ataque, *Toño Pájaro*, Anastasio Juárez y Cirino López Ramírez continuaron el tiroteo; se fueron contra la camioneta blanca donde caían muertos Alberta Cariño Trujillo y Jiry Jaakkola. El resto del equipo

paramilitar apuntaba a los demás integrantes que conformaban el contingente, quienes huían resbalaban por el cerro”²⁷, narra el reportaje.

En el video, el gatillero afirma que tras el ataque, el grupo paramilitar saqueó las pertenencias que dejaron quienes viajaban en los vehículos: computadoras, celulares, cámaras fotográficas y de video. Más tarde se reunieron en La Sabana para repartir el botín y beber.

El sujeto, que en la grabación aseguró pertenecer a la Udisort desde 2004, refirió que el grupo tiene una organización tipo militar y que “los recursos con los que se financia la compra de armas de alto poder y el traslado a distintas partes del estado son tomados de las partidas 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinadas supuestamente a incrementar el nivel de vida de la población”²⁸.

A finales de abril de 2012, los medios de comunicación de Oaxaca, consignaban en sus páginas, el nulo avance en las investigaciones –tanto de las dependencias estatales como federales- de los asesinatos de los activistas.

“A dos años de distancia la justicia aún no ha llegado. Pues, si bien, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió la averiguación previa por los sucesos, aún no la consigna a algún juez federal”²⁹, escribió Octavio Vélez Ascencio, reportero del *Noticias*.

Omar Esparza emitió un nuevo pronunciamiento, exigió a las autoridades hacer su labor, pero no hubo avances significativos hasta medio año después.

El 2 de octubre, en conferencia de prensa, Omar Esparza Zárate, en compañía de su abogado, David Peña Rodríguez, informó que la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, a través de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social –creada tras la publicación en *Extra, Periódico Oficial*, del

²⁷ Ídem.

²⁸ Ídem.

²⁹ Vélez Ascencio, Octavio, “Betty y Jyri, 2 años, Copala, e impunidad”, *Noticias*, <http://www.noticiasnet.mx/portal/general/seguridad/94156-betty-y-jyri-2-a%C3%B1os-copala-e-impunidad>, 27 de abril de 2012.

acuerdo del Ejecutivo estatal el 21 de marzo de 2011, y posteriormente del acuerdo del procurador de Justicia del Estado de Oaxaca, el 11 de mayo del mismo año- había librado órdenes de aprehensión contra los presuntos autores materiales del ataque a la caravana.

Las órdenes de aprehensión se libraron por el delito de homicidio calificado, luego de que la dependencia logró demostrar que los presuntos responsables de los asesinatos actuaron con premeditación, alevosía y ventaja en el ataque a la caravana.

Esparza y Peña informaron que, en coordinación con la fiscalía, solicitaron al juez de la causa ampliar el periodo de investigación seis meses, para perfeccionarla y ofrecer mayores pruebas, mismas que serían juzgadas bajo el sistema de justicia oral, ya implementado en Oaxaca.

Omar Esparza y Eeva Lenna Jaakkola –madre de Jyri enlazada en conferencia desde Finlandia- se dijeron optimistas por el avance, pero señalaron que sólo representaba un paso más en su largo camino de exigencia de justicia.

Sin embargo, ese optimismo se fue diluyendo semana tras semana, y luego mes con mes, al observar que la procuraduría de Oaxaca no cumplimentaba ninguna de las órdenes de aprehensión.

En septiembre de 2013, Esparza Zárate, en compañía de David Peña y Karla Michel Salas, abogados de ambos activistas asesinados, se reunió con Alejandro Negrín Muñoz, director general para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), y una representación de la embajada de Finlandia en México, para conocer de los avances en la investigación de los asesinatos.

A pesar de que un año antes habían sido giradas las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del homicidio de Bety y Jyri, y de que el gobierno federal se comprometió públicamente con el Parlamento Europeo, el

gobierno finlandés, y su representación en México, a dar solución al caso, sólo una persona había sido detenida: Rufino Juárez Hernández.

“Sabemos que estuvo en el ataque a la caravana, y que se ha declarado inocente. El juez no ha citado a los testigos para empezar a desahogar el tema; no hay juicio, está estancado porque han ido ganando amparos sus abogados. Tiene un abogado de la Procuraduría de Asuntos Indígenas, un abogado particular y uno de la fiscalía. Prepara muy bien sus alegatos y cada que va a comenzar el juicio, lo aplazan con amparos. Creo que esa es su idea, aplazarlo hasta que llegue alguien *ad hoc* al PRI; seguramente en el gobierno de Gabino Cué lo habrá, buscarán una coyuntura para poder lograr su liberación”, declaró Omar Esparza, a propósito de la aprehensión de quien fuera líder de la Ubisort.

Para Esparza, la detención de Juárez Hernández fue un movimiento de cálculo político: “es un tema de Estado. Una vez muerto Timoteo Alejandro, después Heriberto Pasos (líder del MULT asesinado el 23 de octubre de 2010 por un par de sujetos que le dispararon mientras transitaba en la agencia municipal Cinco Señores, cerca de la capital oaxaqueña), el único que quedaba era Rufino. Entonces, una vez todo desmantelado, empieza a haber reacomodos; nuevos dirigentes saliendo a tomar los espacios que dejaron unos y otros, que podrían tener interlocución con el nuevo estado”.

Pero hasta ahí los avances. Ni la procuraduría del estado ni la federal, habían ejecutado las órdenes de aprehensión contra Antonio Cruz García, Anastasio Juárez Hernández, Bernabé Santiago Cruz –a quien también se le vincula con el asesinato Teresa Bautista y Felicitas Martínez, comunicadoras de *La Voz que Rompe el Silencio*- Daniel Martínez López, Elías Cruz Merino, Juan Macario Bautista Martínez, Mauro Vázquez Ramírez, Ramiro Domínguez García, Antonio Cruz Merino, Cirino Ramírez López, Antonio Solano Vázquez y Julio César Martínez Morales.

Cuestionado sobre si el gobierno de Oaxaca o el federal, en algún momento han propuesto a la familia Esparza Cariño el resarcimiento del daño a través de un acuerdo económico, Omar señaló: “no, y nosotros no lo permitiríamos. No es un

hecho monetario, es un tema moral. Por eso, lo primero que tiene que pasar es que se haga justicia, la justicia tiene que ver con la detención de los asesinos. No lo aceptaríamos porque el gobierno lo utiliza para desacreditar a la gente. No aceptaríamos ninguna indemnización porque creemos que lo que estamos haciendo es solamente a obligar a las instituciones a cumplir con el papel que tendrían que desempeñar”.

“Pedimos justicia. Para nosotros no hay otra cosa que exigir que no sea justicia; nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, no reclaman otra cosa que no sea justicia; y la justicia pasa por la detención y juicio de los asesinos de Bety y Jyri. Queremos que se sepa la verdad, que salga a la luz pública quiénes son los asesinos, va más allá de los tiquis que dispararon, hay autores materiales e intelectuales del caso”, sentenció.

El seguimiento europeo

Mientras el cuerpo de Alberta Cariño Trujillo era trasladado a Chila de las Flores, Puebla, para ser enterrado, el de Jyri Antero Jaakkola era conducido al Distrito Federal y entregado a la Embajada de Finlandia en México, para ser enviado, posteriormente, a su tierra natal.

A través de un comunicado de prensa difundido por la Embajada de España en México, la Unión Europea (UE) expresó sus condolencias a los familiares de Bety Cariño y Jyri Jaakkola; confió en la pronta recuperación de los heridos, condenó la agresión a la caravana en la que fueron asesinados los activistas, y señaló que seguiría con atención la evolución de las investigaciones.

En el mismo documento, la UE exhortaba a los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Ulises Ruiz Ortiz, a hacer todo lo posible para identificar, arrestar, juzgar y castigar a los responsables de la emboscada y de los asesinatos.

Al conocer de los hechos, el gobierno de Finlandia, a través de su representación en México, exigió a las autoridades competentes investigar a fondo y deslindar las responsabilidades del caso.

La embajadora Ulla Marianna Väistö declaró: “condenamos los hechos en Oaxaca, estos asesinatos, no solamente del ciudadano finlandés, sino también el de la ciudadana mexicana (Alberta Cariño), y exigimos que se investigue a fondo”³⁰.

Väistö subrayó la necesidad de presentar ante los tribunales de justicia a los culpables del atentado, e informó que la embajada a su cargo tenía conocimiento de la participación de Antero Jaakkola en la caravana humanitaria que pretendía llevar víveres a San Juan Copala.

Días después, el 11 de mayo de 2010, la Subcomisión de Derechos del Parlamento Europeo (PE), presidida por Heidi Hautala, eurodiputada de nacionalidad finlandesa, solicitó a la presidencia española de la Unión Europea, que en la reunión de la Cumbre México-UE, que se realizaría cinco días después en Santander, España, exigiera a las autoridades federales de México, la realización de una investigación urgente, transparente e imparcial, de los hechos ocurridos en las inmediaciones de San Juan Copala.

Y efectivamente, el tema salió a relucir en una reunión privada realizada durante dicha cumbre. Tarja Halonen, presidenta de Finlandia, habló del tema con el entonces presidente Felipe Calderón, para reiterarle la solicitud de que se realizase una investigación exhaustiva del asesinato de Jaakkola.

Tras este primer llamado al gobierno federal de México, la presión internacional continuaría incrementándose.

El 15 de junio de 2010, casi dos meses después del asesinato de Cariño y Jaakkola, las diputadas del Parlamento Europeo, Satu Hassi, de Finlandia, y Franziska Keller, de Alemania, hicieron del conocimiento de la opinión pública su intención de viajar a la ciudad de México y a Oaxaca, con el objetivo de entrevistarse con autoridades mexicanas y solicitar, de manera directa, castigo para los asesinos de ambos activistas.

³⁰ Redacción, “Gobierno finlandés exige castigo en caso Copala”, *Proceso*, <http://www.proceso.com.mx/?p=106132>, 12 de mayo de 2010.

En un comunicado de prensa difundido a través de la oficina de comunicación del Grupo de los Verdes, las diputadas señalaron su interés por conocer los avances en las investigaciones de los homicidios; entrevistarse con organizaciones defensoras de derechos humanos y con Adriana Valiña, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las legisladoras informaron también que buscarían reunirse con el entonces procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez; con José Antonio Guevara Bermúdez, quien se desempeñaba como titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob; con Ulises Ruiz Ortiz, gobernador de Oaxaca; Evencio Nicolás Martínez Ramírez, secretario general de gobierno de Oaxaca; con María de la Luz Candelaria Chiñas, procuradora de justicia de la entidad, y con el secretario de Seguridad Pública, Javier Rueda Vázquez.

Semanas atrás, Hassi había hecho pública la preocupación de la familia Jaakkola de que los asesinos de Jyri fueran protegidos por autoridades estatales o federales, y que sin la presión internacional, no se llevara a cabo una investigación imparcial.

Una semana antes, en reunión del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, en la que participó Juan Duarte Cuadrado, entonces presidente del Grupo de Trabajo del Consejo sobre Derechos Humanos, el asesinato de Jyri Jaakkola, volvió a ser tema de discusión.

Duarte Cuadrado, quien también se desempeñaba como director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores de España, informó que la UE, efectivamente había hablado con diplomáticos del gobierno mexicano sobre el asesinato del finlandés, mientras se desarrollaba la cumbre bilateral en Santander.

En la citada cumbre, la delegación mexicana estuvo encabezada por Felipe Calderón y Patricia Espinosa, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Para sorpresa de sus interlocutores, Duarte informó que la comitiva mexicana había hecho todo lo posible por minimizar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en México, por lo que los europarlamentarios no supieron cómo profundizar en la discusión. Por los mismos meses, en México se agudizaba la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón.

Como lo habían anunciado, Hassi y Keller viajaron a nuestro país a finales de junio.

En compañía de funcionarios de la delegación europea en México, se reunieron el primero de julio con representantes de la PGR, de la SRE y de la Segob, en el Distrito Federal. Ese mismo día, agilizaron los trámites formales para solicitar diversas entrevistas con autoridades de Oaxaca.

Sin embargo, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, entonces bajo la administración de Evencio Nicolás Martínez Ramírez, dirigió un oficio a la SRE en el que señalaba que por el momento político que se vivía en la entidad –la población de Oaxaca iría a las urnas el domingo 4 de julio para elegir gobernador, renovar el congreso local y más de cien presidentes municipales- no había condiciones para recibir a las eurodiputadas; es más, subrayaba que no podría garantizar la seguridad de las europeas, y que, de insistir en la visita, su presencia sería considerada como un acto de intromisión al proceso electoral.

En la misiva, Martínez Ramírez solicitaba a la secretaria, pedirles a las extranjeras que se abstuvieran de visitar Oaxaca.

A pesar de las “recomendaciones”, Hassi y Keller decidieron trasladarse a Oaxaca y modificar su agenda, que originalmente contemplaba varias reuniones con dependencias estatales y grupos de la sociedad civil que habían dado seguimiento al conflicto en la zona triqui.

El viernes dos de julio por la tarde, y el sábado tres por la mañana, se llevaron a cabo las reuniones, de carácter privado, con organizaciones civiles oaxaqueñas.

Tras la visita, las legisladoras declararon ante medios de comunicación que “en Oaxaca es muy claro que el Estado no cumple con su función básica de proteger la vida de sus ciudadanos”³¹.

Luego de entrevistarse con habitantes de la zona triqui que tuvieron que dejar su comunidad a causa de las agresiones, las legisladoras pudieron constatar que la problemática “va mucho más allá de un conflicto interno, como nos manifestaron funcionarios de la Procuraduría General de la República, de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación”, abunda la nota.

Al dejar México, las diputadas adelantaron que presentarían un informe al Parlamento Europeo sobre las violaciones a los derechos humanos y los avances en la investigación de los asesinatos de los activistas, y así lo hicieron.

Ya en Europa, Hassi y Keller difundieron al interior de sus grupos, un informe preliminar sobre el viaje en el que denunciaron el cerco que la Ubisort mantenía sobre San Juan Copala.

Documentaron, además, graves violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la comunidad triqui, y subrayaron el hecho de que ni el gobierno estatal ni federal intervenían, por lo que las eurodiputadas advirtieron que podrían registrarse más hechos de violencia en la región.

Luego de las diputadas, los padres de Jyri Jaakkola también visitaron México para exigir justicia.

En conferencia de prensa, a escasos días de que se cumplieran cuatro meses de la emboscada a la caravana, Eeva Leena y Raimo Jaakkola demandaron el esclarecimiento de la muerte de su hijo y de Bety Cariño.

Acompañados de Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) Sección México; David Peña Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y abogado de las familias de los activistas asesinados, y de Omar Esparza Zárate, los padres del finlandés precisaron que se

³¹ Ballinas, Víctor, “El Estado no protege la vida en Oaxaca: eurodiputadas”, *La Jornada*, 5 de junio de 2010, pág. 18.

reunirían con autoridades oaxaqueñas para conocer mayores detalles del ataque en el que murió Jyri, pues el informe que la embajada de México en Finlandia les hizo llegar fue “muy general”.

“Queremos justicia para él, pero también para la gente con quienes vivía y trabajaba. Es muy importante que se resuelva el caso de Jyri y Bety (...) Esperamos que la solución de sus asesinatos sea un paso para cambiar la cultura de impunidad y garantizar la seguridad para los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos”³², declaró Eeva Leena.

El 16 de septiembre de 2010, en una reunión entre los representantes de la embajada de México ante la UE con las diputadas Satu Hassi y Franzisca Keller, organizada por la delegación para México del Parlamento Europeo, las eurodiputadas presentaron formalmente el reporte de su visita a nuestro país.

En dicha reunión, Víctor Hugo Morales, jefe de la cancillería de la embajada, disculpó a la embajadora Sandra Fuentes Beráin –quien había sido invitada para exponer la posición de México frente al reporte- por no poder asistir al encuentro, ya que dijo, se encontraba en un evento de la comunidad mexicana, en el marco de las fiestas del Bicentenario de la Independencia.

En la reunión también participaron Alberto Glender Rivas, responsable de las relaciones con el Parlamento Europeo, y Alejandro Sousa Bravo, responsable de derechos humanos.

El informe oficial de las eurodiputadas se centró en los argumentos que ya habían hecho públicos; mantuvo una postura crítica y de alarma ante lo que conocieron de viva voz en Oaxaca, pero con un tono más diplomático en su redacción.

Keller declaró que los asesinatos de ambos activistas están vinculados a la pésima situación respecto a derechos humanos que se vive en México, y recordó a los miembros de la embajada, que nuestro país ha sido denunciado en instancias internacionales por el mismo motivo.

³² Gómez Mena, Carolina, “Padres del activista finlandés Jyri Jaakkola piden justicia”, *La Jornada*, 25 de agosto de 2010, pág. 21.

Sobre la situación de San Juan Copala, la legisladora identificó a la Ubisort como un grupo paramilitar que cuenta con el respaldo del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, y subrayó que, aun con la grave problemática, el gobierno federal no ha intervenido ni tampoco las autoridades de Oaxaca.

Morales se limitó a responder que el gobierno mexicano lamentaba los hechos ocurridos en San Juan Copala y que la SRE continuaría informando de los avances “de los hechos”, a las embajadas europeas interesadas.

La reunión terminaría como lo documentó el suplemento de la revista *Proceso*, *Prisma Internacional*.

“El presidente de la delegación europarlamentaria, Ramón Jáuregui, intervino:

–A mí me queda una sola pregunta: ¿hay algún acusado ante la Procuraduría? ¿Hay alguna persona inculpada por estos asesinatos?

–Según mi información, nadie ha sido acusado oficialmente –contestó Hassi.

Los funcionarios mexicanos prefirieron guardar silencio al respecto. Y es que ese era el reclamo central de las eurodiputadas: la impunidad que reina en México”³³.

El ocho de noviembre del mismo año, en una audiencia pública que despertó mucho interés, el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, revisó el caso de los activistas asesinados en Oaxaca.

En su participación, la madre de Jyri Jaakkola, se dijo preocupada por el lento avance en la investigación del asesinato de su hijo, pues afirmó que desde su visita a México, tres meses atrás, la PGR no había tenido comunicación con su familia, y tampoco había reportado ninguna novedad a la embajada de Finlandia.

En su intervención, David Peña dijo que el 70 por ciento de los avances en la investigación de la PGR había sido logrado por los aportes de la representación legal, de los sobrevivientes a la emboscada, y de las familias de las víctimas; el abogado también se dijo preocupado porque el gobierno esperaba que los testigos

³³ Redacción, “Brucelas: Debate sobre San Juan Copala”, *Prisma Internacional*, *Proceso*, <http://www.proceso.com.mx/?p=101467>, 18 de septiembre de 2010.

fueran a declarar, en lugar de aplicar los mecanismos de protección a su favor, aun con las peticiones formalmente hechas.

Como representante del gobierno mexicano a esa reunión del Parlamento Europeo estuvo Alejandro Negrín, director general para Derechos Humanos y Democracia de la SRE.

El funcionario público, en actitud defensiva, ocupó su intervención para enumerar los “esfuerzos” de México en materia de derechos humanos y aseguró que “el país cuenta con instituciones capaces de prevenir las violaciones”.

Respecto a Oaxaca, Negrín retomó el argumento oficial al afirmar que los conflictos en la zona triqui tenían raíz en motivaciones de origen étnico, social, territorial y político, además de subrayar que “no se trata de conflictos alentados por el gobierno. Es claramente un conflicto intercomunitario”.

Pero Satu Hassi reviró: “es importante entender que no es un conflicto interno de un grupo indígena. Hay indicios que muestran que la violencia en esa zona se orquesta desde afuera. La Ubisort tiene entrenamiento militar y está mucho mejor armada que los otros dos grupos en confrontación. Una de las pruebas del vínculo con Ulises Ruiz Ortiz se ve en el hecho de que a la policía local le llevó más de un día llegar al lugar del asesinato, aunque ya sabían lo que había pasado. La policía explica que no se les llamó para que acudieran a la zona. Esta idea, de que la policía espera antes de ir al lugar de un crimen, es muy rara para los europeos”.

Cuando Peña volvió a tomar la palabra, solicitó a Negrín que se comprometiera públicamente a tres cosas: proteger a los testigos y sobrevivientes del atentado, investigar el ataque a la caravana y la presunta relación de la Ubisort con el gobierno de Ulises Ruiz, y permitirle colaborar directamente en las investigaciones de la PGR; pero el funcionario, evasivo, contestó que él sólo tenía el encargo de transmitir “la apertura de la PGR en las investigaciones”, pero que comunicaría su solicitud a la Segob.

En febrero de 2011, los padres de Antero Jaakkola regresaron a nuestro país para volver a demandar justicia ante instancias federales y escuchar de los servidores públicos que seguía sin avances la investigación.

En esa oportunidad, Eeva Lenna y Raimo Jaakkola declararon que el Parlamento Europeo analizaba la conformación de una comisión de supervisión de las investigaciones de los asesinatos, y que al regresar a Finlandia, tendrían una reunión con los legisladores para informarles de lo ocurrido en México.

Lenna dijo confiar en que el gobierno mexicano haría todo lo posible por esclarecer el asesinato de Jyri, pues de no ser así, ella y su familia evaluarían mecanismos legales para llevar el caso a una corte internacional.

Sin embargo, pocos o nulos avances en la investigación, habría en los meses siguientes.

Después de un año y cuatro meses del asesinato de los activistas, las diputadas europeas regresaron a México.

En septiembre de 2011, Satu Hassi y Franziska Keller visitaron Oaxaca y la ciudad de México, de nueva cuenta.

Tras reunirse en Oaxaca con Omar Esparza, Jorge Albino Ortiz y Reyna Martínez Flores, representantes del MULTI, las legisladoras dijeron sentirse “decepcionadas y desilusionadas”, porque la justicia mexicana no había llevado a juicio a ninguno de los probables responsables de los asesinatos de Bety y Jyri.

Keller apuntó que “cuando se habla de justicia en México se asocia con la palabra impunidad, porque es muy triste, pero sí, los asesinos andan libremente”.

Las legisladoras se reunieron con Gabino Cué Monteagudo –quien calificó el asesinato como “un crimen premeditado”- Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca; Jesús Martínez Álvarez, secretario general de Gobierno; Marco Tulio López Escamilla, secretario de Seguridad Pública y con el procurador general de Justicia, Manuel de Jesús López.

El procurador argumentó que había “un número de problemas significativos” en la integración de la averiguación previa de los asesinatos, en particular, porque las dependencias carecen de protocolos de protección para brindar seguridad a los sobrevivientes del ataque a la caravana, lo que había impedido contar con la obtención de sus testimonios.

Manuel de Jesús López, “admitió que los procedimientos de investigación son muy pobres en general en México. El país no tiene especialistas en realizar autopsias, las cuales en general no son efectuadas. Insistentemente los miembros de la oficina del procurador presentes en la junta expresaron el temor de cometer cualquier error en la preparación de un expediente para emitir una orden de arresto, porque eso llevaría a un rechazo del juez para otorgarla”³⁴.

En la ciudad de México, tuvieron una breve entrevista con funcionarios de la PGR.

La conclusión de las autoridades federales y locales fue unánime: no había avances significativos que comunicar.

El informe de las diputadas, a su regreso a Europa, fue contundente: “los cambios no se dan de la noche a la mañana, y un nuevo partido llegó al poder en Oaxaca después de 70 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, la desarticulación entre el nivel federal y el estatal, la coexistencia de sistemas judiciales distintos y los pobres estándares existentes en materia de investigación continúan obstaculizando que haya progresos significativos, a pesar de los esfuerzos del gobierno”³⁵.

En el documento, las legisladoras señalaron que en repetidas ocasiones, las autoridades han justificado la falta de avances por problemas de organización y de índole administrativo; sin embargo, lo mismo les habían dicho en 2010, sin que hasta el momento hicieran cambios estructurales.

En el informe de las legisladoras se hace mención de la aprehensión de Rufino Juárez, “el líder de la Ubisort, un grupo paramilitar activo en la región de San Juan

³⁴ Appel, Marco, “Informe europeo: Los crímenes de San Juan Copala, puras disculpas”, *Prisma Internacional, Proceso*, <http://www.proceso.com.mx/?p=290020>, 2 de diciembre de 2011.

³⁵ Ídem.

Copala, y presuntamente detrás del cerco a esa comunidad en el momento del ataque a la caravana de paz donde viajaba Jyri³⁶; no obstante, recalca que la detención no se dio por el asesinato de los activistas, sino por la presunta participación de Juárez en otros dos homicidios cometidos en la región triqui.

Después de dos años del asesinato de Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, y de la elección federal que en julio de 2012 regresó al PRI a Los Pinos, las legisladoras del Parlamento Europeo decidieron regresar a México para reunirse con parte del equipo de transición de Enrique Peña Nieto.

El tres de octubre de 2012, Pedro Matías, corresponsal de *Proceso* en Oaxaca, documentó el encuentro de Satu Hassi y Franziska Keller con la entonces coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia, Claudia Ruiz Massieu Salinas, para solicitarle que el entonces presidente electo, continuara con la “política de protección y respeto a los derechos humanos”.

En la reunión, llevada a cabo en la ciudad de México, las legisladoras “hicieron la petición de que se continúen las investigaciones para dar con los autores intelectuales de los asesinatos, entre los que se ha mencionado al propio exgobernador priísta Ulises Ruiz Ortiz³⁷”.

Las eurodiputadas consideraron un progreso que la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, a través de la Fiscalía Especial de Investigación a Delitos de Trascendencia Social, haya liberado las órdenes de aprehensión, pero urgió a las autoridades a cumplimentarlas.

Sin embargo, poco tiempo duró el entusiasmo de las legisladoras del Grupo de los Verdes. A su regreso a Europa, declararon que había pocas posibilidades que los integrantes del equipo de transición de Peña Nieto se ciñeran a la aplicación de la ley.

Keller comentó que “Ruiz Massieu no asumió ningún compromiso concreto para el esclarecimiento de los homicidios de Jaakkola y Cariño: ella nos dijo que estaba

³⁶ Ídem.

³⁷ Matías, Pedro, “Pide parlamento europeo a EPN justicia en caso de activistas asesinados”, *Proceso*, <http://www.proceso.com.mx/?p=321596>, 3 de octubre de 2012.

ahí para escucharnos, para recopilar información y a partir de ella definir prioridades y trazar planes”³⁸.

Luego de tres años de seguimiento del caso, y de avances a cuenta gotas en las investigaciones, el 26 de abril de 2013, Satu Hassi declaró a la prensa del Parlamento Europeo que el juicio por el asesinato de Jyri, podría ser llevado a los tribunales de Finlandia.

Hassi explicó que aún se encontraban a la espera de que se realizara el juicio en México, pero que de no darse, era muy probable que la familia Jaakkola decidiera llevar el caso ante la justicia de su país.

“Nosotros ya checamos que eso es legalmente posible en el caso de Jyri, pero no lo es en el de Bety Cariño”³⁹, declaró la legisladora de origen finlandés, y argumentó que: “el derecho internacional considera dos motivos para que un caso pueda ser procesado en el país de la víctima del crimen: que el país donde se cometió no tenga voluntad, o no sea capaz de procesar a los culpables, y que el código penal del país donde ocurrió el delito no identifique el crimen”⁴⁰.

En este caso en específico, comentó la parlamentaria, ninguno de los activistas eran objetivos específicos; lo era, en su conjunto, la caravana en la que participaban, y en las leyes de Finlandia, a diferencia de las mexicanas, se encuentra tipificado el delito de poner en riesgo la vida de un grupo de personas. Además, en el mismo atentado se puso en peligro la vida de otra ciudadana finlandesa que, legalmente, tendría la opción de acudir a la justicia de su país.

En una nueva visita a nuestro país, la primera semana de mayo de 2013, Hassi y Keller volvieron a escuchar de las autoridades mexicanas que no había progresos significativos en el caso de los activistas asesinados, por lo que comentaron que el sistema de justicia de México “no parece ser muy eficaz”.

³⁸ Appel, Marco, “El asesinato de Jyri Jaakkola y el desinterés en equipo de EPN”, *Proceso*, <http://www.proceso.com.mx/?p=323003>, 19 de octubre de 2012.

³⁹ Appel, Marco, “Posible demanda a Ulises Ruiz en Finlandia por caso Jaakkola”, *Prisma Internacional*, *Proceso*, <http://www.proceso.com.mx/?p=340273>, 26 de abril de 2013.

⁴⁰ Ídem.

“Desde una perspectiva europea, el caso es fácil porque se sabe qué grupo armado estuvo en San Juan Copala. Es públicamente conocido quién es el líder y supongo que también se sabe quiénes son los miembros de ese grupo, por eso el grupo potencial de sospechosos es muy limitado. En Europa se necesitarían semanas o un par de meses para resolver ese caso”⁴¹, declaró Hassi.

La legisladora añadió que le parecía frustrante la lentitud en el proceso de investigación; pues tuvieron que pasar dos años y medio para que fueran liberadas las órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables, y varios meses más sin que se haya detenido a ninguno de ellos.

También se dijeron sorprendidas porque, a pesar de que desde las más altas esferas políticas de Europa se ha exigido al Estado mexicano dé solución al caso, nada se ha concretado.

Hassi afirmó que Oaxaca le parecía un lugar muy hermoso y con gran herencia cultural, y que era una pena no poderlo disfrutar por la impunidad que prevalece.

Pero sentenció: “no estamos planificando resignarnos; vamos a seguir el caso de Jyri y Bety hasta que sea resuelto”⁴².

“La moneda está en el aire. No queda más que encomendarse a Dios”

“Siento que mis alas están cortadas”...afirma Rufino Juárez Hernández, desde un rincón de su *habitación* en la celda siete del penal de Santa María Ixcotel, ubicado a escasos 30 minutos del centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, donde lleva poco más de tres años recluso.

El indígena triqui, que hasta antes de su aprehensión era temido y señalado como máximo dirigente de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, el 12 de

⁴¹ Matías, Pedro, “Tiene México justicia lenta, ineficaz y ante exigencias, “no pasa nada”: eurodiputadas”, *Proceso*, <http://www.proceso.com.mx/?p=341170>, 6 de mayo de 2013.

⁴² Ídem.

mayo de 2011, mientras se encontraba en las oficinas de su organización, en Santiago Juchitán.

La Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca giró la orden de aprehensión, tras identificarlo como probable responsable del delito de homicidio calificado, con alevosía y ventaja, de Celestino Hernández Cruz -causa penal 113/2011- y de Paulino Ramírez Reyes -causa penal 187/2011- así como del delito de lesiones, en perjuicio de Timotelín Velasco de Jesús -causa penal 457/2011-.

Sin mediar palabra, fue conducido al penal de Ixcotel. Un año después, ya en reclusión, el Ministerio Público le notificó que también se le acusaba de ser el autor intelectual y material del delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja -causa penal 257/2012- de los defensores de derechos humanos, Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, asesinados el 27 de abril de 2010, tras una emboscada a la caravana humanitaria en la que participaban y que pretendía llevar víveres y medicamentos a los habitantes del autodeclarado municipio autónomo de San Juan Copala, centro ceremonial y político de la zona triqui.

En el penal de Santa María Ixcotel conviven alrededor de mil 200 internos, la mayoría oaxaqueños, aunque también los hay del norte del país, incluso tres o cuatro centroamericanos.

El primer contacto de la visita con la vigilancia del penal de Ixcotel se da en la aduana. Un arco detector de metales descompuesto y dos elementos de seguridad, un hombre serio y de expresión amable, y una joven risueña, de cabello negro y lacio que asoma por la gorra del uniforme azul marino, tras un pequeño mostrador de madera, hacen la primera evaluación.

“Así no puedes pasar” -dice la joven policía a la visita- “no pasas con ropa oscura”, sentencia mientras observa el pantalón de mezclilla azul marino. “A ver, quítate la chamarra”; con un movimiento rápido la visita baja de sus hombros la prenda, también de mezclilla, para dejar al descubierto una camiseta verde agua de algodón, sin mangas y cuello redondo, “¡uy no!, esa blusa está muy escotada.

No pasa. ¿Quién sigue?”, con un brazo la policía hace a un lado a la visita sin siquiera voltear a verla.

“En la tiendita de ahí en la pluma rentan ropa”, dice en voz baja una mujer de falda larga y reboso, a la visita, mientras avanza lentamente en la fila con dirección a la entrada del penal.

La visita vuelve sus pasos 20 metros hasta llegar a la calle que, perpendicular, hace esquina con la cerrada de la aduana.

Tras unos vidrios opacos asoma la cabeza una señora de lentes. Con unos cuantos pasos se acerca para preguntar qué quiere la visita: “¿necesita encargar su mochila, cambiarse de ropa?, pásele pa’ acá”, dice la mujer mientras abre una puerta corrediza tras la que un hombre de bigote, sentado a la mesa, saluda con un movimiento de cabeza sin dejar de masticar.

En el rincón de la habitación, dos sillas sostienen una montaña de ropa de diferentes tallas: camisas sucias, suéteres descosidos, pantalones y blusas sin botones. La visita toma un pantalón de mezclilla azul claro y una blusa blanca de manta, de cuello alto y bordada con coloridas flores.

“Aquí cámbiate”, dice la vieja de lentes levantando un trapo percutido amarrado a un cordón, tras el que los clientes tienen *privacidad* para cambiarse. La visita pasa. Al despojarse de la chamarra y la indecente blusa verde agua que le impidió el acceso al penal, levanta la vista; los ojos del hombre que habían estado atentos a sus movimientos se desvían unos centímetros mientras una pequeña sonrisa cínica asoma por sus labios.

“Pero apúrate mi’jita, si no, ya no alcanzas a entrar”, revira la vieja colocándose frente al hombre que malhumorado avienta la cuchara al plato. “Van a ser 20 pesos por la ropa y por cuidarte tus triques. Aquí acomódalos. ¿A qué nombre?”, pregunta la mujer mientras vuelve a abrir la puerta corrediza para que salga la visita.

Los vecinos del penal de Santa María Ixcotel han encontrado en la venta de fruta, comida, frituras, y en la oferta de servicios como la renta de ropa y el cuidado de

pertenencias ajenas, la opción perfecta para que, sin desatender su hogareña rutina, consigan ingresos extras.

“Ya ves, ahora sí, manita”, dice la risueña policia cuando la visita regresa presentándose con ropa *adecuada* en la aduana. “Pásate a revisión”, le indica señalando una pequeña puerta de madera que otra guardia abre.

En un pequeño espacio, de no más de siete metros cuadrados, comienza la exhaustiva revisión. “Deja todo lo que traigas aquí sobre la mesa”, indica la mujer custodio a la visita. Un cuaderno, una pluma y una identificación oficial, son depositadas en lo que más bien parece un cambiador de pañales junto a la puerta cerrada.

“Quítate la chamarra y levanta los brazos”, pide la uniformada con voz amable, pero con tono imperativo. Sigilosas, sus manos palpan la chamarra. De uno de los bolsillos saca unos cuantos pesos que deja junto al cuaderno. También suelta la prenda. Con palmadas rápidas revisa el contorno de la visita que gira la cabeza a un costado por la incomodidad de la proximidad con la oficial.

“Bájate el pantalón”, ordena la custodio. La visita desabotona el broche, no tiene que hacer mayor esfuerzo pues el pantalón rentado tiene roto el cierre y la prenda inmediatamente resbala por sus muslos. La mujer, menuda, de ojos oscuros y labios maquillados, se inclina para cerciorarse de que no haya nada adherido a las piernas. “Ahora las pantaletas”, indica sin mayor aspaviento.

“¿Las pantaletas?”, duda la visita, “¿para qué?”. “Necesito ver que no traigas nada ahí abajo”, se excusa la uniformada. Un calor sofocante recorre la espalda de la visita hasta la cabeza; instantes después se deposita en sus mejillas para darle un aspecto ruborizado a su rostro. Se baja la ropa. “Está bien, ya súbetela. ¿Es la primera vez que vienes, verdad?”, pregunta la oficial con una ligera sonrisa en su rostro para tratar de calmar los visibles nervios de la visita, que sólo atina a hacer un movimiento afirmativo con la cabeza.

“Ahora súbete la blusa, por favor”, dice la custodio cambiando por completo el tono de su voz. La visita obedece. La mujer se aproxima de nueva cuenta. “Está bien,

puedes quitar las manos, no te voy a hacer nada, solo quiero revisar la ropa; ya casi acabamos”, dice amablemente al palpar las copas del brasier. “Estás limpia, quítate los zapatos. Rápido, chaparrita, que ya tengo cola allá afuera”, presiona la guardia mientras abre la puerta para hacer pasar a la siguiente mujer a revisión. En segundos, la visita se ha acomodado de nuevo la ropa y tomado sus pertenencias.

La custodio abre otra puerta al fondo del pequeño cuarto. La luz que penetra el espacio es un descubrimiento para la visita que durante la revisión, no se percató de la existencia de esa puertezuela. “Pásale por acá, ahorita te abren”, dice la custodio casi empujando a la visita que intentaba acomodarse los tenis, al cerrar a sus espaldas.

Mientras espera que una reja se abra para proporcionar sus datos y entrar al penal, la visita alcanza a escuchar a través de las delgadas paredes las indicaciones que recibía la otra mujer dentro del diminuto cuarto a media luz: “quítese el suéter, levántese la falda...”.

Rufino Juárez Hernández afirma que el 27 de abril de 2010, a la hora en que se produjo el ataque armado a la caravana humanitaria en el que murieron Bety Cariño y Jyri Jaakkola, él estaba en Huajuapán de León.

Dice haber estado en el Juzgado de garantías y tribunal de juicio oral en materia penal, ubicado en la colonia El Calvario, a escasos pasos de la terminal de autobuses de la ciudad, para dar seguimiento a la causa penal 24/2010, por la que el estado acusaba a varios simpatizantes de la Udisort de colaborar con la evasión del reo Gonzalo Vázquez Catarino, mientras recibía atención médica en un hospital de la localidad.

Según Juárez Hernández, la procuraduría del estado no pudo comprobar la participación de Micaela Hernández López, Rosalía Paz Dolores, Marcos Reyes López, Mario Bautista Ramírez, Albino Celestino Martínez, Eugenio Sánchez Santiago, Elías Vázquez Vázquez, Jorge Castro Ortiz, Mario Francisco Sánchez de Jesús, Antonio García López y Andrés Vázquez Catarino, en la comisión del

delito que se les imputaba, por lo que ese mismo día fueron puestos en libertad condicional.

Desde el penal de Ixcotel, Rufino afirma haber llegado al juzgado alrededor de las 14:00 horas; anotar su entrada a las 14:15 y su salida a las 15:00 horas, en la foja número 95 del libro de registro del juzgado. Recuerda, además, haber estado en compañía del actuario Porfirio Hernández López y de la encargada de causas penales, Mónica Rodríguez, además de las nueve personas acusadas.

De acuerdo a los testimonios de reporteros y demás activistas que sobrevivieron a la emboscada a la caravana, el ataque se registró entre 14:20 y 14:45 horas.

Rufino Juárez afirma que durante la presentación de pruebas, el juez que lleva su caso, desestimó el argumento de que él se encontrara fuera de la zona triqui, al considerar la posibilidad de que otra persona pudiera haber hecho el registro a su nombre, o bien, que se tratara de un homónimo que, efectivamente, estuvo en el juzgado.

La entrada a la penitenciaría de Santa María Ixcotel es un portón de metal gris, circundado de rejas con barrotes blancos. Una pequeña ventana se abre cada tanto para que un guardia observe el número de personas que ya esperan ingresar a hablar con los reos.

Ya en el interior, dos guardias tras un desvencijado escritorio anotan el nombre de la visita y su relación con el reo. Luego de recoger la identificación oficial, entregan una pequeña ficha con un número a punto de desaparecer y señalan un lúgubre pasillo. “Al fondo, a la derecha”, balbucea uno de ellos.

Con pasos cortos e inseguros, la visita se aproxima a un pasillo estrecho, poco iluminado, donde apenas permanecen vestigios de que alguna vez las paredes estuvieron teñidas de beige. Los muros desnudos, desgastados y con marcas de humedad, transportan el eco de un par de voces. Al fondo, en una pequeña oficina, dos guardias ven un partido de fútbol en una televisión colocada sobre un archivero de metal. “Siga derecho”, dicen a la visita sin siquiera permitirle terminar de preguntar por el reo, y sin despegar los ojos de la diminuta pantalla.

A mitad de otro pasillo, éste iluminado por la luz del sol, la visita aborda a un guardia: “Busco a Rufino Juárez”, le dice; “¿Rufino Juárez?, ¿Rufino Juárez?... a ver, vamos a buscarlo, creo que hay dos con ese mismo nombre, ¿cuál es su segundo apellido?”, pregunta el celador mientras desliza su pluma sobre una lista de reos cuyo primer apellido inicia con J.

“Juárez Hernández, Rufino, sí, aquí está. Lo encuentras en la C7”, informa el guardia que ya ha dado algunos pasos para retirarse, pero la expresión de desconcierto en el rostro de la visita lo detiene: “¿es la primera vez que vienes, verdad?, vente, yo te llevo”, exclama el policía.

Terminaron de andar el pasillo iluminado casi hombro con hombro. A la derecha, decenas de reos jugaban en unas canchas de basquetbol y futbol. Otros más observaban desde las gradas ubicadas a un costado, mientras hablaban o bebían agua. Una cabina armada de metal y lonas de plástico corroído constituían la tienda del penal. Los libres no se distinguían de los reos en ese espacio bullicioso aderezado con silbidos y una que otra mentada de madre.

Una barda de menos de un metro de altura completada por barrotes, separa a las canchas de otro patio; sentadas en banquetas de concreto, un par de voluptuosas mujeres trataban de ocultar sus redondas caderas bajo holgadas playeras mientras sus respectivos interlocutores frotaban las manos en sus muslos. Los cuchicheos que un hombre hacía en el oído de una de ellas, provocaban en la mujer una risilla nerviosa que apenas podía contener.

Sentados en el suelo, varios reos zurcían trozos hexagonales de piel para formar balones de futbol, mientras otros, de pie, recargados en las columnas o paredes, alternaban la vista entre los juegos de las canchas y los desconocidos que, a cuenta gotas, entraban al penal.

El guardia abrió una reja de barrotes sólo atrancada con un trozo de metal. Avanzó algunos pasos seguido de la visita que acaparaba las miradas de los reos. “¡Rufino, Rufino Juárez!”, gritó el celador deteniéndose frente a otra reja, esta sí, cerrada con llave. Era la entrada de la celda siete.

Un hombre moreno, de aproximadamente 1.60 metros de estatura, cabello oscuro, sin canas, ataviado con una playera blanca de manga larga, pantalón deportivo azul y tenis negros, apareció por un costado de la reja para recibir a la visita.

En su testimonio, Juárez Hernández niega categóricamente haber participado en el ataque en el que murieron Bety Cariño y Jyri Jaakkola. Afirma que su detención “es una táctica del gobierno de Oaxaca para presentarme ante el gobierno finlandés, como autor material del hecho”.

Niega también que su hermano, Anastasio Juárez Hernández, asesinado el 29 de julio de 2010 en un hecho lleno de inconsistencias y contradicciones –la Ubisort afirma que fue ultimado por un grupo fuertemente armado en el interior de su domicilio, ubicado en San Juan Copala; mientras que el MULTI sostiene que fue asesinado en Santiago Juxtlahuaca a causa de conflictos entre la Ubisort y organizaciones de transportistas, en una disputa por el control de concesiones de taxis que operan en la zona y que, posteriormente, su cuerpo fue trasladado a Copala para tergiversar las investigaciones- haya participado en la emboscada a la caravana; afirma que las versiones periodísticas que así lo han difundido son infundadas, pues el nombre de Anastasio Juárez Hernández nunca es mencionado en la causa penal -257/2012- que la procuraduría abrió para investigar los hechos; lo que indica, según su lectura, “que el gobierno no pudo fabricarle pruebas”.

Rufino se dice tranquilo, mientras platica sentado al borde del improvisado catre de madera de su habitación. Su cuarto, un espacio de cuatro metros cuadrados, está en el primer piso de la celda siete, que comparte con otras siete personas, que también tienen habitaciones separadas. Una mesita de madera, donde reposa el libro *Procedimiento penal en México*, y dos bancos de 70 centímetros de alto, completan los muebles.

A un lado del catre que se encuentra al fondo del espacio, unas cajas apiladas unas sobre otras hacen de estante y ropero; un pequeño ventilador para mitigar los calores veraniegos de Oaxaca y un ring de lucha libre de juguete, con sus valerosos combatientes en miniatura listos para la acción, acompañan los días y

noches del indígena triqui que, hasta antes de ser aprehendido, gozaba del *cobijo político* de quien fuera secretario general de gobierno en la administración de Ulises Ruiz Ortiz, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y también su maestro en la Facultad de Derecho.

A un lado del catre tendido con dos cobijas, reposan un par de botas cafés, debajo del mueble asoman tres pares de tenis, unos zapatos negros y un par de sandalias.

Cuestionado sobre las declaraciones que hiciera a la radio de Huajuapán en vísperas de la realización de la caravana del 27 de abril de 2010, y en las que advertía, como dirigente de la Ubisort, que no se haría responsable de lo que pudiera pasar si los activistas se empeñaban a entrar al municipio autónomo, Rufino Juárez señala que tras una reunión con miembros de su organización, se llegó a la conclusión de que era difícil garantizar la seguridad de la caravana.

“Fue una declaración de buena voluntad...si uno ve las llamas del fuego, dice: no metas tu mano porque se va a quemar. No fue una amenaza”, asegura Rufino mientras saca de entre sus pertenencias un cuaderno. Con la punta plana, chata y cuadrada de sus dedos cortos y regordetes, recorre las líneas escritas y garabatea sobre ellas.

A lo largo y ancho de varias hojas tiene anotados los detalles de los procedimientos penales abiertos en su contra; los lee detenidamente para tener la información fresca, o como un guion que debe ser repetido una y otra vez; repasa en silencio fechas, horas, números de causas penales, nombres...

Tres imágenes en marcos de madera decoran el cuarto; uno de ellos, ubicado junto a la puerta, tiene el dibujo de una mujer recostada en los brazos de una figura masculina. Ambos están delineados por un sinfín de diminutos puntos y cubiertos por barniz transparente. “Ése yo lo hice en el taller de carpintería”, dice el detenido al observar el interés que el cuadro ha despertado en la visita.

Respecto a la caravana realizada a principios de junio de 2010 y en la que participó un grupo de diputados federales perredistas, encabezado por Alejandro

Encinas Rodríguez, quien fungía como coordinador del grupo parlamentario y actualmente es senador de la República, Rufino Juárez reconoce que los simpatizantes de la Ubisort resolvieron organizarse para no dejarla entrar a “la zona de conflicto”, por temor a que pudiera haber otra agresión.

“En la región ha habido muchos muertos de todas las organizaciones. Nadie controla esa zona”, afirma Rufino sin apartar la mirada de su libreta.

Cuestionado sobre el testimonio de un hombre que se identifica como miembro de la Ubisort y que, a través de un video ya integrado a la averiguación, lo señala como responsable de haber organizado y participado en la emboscada a la caravana del 27 de abril de 2010 –en complicidad con Anastasio Juárez Hernández y Antonio Cruz García, alias *Toño Pájaro*-. Rufino sostiene que “esa persona tiene que ser del MULTI, para destruir a la Ubisort, quieren hacer daño, es un engaño, un fraude, una maquinación”.

También responsabiliza al MULTI de haber planeado varias balaceras en San Juan Copala y sus inmediaciones, para “demostrar a los reporteros de *Contralínea* que es la Ubisort quien hace las detonaciones, pero no es así”.

En la cárcel, Rufino Juárez Hernández dice haber aprendido a ser constante y disciplinado. Diariamente los reos se levantan a las siete de la mañana, tras organizar sus habitaciones y asearse, se concentran en el patio de la prisión para hacer honores a la bandera. Luego, cada quien sobrevive como quiere, o como puede.

Casi todos los días organizan partidos de fútbol o basquetbol. Rufino participa frecuentemente en ellos, luego de correr en las canchas o hacer ejercicio en la azotea de su celda, en un pequeño espacio acondicionado como gimnasio.

Cuatro o cinco aparatos de entrenamiento, unas cuantas pesas hechas de botes rellenos de concreto y un par de espejos, equipan el gimnasio. Al fondo, la figura de un hombre en playera, pantaloncillos cortos y brazos musculosos delineada en la pared con muchos colores, acompaña en silencio las rutinas que por la mañana, tarde o noche, hacen los presos.

Una noche que Rufino se encontraba haciendo pesas, en la penumbra, poco tiempo después de haberse instalado en la celda, escuchó una risa socarrona que venía del fondo del lugar. Detuvo su entrenamiento y encendió la luz. Estaba completamente sólo. En las habitaciones de los demás reos de la celda siete no había luz, todos parecían profundamente dormidos. A medida que Rufino se acercaba a la colorida pintura de la pared, de donde parecía provenir la irónica y gutural risa, un escalofrío recorrió su cuerpo inundándolo de miedo.

Salió corriendo del lugar rumbo a su habitación donde apretó los ojos hasta quedarse dormido para tratar de olvidar la siniestra risa. Al día siguiente no pudo levantarse. Amaneció bañado en sudor a causa de una intensa fiebre venida de la nada en plena oscuridad. Por tres días no probó bocado ni salió de la cama. Las crisis de fiebre arremetían en la madrugada para dejarlo exhausto al amanecer, sin poder dormir y sin fuerzas, siquiera, para mover los párpados.

Lo que a ojos de sus compañeros era pereza, se convirtió en preocupación y mal augurio para los presos de la celda siete que optaron por llamar al *Tío*, para que fuera a ver a Rufino. El diagnóstico no fue simple, pero el remedio sí. Después de una limpia con ramas de pirul y un huevo, Rufino pudo volver a ponerse de pie, a comer y conciliar el sueño.

Cuando se sintió mejor, y sin pensar que podía tener relación con su espontánea enfermedad, Rufino contó a sus compañeros y al *Tío* su experiencia en el gimnasio.

Las caras expectantes y curiosas de los reos cambiaron por pálidas caretas y miradas discretas con el *Tío*, quien tomó la palabra para contarle a los recién llegados la tragedia ocurrida en el gimnasio.

Hacía algunos años ya, un reo que terminaba de lavar su ropa resbaló en las escaleras de metal que conducen al gimnasio y a los lavaderos, y cayó más de ocho metros de altura. Un fuerte golpe en la cabeza le produjo una muerte instantánea.

Meses después de la inesperada enfermedad de Rufino, y con la anuencia de las autoridades del penal, un sacerdote bendijo el lugar y realizó plegarias rogando por el eterno descanso del fallecido. Los reos atribuyen a esta acción, el que no hayan vuelto a escuchar la siniestra risa en el gimnasio.

Además del ejercicio y los juegos recreativos, los presos del penal de Santa María Ixcotel ocupan el tiempo en lavar su ropa, hacer el aseo de sus habitaciones y de los lugares comunes de la celda, leer libros que se prestan entre ellos, o participar en los talleres de manualidades e inglés que se imparten en el penal. Rufino acaba de concluir el primer nivel de inglés.

A causa de la mala calidad en la comida que ofrece el penal a los reos –vegetales podridos, sopas agrias, e incluso carne agusanada- han optado por cocinar ellos mismos sus alimentos. La celda tiene una pequeña cocina comunitaria en la que Rufino ha aprendido a freír huevos y calentar tortillas; lo hace utilizando los sartenes y utensilios domésticos que su esposa le ha llevado en las escasas visitas que le ha hecho en el tiempo que lleva recluido.

Los productos son fáciles de conseguir en las tienditas de la cárcel, que funcionan más como instituciones crediticias. Los reos obtienen los artículos a precios mayores que en el exterior de la prisión, pero con la ventaja de que pueden pagarlos cuando sus familiares les lleven dinero.

Cuentan los reos que no hace mucho tiempo, la organización y funcionamiento del penal de Ixcotel, se definía tomando principalmente en cuenta las necesidades de la población carcelaria; en una especie de autogobierno de facto.

Las decisiones eran acordadas por un *consejo*, integrado por varios representantes de cada celda, y hechas llegar al área administrativa del penal, para su ejecución.

En vacaciones de verano, recuerda el *Tío* -un excomandante de la policía estatal que lleva recluido seis años, acusado de homicidio culposo- se podía observar diariamente a docenas de niños corriendo por el patio del penal y sus pasillos; los

hijos de los reos tenían permitido pasar con sus padres todo el tiempo que quisieran al interior de la cárcel; incluso las vacaciones completas, día y noche.

Los presos organizaban talleres para los niños: cursos de pintura, escultura, clases de inglés y torneos de fútbol, eran de las actividades predilectas de los menores.

Las esposas o parejas de los reos también podían permanecer semanas enteras al interior del penal; sin embargo, cuando el Estado decidió recuperar el control de Ixcotel, comenzaron a disminuir las facilidades que los presos tenían para convivir con sus familias.

Durante algún tiempo la dirección del penal y el *consejo* tomaron el acuerdo de permitir la presencia de las familias de los reos los fines de semana. Los menores y las féminas llegaban de visita los viernes por la mañana, y podían permanecer hasta el domingo por la tarde en las instalaciones.

Con el paso del tiempo, y el control más restrictivo del área administrativa de Santa María Ixcotel, desaparecieron esos privilegios. En la actualidad, las familias de los reos pueden compartir un máximo de nueve horas de visita continua con ellos.

A tres años de haber sido detenido, ninguna de las causas penales por las que es acusado Rufino Juárez Hernández, ha recibido sentencia.

El reo atribuye el nulo avance de los procesos penales en los que se le involucra, al exceso de trabajo del abogado de oficio que el Estado le asignó, a pesar de ser Oaxaca una de las entidades en donde ya se aplica el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, entre cuyas virtudes sus impulsores destacaban, la disminución de tiempo en la declaratoria de sentencias.

Juárez argumenta que tampoco ha contado con la asistencia de peritos especializados que puedan proveer a su defensa de evidencias científicas para contradecir las investigaciones y pruebas aportadas por el Ministerio Público, con la intención de comprobar su responsabilidad en la comisión de los delitos.

Después de algunos meses en prisión, Rufino Juárez se quedó sin la asistencia del defensor de oficio que le había sido asignado. A causa de falta de recursos económicos, dice no poder contratar a un litigante privado que lo defienda.

A pesar de haber estudiado leyes, Rufino Juárez descarta encabezar su propia defensa, por carecer de recursos materiales y económicos para planear una buena estrategia desde la cárcel; sin embargo, le causa suspicacia el hecho de que en varias oportunidades hayan sido retrasadas sus audiencias, y al preguntar el porqué del retraso, los servidores públicos del juzgado señalaran que se debe a “instrucciones de sus superiores”.

Lo que sí tiene claro es el principal argumento en el que debe centrarse su defensa: desestimar las posibles pruebas que el gobierno del estado tenga en su contra, así como los testimonios aportados por las familias y amigos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, en donde lo señalan como responsable del ataque a la caravana.

Tras su llegada a Ixcotel, Rufino perdió, además de su libertad, esa mirada soberbia, altiva y desafiante que lo caracterizaba. También desapareció su prominente abdomen.

En la prisión, Juárez recuerda el inicio de sus procesos penales: las audiencias se llevaban a cabo en el Juzgado de Justicia Especializada para Adolescentes, ubicado en la colonia Reforma, a pocos minutos del penal; sin embargo, se cambió la sede al Juzgado de garantías de Huajuapán.

Para asistir a las mismas, Rufino es trasladado en la batea de un vehículo oficial del penal, y permanece inmovilizado, esposado a un tubo de metal, por un lapso de más de dos horas, que es lo que dura el trayecto de la ciudad de Oaxaca a la mixteca.

“El gobierno de Gabino Cué nos trata como animales”, sentencia el reo mientras se frota las manos en el rostro y comienza a narrar lo que le sucedió pocas semanas después de llegar al penal.

Antes de ser ubicado a la celda siete, Rufino Juárez pasó los primeros meses de reclusión en la zona preventiva del penal. Una noche, un reo del que nunca supo su nombre, se acercó para advertirle del peligro que corría. Le confió que el gobierno del estado ofrecía 80 mil pesos por su cabeza y le aconsejaba que tuviera mucho cuidado. Para su fortuna, Juárez Hernández nunca ha sido agredido al interior del penal, hasta ahora.

Curiosamente, y a consecuencia del tiempo libre que Rufino tiene en la cárcel, el ejercicio constante que realiza le ha permitido mejorar considerablemente de una añeja molestia en el brazo izquierdo, producida por un accidente automovilístico.

Mientras transitaba en la autopista México-Querétaro, el 12 de julio de 2009, el vehículo en el que viajaba Rufino Juárez fue embestido por un tráiler, provocando una volcadura. El accidente vial le produjo varias fracturas en el brazo izquierdo y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Los doctores lograron mantener en funcionamiento la extremidad, a través de una placa de metal que le colocaron.

Con una sonrisa en los labios, Rufino se dice feliz de poder levantar hasta 80 kilos de peso.

Sentado en el catre, en ese diminuto espacio desde donde ve florecer y marchitarse los días, Juárez afirma que todas las organizaciones con presencia en la zona triqui poseen armas.

Sostiene que en varias ocasiones la Ubisort solicitó al gobierno federal y estatal, el desarme de la zona, sin que hasta la fecha haya avances al respecto; sin embargo, se dice convencido de que “una familia triqui necesita un arma para defenderse de las otras organizaciones...es más probable que consigan dinero para hacerse de un arma que para comprar tabiques”.

A pregunta expresa de cómo consiguen armas los indígenas triquis, Rufino suspira y con aire sereno declara: “a mí me han dicho que las armas llegan a través del mismo gobierno, por los puertos, principalmente por la zona de Acapulco”, y niega ser responsable o haber incitado la violencia que aún se mantiene en la región.

Pendiente del teléfono y expectante de que en cualquier momento entre una llamada por la línea, el Tío permanece sentado a un costado de la celda siete. Desde ahí, con ambas manos sobre su abultado abdomen, ve pasar a otros reos que se acercan a él; le estiran la mano y lo saludan vehementemente; otros más se acurrucan a su lado para confiarle sus secretos o el avance de sus procesos penales.

Sobre los otros dos asesinatos que le imputan, Rufino también se dice inocente: “el gobierno me ha dicho que acepte mi participación en los hechos, pero yo no puedo aceptar algo que no hice. Ante los ojos de Dios, sé que no lo hice. No tomé ninguna arma para quitarle la vida a alguien”, afirma con tono agitado mientras cierra el cuaderno extendido en el catre y lo acomoda bajo su biblia, un libro grueso con forro plastificado y cierre en el extremo.

En alguna ocasión, su exabogado le comentó que si se declaraba culpable, podrían ofrecerle la pena mínima por cada asesinato: 20 años. De no hacerlo así, Rufino podría ser condenado hasta por 40 años de prisión por cada homicidio que se le imputa, y la pena total, podría alcanzar hasta 160 años de condena.

Rufino se confiesa a la espera de su próxima audiencia: “la moneda está en el aire. No queda más que encomendarse a Dios”, comenta con la mirada fija en un recuerdo que debe encontrarse a cientos de kilómetros de ese diminuto espacio donde ve consumirse el tiempo.

Su futuro carece de certeza alguna. Juárez Hernández no sabe si sigue al frente de la Ubisort, o si su liderazgo ha sido reemplazado; sin embargo, poco le preocupa, afirma no tener interés de encabezar una organización que le quitó a su hermano y su libertad.

“La Ubisort sí es una organización priísta, pero no significa que haya tenido todo el respaldo de Ulises Ruiz Ortiz. También se entiende que el MULTI es perredista”, argumenta al ser cuestionado sobre su cercanía con el grupo de confianza del ejecutivo estatal, recordado por haber ordenado el uso de fuerza pública para desalentar las protestas sociales y magisteriales en el 2006.

Desde la desalentadora penumbra de su habitación, el indígena triqui se dice convencido de tener que luchar por recuperar su libertad: añora la lluvia, el sazón de su esposa, poder cortarse el cabello cuando así le plazca, ver crecer a su hijo; añora el olor de la hierba cuando sus pies la aplastaban mientras caminaba por el monte.

Un ligero viento hace llegar hasta la habitación de Rufino el olor de chorizo friéndose; en el patio de la prisión, algún preso hastiado de la cotidianidad enciende una grabadora. Al ritmo de una cadenciosa bachata, una delicada voz femenina entona la frase: “y vuela, vuela, por otro rumbo, ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo”.

Las cortinas de las habitaciones de los demás presos de la celda siete ondean para deshacerse, con una mirada rápida y furtiva, de la curiosidad que despertó la figura intrusa. Al bajar por las escaleras de caracol para salir de la celda siete, Rufino y la visita avanzan por el estrecho pasillo. Al final de él, la figura de un hombre de mediana estatura, con pantalón de mezclilla azul, camiseta blanca y cinturón café, friega unos trastes con jabón. Varios tatuajes adornan sus musculosos brazos.

“Quiubo”, dijo Rufino a modo de saludo. “Buenas”, contestó el hombre sin girar la cabeza para verlo.

“Ese cuate era escolta de José Murat. Está aquí acusado de homicidio”, murmuró Rufino a la visita, mientras caminaban rumbo al patio y le señalaba el pasillo que la llevaría de regreso al portón gris de metal, que sirve de entrada.

**Impunidad: única constante a cuatro años del asesinato de
Bety Cariño y Jyri Jaakkola**

- **En 2013, Oaxaca ocupó el tercer lugar a nivel nacional, en agresiones contra defensores de derechos humanos con 15.4%**

Un muro de piedras de más de tres metros de altura resguarda la entrada de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ubicada sobre avenida Universidad. Tras unas puertas de vidrio, un amplio patio flanqueado por un edificio horizontal, a la derecha, y un estacionamiento, a la izquierda, alberga un puñado de árboles de finas ramas.

La edificación de enfrente, compuesta por decenas de ventanas en su parte superior, posee gruesas columnas rectangulares que contrastan con la pequeña escalinata de delgados peldaños que las preceden.

El lunes 28 de abril de 2014, en el salón *Digna Ochoa*, ubicado al fondo de un amplio vestíbulo, la CDHDF rindió un homenaje a Bety Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, defensores de derechos humanos asesinados en Oaxaca.

Un día antes del homenaje, se habían cumplido cuatro años de la emboscada perpetrada por un grupo armado que atacó la caravana humanitaria en la que participaban Cariño y Jaakkola, y que pretendía llevar alimentos y medicinas a la comunidad de San Juan Copala, que para entonces, llevaba meses sitiada.

Ante un auditorio de no más de 40 personas, compuesto en su mayoría por amigos y familiares de Bety, Perla Gómez Gallardo, titular de la dependencia, recordó que ambos activistas perdieron la vida “en el ejercicio de su trabajo, comprometido y solidario”.

“A cuatro años de su asesinato, el crimen sigue impune, como impunes siguen casi la totalidad de los casos en donde se atenta contra las y los defensores de derechos humanos en nuestro país”, señaló Gómez, sentada a lado de Omar Esparza Zárate, viudo de Bety Cariño.

Subrayó que olvidar la memoria y trabajo de los activistas significaría no recordar que fueron asesinados en la lucha por mejorar las condiciones de vida y preservar la dignidad de los pueblos indígenas de nuestro país.

En el homenaje, la también doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que de acuerdo a la Relatoría para la atención a defensoras y defensores de derechos humanos de la comisión, se registraron en 2013, 427 agresiones a defensores humanos a nivel nacional; de ellas, 63 por ciento fueron contra hombres, 22 por ciento a grupos y organizaciones, y 15 por ciento contra mujeres.

Del total de las agresiones contabilizadas, 45 por ciento fueron detenciones arbitrarias, seguidas de hostigamiento, con 24 por ciento; agresiones físicas en un 19 por ciento; 7.9 por ciento de amenazas de muerte, 7.2 por ciento de desaparición de personas, 6.3 por ciento de homicidios y 5.3 por ciento de allanamiento.

Entre las entidades federativas donde más agresiones contra defensores de derechos humanos se registraron, Oaxaca ocupa el tercer lugar con 15.4 por ciento; solo por debajo del Distrito Federal que concentró el 27 por ciento, y Guerrero, en segundo lugar, con 19.2 por ciento.

Gómez Gallardo, primera mujer al frente de la CDHDF, subrayó que la impunidad sigue siendo un factor que permite que se registren ese tipo de abusos.

“Llega un punto en que la omisión se convierte en responsabilidad; dejar de hacer propicia este clima de impunidad... es un compromiso ético, una exigencia el que haya condiciones de defensa en nuestro país, y que no haya violación de derechos humanos”, puntualizó.

Tras un minuto de aplausos en memoria de los activistas asesinados, la sala quedó completamente a oscuras por un instante. Al fondo se encendió una pantalla de cuyas bocinas emergió una voz tímida y pausada. Era la voz de Omarcito, hijo de Bety, que sin que la cámara enfocara su rostro, recordaba la vida

cotidiana con su madre: “creo que le gustaba el pollo porque todos los días comíamos pollo”, dijo.

Las siluetas de dos niños sentados en primera fila comenzaron a moverse inquietas. Con movimientos pausados y una risa casi imperceptible, se juntaron uno al otro sin poder ocultar la curiosidad que escucharse a sí mismos en la tele les producía; eran Omar e Itandehui Esparza Cariño.

Ita, de largo cabello negro y lacio se acomodaba sus lentes de grueso armazón para ver a su hermano y a ella misma contar sobre el postre que les hacía Bety: zanahorias rayadas con crema y azúcar. “A ella y a mí nos encantaba eso”, decía la Ita digital mientras el Omarcito real permanecía bajo la gorra de una sudadera café que le cubría casi la mitad del rostro.

En el video también se pudo observar el mensaje de Eeva Lenna, madre de Jyri Jaakkola, con el que recordaba la pérdida de su hijo: “cuatro años largos hemos vivido con tristeza, con la añoranza de nuestro querido hijo; cuatro años de lucha por justicia, de negociaciones con las autoridades mexicanas, cuatro años de palabras huecas y promesas vacías de las autoridades... Nada puede devolvernos a nuestro hijo, pero para nosotros, como víctimas, la justicia es lo más importante.

“El juicio contra el líder del grupo Ubisort ya está en proceso, pero no sabemos cómo va avanzando. Como víctimas y ciudadanos europeos, no podemos aceptar el hecho de que los otros probables culpables todavía anden libres; hay órdenes de aprehensión, pero ni las autoridades del gobierno de Oaxaca, ni del gobierno federal, han realizado estas detenciones. La justicia ofrece a las víctimas la posibilidad de recuperarse, por eso es tan importante para nosotros. También la justicia ofrece a la sociedad, la posibilidad de mantener sus normas y sus ideas. No hay conciliación sin justicia, por eso es importante para la sociedad mexicana que vive con impunidad”, decía Eeva en su mensaje grabado en Finlandia.

A la exigencia de justicia de la madre de Jaakkola, se sumó la de Raül Romeva, vicepresidente del Grupo de los Verdes, en el Parlamento Europeo: “ya han pasado cuatro años desde el asesinato de Jyri Jaakkola y Bety Cariño; ya es

tiempo de que acabe la impunidad en México. Basta de sufrimiento y basta de un gobierno que no se preocupa por sus ciudadanos y residentes. Las relaciones entre la Unión Europea y México se basan en el respeto a los derechos humanos. Mientras continúe la impunidad, estos derechos se pisan con los pies y esto perjudica a todos, también a nuestras relaciones. Por eso hago un llamado al gobierno de actuar ahora y que no espere ni un minuto más”.

Al concluir el video tomó la palabra Omar Esparza Zárate. Vestido con una camisa blanca, de manta, narró el coraje, rabia e impotencia con las que han tenido que vivir él y su familia desde la tarde del 27 de abril de 2010 en que recibió estupefacto la noticia de la muerte de Bety, madre de sus hijos.

“Durante estos cuatro años no hemos tenido respuesta sobre el caso, el gobierno de Oaxaca, desde Ulises Ruiz Ortiz, hasta este gobierno de Gabino Cué, no ha sabido responder a las exigencias de justicia”, declaró el también activista del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

Esparza Zárate denunció la relación que los gobiernos de Oaxaca han establecido con el grupo paramilitar que mantiene en estado de sitio a San Juan Copala, centro ceremonial de la zona triqui, y afirmó que las autoridades han signado “acuerdos políticos” para conservar una “paz velada” en la región, a cambio de no detener a los responsables de los asesinatos y llevarlos ante la justicia.

En el homenaje, Omar Esparza anunció su decisión de iniciar, al día siguiente, una huelga de hambre frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR): “más allá de ser una acción de desesperación, es una acción para confrontar al Estado; es confrontar a las instituciones de este gobierno, tanto del gobierno federal, como del gobierno de Oaxaca, y demostrar que no están a la altura de esta sociedad; que no responden al tema de justicia, no solamente en el caso de Bety y de Jyri, sino de la sociedad mexicana”.

Como los familiares y amigos de Antero Jaakkola, Omar exigió que el Estado mexicano detenga y presente, ante las instancias pertinentes, a los asesinos de ambos activistas para que sean juzgados y sentenciados: “queremos a los

asesinos en la cárcel y los queremos ya. Tienen nombre, tienen apellido y tenemos sus rostros. Los vamos a hacer públicos para que la sociedad nos ayude a ubicarlos y puedan ser detenidos. Hacemos ese llamado a la sociedad civil.”.

Karla Michel Salas, una de las abogadas de la familia Esparza Cariño y miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), advirtió que de acuerdo a la Red Nacional de Defensoras, el 98% de los crímenes cometidos en contra de defensoras, se encuentran en la impunidad.

“Evidentemente, el caso de Bety Cariño y de Jyri Jaakkola no es la excepción; sin embargo, a diferencia de otros casos de violaciones a derechos humanos y ataques contra defensoras y defensores, aquí sabemos quiénes son los responsables, sabemos dónde viven y en algunos casos, también sabemos dónde trabajan. Esa información la tienen las autoridades mexicanas”, argumentó la joven litigante, ataviada en un vestido de tela negra, bordada con vistosas flores de colores, a la usanza y tradición de los huipiles típicos del Istmo de Tehuantepec.

Mientras Salas exponía sus argumentos, otros activistas conectaban cables y preparaban una videollamada. Una voz tenue que hablaba un español pausado inundó la sala. De pronto, todas las miradas se fijaron en la pantalla de una computadora ubicada a la izquierda del salón; la imagen de una mujer rubia y de ojos azules apareció. Era Eeva Leena.

En su comunicación desde Finlandia, Eeva agradeció en vivo a los presentes por recordar y honrar la memoria de su hijo: “Jyri y Bety trabajaban por la vida. En este trabajo fueron asesinados. Juntos perdieron la vida, pero su trabajo va a continuar. Nosotros, aquí en Finlandia, ustedes en México, todos vamos a continuar su trabajo. Nunca vamos a olvidar a Jyri, nunca vamos a olvidar a Bety. Muchas gracias”.

Las palabras de Eeva terminaron de diluirse con un fuerte aplauso de los presentes.

Miguel Álvarez Gándara, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), reconoció el gran gesto humanitario y de solidaridad que tuvo Jyri antes de ser asesinado: “él murió abrazando a Bety. Pudo haber corrido como otros de la camioneta que se bajaron y corrieron. Eso no lo podemos dejar de señalar y agradecer. En Jyri, hay un referente de solidaridad”.

Teniendo como fondo una enorme lona con los rostros impresos de Bety y Jyri, y con la leyenda “A cuatro años de impunidad, exigimos la detención de los asesinos”, afirmó que la arbitrariedad en la investigación de los crímenes de ambos activistas no solo refleja la falta de voluntad política y de responsabilidad legal del Estado, sino que también evidencia la capacidad de los grupos de poder de diseñar golpes certeros a procesos e iniciativas locales que no les convienen: “aquí no solo se golpeó a la caravana, a Bety, Jyri y sus familias, también se golpeó la solidaridad”.

En su intervención, David Peña Rodríguez, abogado del caso y quien hasta junio de 2014 se desempeñó como Coordinador general de vinculación estratégica de la CDHDF, declaró: “llevamos cuatro años de trabajo muy intenso, cuatro años de amenazas, cuatro años de trabajo de alto riesgo en donde el principal adversario ha sido la autoridad; en donde nuestro principal enemigo sigue siendo la autoridad, ahora la federal, que protege a los grupos responsables”.

Tras agradecer a los presentes haber acompañado el homenaje, concluyó el acto protocolario. Las cámaras fotográficas y celulares salieron de los bolsillos de familiares y amigos, que buscaron preservar el momento de la reunión.

Omar caminó lentamente hacia la puerta de salida con sus dos hijos mayores de la mano; a su lado, una esbelta mujer de cabello claro y ligeramente rizado cargaba con un rebozo a un pequeño bebé de seis meses de edad. Omar tiene una nueva razón para seguir su lucha.

El calvario de la justicia en México

La mañana del 29 de abril, bajo el intenso sol de la ciudad de México, un grupo de 50 personas buscaba refugio en la escasa sombra que procuraban las ralas copas

de los árboles, mientras esperaba la llegada de dos contingentes que se unirían a la protesta frente a las oficinas de la representación del gobierno de Oaxaca en la ciudad de México, ubicadas en la colonia Nueva Anzures.

Omar Esparza Zárate permanecía de pie a un costado del autobús foráneo que había transportado a los manifestantes. Hablaba por celular, indicaba a la persona que lo escuchaba, las avenidas que habría de pasar para encontrar la dirección y arribar a la cita.

Quienes llegaban a pie, se acercaban a saludarlo o a cierta distancia estiraban el brazo y movían la cabeza con un gesto de solidaridad, como diciendo “aquí estamos”. Él, devolvía el saludo con una sonrisa amplia o iba a su encuentro para estrechar a los compas, como cariñosamente llama a los activistas.

Tres patrullas de tránsito y una motocicleta ya se encontraban en el lugar. Una oficial, de pantalón negro y camisa blanca con un distintivo amarillo fluorescente, reportaba vía radio la concentración en la zona. Las puertas de la representación seguían abiertas y la gente entraba y salía sin restricción alguna.

Algunas personas comenzaron a sacar mantas con el rostro de Bety Cariño y Jyri Jaakkola. La demanda era fácil de captar: justicia para Bety y Jyri y castigo para sus asesinos.

Los contingentes arribaron. Más de cien personas se apostaron en la puerta de la oficina. Una comisión se dio a la tarea de colgar una enorme lona con el título de “Se buscan. Asesinos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola”, donde exhibían las fotos y nombres de los presuntos responsables del asesinato de los activistas.

Una joven batía engrudo con la mano para después pasarla en la fachada de la representación y colocar un afiche con el rostro, nombre y número de expediente penal que vinculaba al presunto asesino con el caso. Un “Se busca”, completaba el diseño del cartel, muy parecido a los que se muestran en las películas hollywoodescas sobre vaqueros del viejo oeste.

Esparza Zárate tomó el micrófono y alzando la voz reclamó: “a cuatro años del asesinato de la compañera Bety, no hay uno sólo de los responsables en la cárcel.

“Este país está lleno de injusticias y de impunidad, porque las instituciones no saben hacer su trabajo; porque no gobiernan para nosotros como pueblo, porque no han sido capaces de atender las demandas de nuestra gente. Como familia, nosotros llevamos cuatro años demandando justicia...estamos cansados de que el gobierno de Oaxaca solamente nos esté engañando. Los asesinos de Bety Cariño trabajan para el gobierno del estado, algunos trabajan en la Procuraduría del estado y otros trabajan en los municipios. Son funcionarios públicos. Otros asesinos de Bety trabajan en el gobierno federal; en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI). Eso quiere decir, que desde el gobierno federal y estatal se solapa y se protege a aquellos que han lastimado a nuestras familias”, sentenció.

Narró la serie de encuentros que durante todo ese tiempo ha sostenido con dependencias estatales y federales, en la búsqueda de la aplicación de todo el peso de la ley contra los asesinos de la madre de sus hijos; incluso señaló, la labor de investigación que como familiares han hecho para dar con la identidad y paradero de los presuntos asesinos, sin que las dependencias correspondientes hayan ejecutado sus aprehensiones.

En su búsqueda de justicia, demandó la solidaridad de instancias internacionales, sin que por ello se hayan generado avances en la investigación del caso.

“Estamos cansados, como muchas y muchos de ustedes, estamos hartos de mentiras, de gobiernos corruptos, demagógicos...la justicia en este país, es un calvario. Las instituciones están corrompidas, los jueces se venden, la gente de a pie no accede a la justicia porque son trámites burocráticos donde no encontramos quién atienda nuestras demandas, nuestro dolor.

“El gobierno de Oaxaca es un gobierno lleno de mentiras que no representa el clamor de nosotros como pueblo. El gobierno de Oaxaca, como muchos gobiernos, acuerda con los asesinos, acuerda con el narcotráfico o el crimen organizado, y muchos de ellos son parte del crimen”, dijo frente al grupo que conocía y compartía su experiencia.

La cortina de las oficinas de la representación del gobierno de Oaxaca había sido cerrada. Los funcionarios públicos se asomaban cautelosamente por las ventanas de la parte superior para observar al grupo que había desplegado tres o cuatro lonas más.

Los elementos de tránsito habían solicitado refuerzos que de inmediato acudieron a la llamada. Dos cuadras atrás, un elemento desviaba el flujo vehicular que pretendía pasar por la calle de Shakespeare, lugar de la manifestación. Un hombre vestido de traje oscuro arribó en motocicleta. Instantes después, policías capitalinos harían lo propio.

Omar Esparza anunció que iniciaría una huelga de hambre frente a la PGR y pidió a los manifestantes marchar a su lado para instalarse.

“Hacemos responsable al gobierno de Oaxaca, al gobernador, Gabino Cué, de nuestra integridad física; hacemos responsable al presidente de México, Enrique Peña Nieto, de nuestra integridad física. Queremos decirles que esta es una confrontación con el Estado, no venimos a dolernos, nos venimos a pedirles o a suplicarles; venimos a exigirles, porque ese es nuestro derecho... Están en la obligación de detener a los responsables, no venimos a pedir caridad, no venimos a expresar miserias, venimos por algo que es de nosotros, la justicia por la que clamamos, la dignidad que tenemos como pueblo y que no vamos a negociar”.

¡Fuerza compañeros, fuerza Omar!

Los policías de tránsito pedían que se hicieran dos vallas para avanzar, pero los manifestantes se desplazaban como podían en la estrecha calle que, además, se había llenado de patrullas y motocicletas.

A la vanguardia, cuatro hombres sostenían una lona de varios metros de longitud en la que estaban plasmados los rostros de los activistas asesinados. “A cuatro años del asesinato exigimos justicia verdadera”, se leía en la manta que ocupaba casi todo lo ancho de la calle. Justo atrás de ellos, marchaba Omar acompañado de representantes y líderes de organizaciones que se sumaron a la protesta.

Las consignas y gritos de los manifestantes atrajeron las miradas curiosas de los vecinos de la clasemediera colonia de la delegación Miguel Hidalgo que no daban crédito a lo que veían sus ojos: campesinos con pañuelos en mano enjugándose el sudor del rostro bajo el sombrero descolorido que poco o nada los cubría; mujeres con sus hijos en brazos o caminando despreocupadamente a media calle mientras les hacían valla los uniformados, muchachas en huaraches de plástico que seguramente terminarían con ampollas en los pies por el contacto con el ardiente asfalto.

Curiosos se asomaban sigilosos por las ventanas, los más atrevidos abrían las puertas y se posaban a la sombra de los toldos de comercios de la zona: salones de belleza, una camisería y un expendio de vinos eran los más próximos.

Los automovilistas pitaban desesperados por avanzar mientras los uniformados les pedían que esperaran el paso del contingente por la calzada Melchor Ocampo, para avanzar unas cuadras e incorporarse a Paseo de la Reforma, a la altura de la fuente de la Diana Cazadora.

Los más desesperados dejaban como recuerdo una que otra mentada de madre a los policías, otras tantas a la caravana que avanzaba.

En Reforma se sumaron al resguardo de los manifestantes más elementos de tránsito. El contingente avanzó por el carril central en dirección al norte. Por momentos se extendía a los cuatro carriles; Reforma, la avenida más importante de la ciudad de México, en esos momentos era completamente suya.

Por radio se comunicaban los elementos de tránsito y acordaron replegar la marcha a tres carriles. La vanguardia y el resto de los manifestantes se contrajeron para dar paso por el extremo del carril izquierdo a los vehículos que uno por uno avanzaban lentamente junto a ellos.

A la altura del Ángel de la Independencia y de Insurgentes los uniformados se distribuyeron para detener cualquier avance de los automovilistas y asegurar la integridad de quienes avanzaban. Los reporteros, fotógrafos y camarógrafos

caminaban metros adelante de la vanguardia en la espera del momento adecuado para “la foto”.

La marcha pasó frente a las oficinas de la PGR, pero no se detuvo; continuó metros más adelante para dar vuelta en U por una de las laterales y llegar a la dependencia. Afuera de un café, una joven con vestido negro animaba al contingente: ¡fuerza compañeros, fuerza Omar!, gritaba mientras sostenía su teléfono celular y grababa la manifestación que estaba a punto de llegar a su destino.

Ya desde la lateral, el contingente vio cómo se reestableció la circulación sin problema alguno.

No había terminado de arribar la caravana cuando varios funcionarios de la PGR salieron al encuentro de Omar, quien les explicó los motivos de la manifestación. Por radio repetían las palabras del activista mientras tomaban nota de los nombres de las organizaciones que marcharon, las leyendas de las lonas y preguntaban a Esparza detalles de su demanda.

Mientras Omar era interrogado, unos jóvenes colgaban las lonas en la reja de la PGR. “Clausurado por incompetentes”, se leía en una de ellas. El resto del contingente se sentó a la orilla del camellón y en las bancas que encontró cerca. Los niños pedían agua, ir al baño o una sombrilla donde resguardarse de los rayos de sol que los quemaban.

Los funcionarios de la PGR entraban y salían de la dependencia. Propusieron a Omar y a su abogada formar una comisión de cinco personas para que pudieran entrar con algún funcionario de medio pelo. El procurador general de la República, Jesús Murillo Káram, no se encontraba en su oficina.

Mientras formaban la comisión y los activistas entregaban alguna identificación oficial para poder ser atendidos en la dependencia, una camioneta llegó con varias maderas para formar un templete. Una carpa era armada y un juego de bocinas esperaba a ser conectado al micrófono que recientemente había sido desenvuelto del plástico.

Después de más de una hora sin poder entablar un diálogo directo con algún funcionario de la PGR, Omar tomó el micrófono para dirigirse al contingente que lo había acompañado.

“Queremos una reunión con el procurador, ya no queremos mediadores. La Secretaría de Gobernación, a través de (Luis Enrique) Miranda (subsecretario de gobierno de la Segob), ha fracasado porque ni siquiera la cabeza política de este gobierno de la República, ha sido capaz de hacernos justicia; nos ha dejado la carga a los familiares, para que nosotros les digamos dónde están los asesinos, cuando ellos están obligados a brindarle a la sociedad mexicana protección y seguridad”, reclamaba ante los ojos atónitos de los guardias de seguridad que se limitaban a mirar desde el interior de la reja.

“A pesar de tener todas las pruebas que desde la representación legal y desde las víctimas les han llegado a las autoridades, nos vemos obligadas y obligados a estar aquí, cuatro años después de los crímenes. Hay que señalar que nos han llevado a que Omar tome una decisión sumamente difícil; una decisión que es un último recurso, el inicio, el día de hoy, de una huelga de hambre”, dijo Karla Michel Salas.

“Omar no está en huelga de hambre porque quiera estarlo, al igual que tampoco estamos aquí porque queramos estar, sino porque nos hemos visto obligados a utilizar estos recursos que tenemos desde la sociedad civil para exigir que las autoridades hagan su trabajo. ¿Cómo se puede resolver?, muy sencillo: investiguen, detengan a los responsables, enjuícienlos; ya tienen sus nombres, ya tienen sus trabajos, ya tienen sus domicilios, ya tienen sus rostros. La única forma en la que Omar, y así lo ha manifestado, levantará esta huelga de hambre, es que los responsables sean detenidos...la resolución del caso de Bety y Jyri, puede ser un indicador de que en nuestro país, las cosas pueden mejorar”, agregó la abogada del caso, mientras terminaban de armar la carpa que serviría de refugio a Omar, por tiempo indefinido.

Ni Omar ni sus abogados hablarían, ni ese día ni otro, con Murillo Káram.

Esa misma tarde inició la huelga de hambre junto con cinco personas más, entre ellas Jorge Albino, promotor y representante del municipio autónomo de San Juan Copala.

El día nueve de la huelga de hambre Omar ya resentía los estragos de no probar bocado, pero no cejaba en sus intenciones: “estoy aquí hasta las últimas consecuencias, si tengo que morir en esta huelga de hambre, lo voy a hacer para hacerle entender al gobierno mexicano que es su obligación, su trabajo, cumplir con la sociedad mexicana, sobre todo en el tema de la aplicación de justicia para miles de mexicanos que lo demandamos...no me voy a ir si no es con la plena convicción de que lo que estamos demandando se va a cumplir. Si me tengo que morir aquí, lo voy a hacer. Vengo dispuesto a eso”, declaró.

En los días que estuvo en huelga de hambre solamente pudo reunirse con Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora jurídica y de asuntos internacionales, también oaxaqueña, y con David Garay Maldonado, titular de la Unidad de Gobierno de la Segob. Desde el campamento instalado afuera de la PRG, Omar sostuvo, además, varias pláticas vía telefónica con el procurador de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, designado para el cargo por el Congreso del estado en noviembre de 2013, tras la renuncia de Manuel de Jesús López.

A cuatro años del asesinato de Bety Cariño, Omar seguía apostando por las instituciones; “no estamos yéndonos a tomar la justicia por nuestra propia mano, estamos agotando todas las instancias nacionales, internacionales, para exigir justicia”.

Luego de 16 días en huelga de hambre, Omar Esparza y siete personas más que se sumaron a su iniciativa, decidieron levantar la huelga, tras la firma de un documento en que autoridades de Oaxaca y federales, se comprometieron a resolver el caso.

Consideraciones finales

Tras el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, la violencia en la zona triqui siguió presente y, por algunos meses, incluso se agudizó.

A pesar de que el ataque a la caravana y la difusión del hecho permitieron visibilizar la problemática de los habitantes de San Juan Copala, su realidad y calidad de vida no varió significativamente.

Por varios días, la atención de ciertos medios de comunicación, nacionales y extranjeros, se centró en la comunidad; pero a medida que fue dejando de ser nota, y que nuevos temas se posicionaron en la agenda pública –como el proceso electoral de Oaxaca en julio de 2010 que trajo como consecuencia la elección del primer gobernador no priísta- esa atención se diluyó paulatinamente.

Luego del intento fallido de un grupo de diputados federales y organizaciones sociales por romper el cerco a San Juan Copala, ningún otro colectivo volvió a organizar un acto similar; por lo que los habitantes de la comunidad estuvieron nuevamente expuestos a ser víctimas de las agresiones del presunto grupo paramilitar con presencia en la zona.

Sin duda, el ataque a la caravana, los asesinatos de los activistas, además de la poca diligencia de las autoridades al investigar la agresión, desalentaron la actividad y labor de otros defensores de derechos humanos que intentaron mantener el tema vigente a través de pronunciamientos y exigencias públicas de justicia.

Desde que se abrió el expediente de la causa penal, organizaciones civiles, familiares de Bety y Jyri, además de varios sobrevivientes al ataque, identificaron a una de las organizaciones políticas con presencia en la zona como la responsable del ataque: la Ubisort.

Sin embargo, las investigaciones de dependencias de justicia no se centraron en confirmar esos testimonios, lo que fue interpretado por familiares de los activistas como tolerancia, e incluso respaldo de la administración estatal, todavía encabezada por Ulises Ruiz Ortiz, al grupo paramilitar.

Tras concluir este reportaje demostrativo, en el que la descripción y narración nos ayudaron a recrear el ambiente que se vivió previo, durante y posterior al ataque a la caravana, conocer con mayor profundidad la pasión y los motivos que impulsaban a Bety y Jyri a comprometerse con la defensa de los derechos humanos, así como los avances en la investigación, puedo decir que sólo hay una constante en todo el proceso: impunidad.

La impunidad es uno de los más graves problemas que aqueja a nuestro país, y uno que el Estado mexicano no se ha empeñado en solucionar.

El poco o nulo interés, la falta de capacidad, e incluso la negligencia de las dependencias de impartición de justicia, son el caldo de cultivo perfecto para que la gran mayoría de crímenes queden impunes.

Desgraciadamente, el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola es sólo uno más de los que engrosan esa cifra.

La burocracia del sistema de justicia en nuestro país permite que dependencias de cualquier nivel de gobierno evadan sus responsabilidades, incumplan a cabalidad sus funciones y estén lejos de impartir justicia.

Miles de familias mexicanas continúan en un duelo interminable ante la omisión de un gobierno que no les permite siquiera llorar a sus muertos.

La impunidad que se vive cotidianamente permite que grupos de poder al margen de la ley -incluso otros constituidos de manera legal- opten por la represión, amedrentamiento o amenazas contra cualquier persona que consideren un peligro para sus intereses.

El uso político que se hace de las dependencias de justicia produce un grave impacto en la sociedad, y la desgarrar. Los acuerdos o intereses que impulsan este tipo de actos calculadores, egoístas y antiéticos van en contra del bienestar de la ciudadanía. Funcionarios públicos miden los tiempos en que es más rentable aplicar la ley, y estos tiempos generalmente coinciden con los electorales.

Los abusos que se comenten contra defensores de derechos humanos y que van desde agresiones físicas, campañas de difamación, detenciones ilegales o arbitrarias, amenazas, desapariciones forzadas e incluso el asesinato, se generan en un contexto de criminalización y estigmatización por parte de autoridades.

De acuerdo con un informe publicado por la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, más del 98 por ciento de las agresiones contra defensores de derechos humanos no son debidamente investigadas y mucho menos sancionadas.

A pesar de que en abril de 2012 fue aprobada la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que actualmente la Segob tiene la facultad de aplicar el Mecanismo de protección, en nuestro país siguen registrándose agresiones contra activistas y comunicadores, incluso con mayor frecuencia, que a través de su labor muestran la podredumbre del sistema político y jurídico mexicano.

El panorama es complicado y no se vislumbra un cambio sustancial en los próximos meses; sin embargo, los periodistas y comunicólogos tenemos la oportunidad y la obligación de reivindicar el quehacer social del periodismo. Es a través de la difusión de la información que podemos sensibilizar a la sociedad, involucrarla y promover su participación activa en la toma de decisiones públicas.

Una sociedad informada se traduce en una sociedad responsable, activa, con propuestas y demandas propias; una sociedad informada se traduce en una verdadera democracia.

Fuentes de consulta

Bibliografía:

López Bárcenas, Francisco, *San Juan Copala, dominación política y resistencia popular. De las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio autónomo*. México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2009, pág. 49.

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 33.

Cibergrafía:

Agenda feminista, Boletín feminista la trenza, Defensoras de DDHH, “Organizaciones de Mujeres condenan Asesinato Defensora en Oaxaca. Denuncia de organizaciones feministas y de mujeres por la ejecución extrajudicial de la defensora de los derechos humanos Beatriz Cariño”, Asociación Civil Feminista Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, <http://consorciooaxaca.org.mx/organizaciones-de-mujeres-condenan-asesinato-defensora-en-oaxaca/#more-868>, 13 de mayo de 2014.

Appel, Marco, “El asesinato de Jyri Jaakkola y el desinterés en equipo de EPN”, *Proceso*, <http://www.proceso.com.mx/?p=323003>, 19 de octubre de 2012.

Appel, Marco, “Informe europeo: Los crímenes de San Juan Copala, puras disculpas”, *Prisma Internacional, Proceso*, <http://www.proceso.com.mx/?p=290020>, 2 de diciembre de 2011.

Appel, Marco, “Posible demanda a Ulises Ruiz en Finlandia por caso Jaakkola”, *Prisma Internacional, Proceso*, <http://www.proceso.com.mx/?p=340273>, 26 de abril de 2013.

Camacho, Zósimo, “Grupo paramilitar priísta impone su ley y amedrenta al Estado”, *Contralínea*, <http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/02/grupo-paramilitar-priista-impone-su-ley-y-amedrenta-al-estado/>, 2 de mayo de 2010.

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 26/2011, “Sobre el caso de la comunidad indígena triqui de San Juan Copala, Santiago Juchitán, Oaxaca”, *Gaceta CNDH* N. 250, <http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Gacetas/250.pdf>, 24 de junio 2014.

Esparza Zárate, Omar, “A un año del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola”, *La Voladora Radio*, <http://lavoladora.net/?p=319>, 24 de abril de 2011.

Matías, Pedro, “Pide parlamento europeo a EPN justicia en caso de activistas asesinados”, *Proceso*, <http://www.proceso.com.mx/?p=321596>, 3 de octubre de 2012.

Matías, Pedro, “Tiene México justicia lenta, ineficaz y ante exigencias, “no pasa nada”: eurodiputadas”, *Proceso*, <http://www.proceso.com.mx/?p=341170>, 6 de mayo de 2013.

Ramírez, Érika, “Paramilitares de Oaxaca en la impunidad: eurodiputadas”, *Contralínea*, <http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/09/29/paramilitares-de-oaxaca-en-la-impunidad-eurodiputadas/>, 29 de septiembre de 2011.

Ramírez, Érika, “¡Si vienen, nos los chingamos!”, *Contralínea*, <http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/01/si-vienen-nos-los-chingamos/>, 1 de enero de 2012.

Redacción, “Brucelas: Debate sobre San Juan Copala”, *Prisma Internacional*, *Proceso*, <http://www.proceso.com.mx/?p=101467>, 18 de septiembre de 2010.

Redacción, “Caravana por la paz puede ser provocación: Díaz Escárrega”, *Crónica de Oaxaca*, <http://www.cronicaoxaca.info/informaciongeneral/5000-caravana-por-la-paz-puede-ser-provocacion-diaz-escarraga.html>, 21 de mayo de 2010.

Redacción, “Gobierno finlandés exige castigo en caso Copala”, *Proceso*, <http://www.proceso.com.mx/?p=106132>, 12 de mayo de 2010.

Rosario Avendaño, Olga, “PGR atrae caso de emboscada en Oaxaca”, *El Universal*, <http://www.eluniversal.com.mx/notas/677213.html>, 1 de mayo de 2010.

Rosario Avendaño, Olga, “Trasladan cuerpos tras emboscada en Oaxaca”, *El Universal*, <http://www.eluniversal.com.mx/notas/676468.html>, 28 de abril de 2010.

Vélez Ascencio, Octavio, “Betty y Jyri, 2 años, Copala, e impunidad”, *Noticias*, <http://www.noticiasnet.mx/portal/general/seguridad/94156-betty-y-jyri-2-a%C3%B1os-copala-e-impunidad>, 27 de abril de 2012.

Hemerografía:

Ballinas, Víctor, “El Estado no protege la vida en Oaxaca: eurodiputadas”, *La Jornada*, 5 de junio de 2010, pág. 18.

Comunicación Social del GPPRD, “Comunicado de prensa N. 025”, 21 de mayo de 2010.

Gaceta Parlamentaria N. 3228, acta “Del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la

violencia en el estado de Guerrero, correspondiente a la reunión efectuada el martes 28 de septiembre de 2010”, viernes 25 de marzo de 2011.

García, Edwin, “Bloqueará Ubisort paso a caravana que encabezará Encinas”, Sistema Radiofónico Informativo, 2 de junio de 2010.

García, Edwin, “Respalda Gobierno del Estado caravana a Copala”, Sistema Radiofónico Informativo, 3 de junio de 2010.

García, Edwin, “Se deslinda Ubisort de presuntos secuestros”, Sistema Radiofónico Informativo, 17 de mayo de 2010.

Gómez Mena, Carolina, “Padres del activista finlandés Jyri Jaakkola piden justicia”, *La Jornada*, 25 de agosto de 2010, pág. 21.

Videografía:

“Bety Cariño sobre el papel de las mujeres en las radios comunitarias”, <http://www.youtube.com/watch?v=yWpo4X2Hibk>, 17 de marzo de 2014.

“Jyri Antero Jaakkola Asesinado en San Juan Copala Oaxaca por paramilitares MULT-Ubisort”, <http://www.youtube.com/watch?v=HMqprgozeTw>, 14 de abril de 2014.

“Jyri Jaakkola y Bety Cariño crimen impune 2/2”, Revista *ContraLínea*, <http://www.youtube.com/watch?v=-aZYqGs7a-g>, 31 de marzo 2014.

Sulmoni, Marisa, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos de Gobixha, Código DH. <http://vimeo.com/64932044>, 12 de marzo de 2014.

Suonio, Torsti, “Jyri Jaakkola interview 01.02.10”, traducción de Miguel Ángel Dávila Espinosa <http://www.youtube.com/watch?v=tMy7yTvFiNU>, 15 de abril de 2014.

Villalvazo, Verónica, “Acuden padres de Jyri Jaakkola a Oaxaca”, <http://www.youtube.com/watch?v=OCTicillriM>, 7 de abril de 2014.

Fuentes vivas:

Esparza Zárate, Omar, dirigente de MAIZ y viudo de Bety Cariño. Entrevista realizada por Cecilia Balderas Carrillo, ciudad de México, 27 de marzo de 2014.

Fragoso Velasco, Carlos Francisco, asesor del senador Alejandro Encinas Rodríguez. Entrevista realizada por Cecilia Balderas Carrillo, ciudad de México, 7 de mayo de 2014.

Gálvez Vivar, Joel, reportero que acompañó a la caravana el 27 de abril de 2010. Entrevista realizada por Cecilia Balderas Carrillo, Huajuapán de León, Oaxaca, 4 de noviembre de 2013.

Juárez Hernández, Rufino, dirigente de la Ubisort, y presunto responsable de los asesinatos de los activistas. Entrevista realizada por Cecilia Balderas Carrillo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 2 de junio de 2014.

Pacheco Boix, Xavier, chofer del senador Alejandro Encinas Rodríguez. Entrevista realizada por Cecilia Balderas Carrillo, ciudad de México, 7 de mayo de 2014.

Ramírez, Érika, reportera que acompañó a la caravana el 27 de abril de 2010. Entrevista realizada por Cecilia Balderas Carrillo, 11 de noviembre de 2013.

Urbano Morales, Fernando, coordinador de CACTUS. Entrevista realizada por Cecilia Balderas Carrillo, Huajuapán de León, Oaxaca, 4 de noviembre de 2013.

Vargas Ruiz, Noé, chofer de la camioneta que iba al frente de la caravana. Entrevista realizada por Cecilia Balderas Carrillo, Huajuapán de León, Oaxaca, 5 de noviembre de 2013.